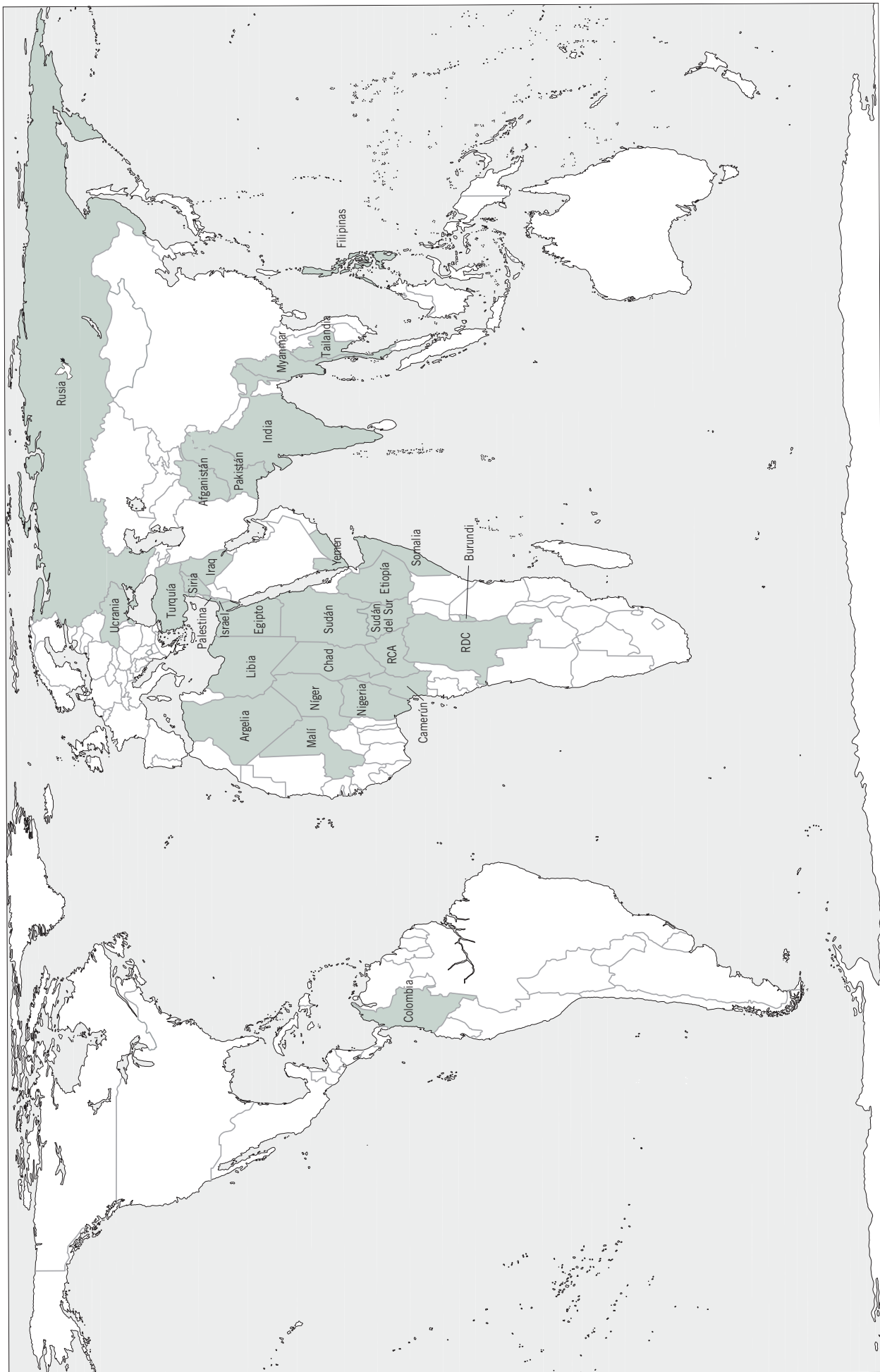


Mapa 1.1 Conflictos armados



Países con conflicto armado

Fin del conflicto armado durante 2017

1. Conflictos armados

- Durante 2017 se registraron 33 conflictos armados, de los cuales 32 seguían activos al finalizar el año. La mayoría se concentró en África (14) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno).
- La situación en Malí se deterioró durante el año, con una intensificación de las múltiples dinámicas de violencia que afectan la zona norte y centro del país y dificultades para implementar el acuerdo de paz.
- Al-Shabaab cometió el peor atentado en la historia de Somalia en medio de un incremento de la presencia estadounidense y de sus acciones contrainsurgentes terrestres y aéreas.
- La estrategia militar sobre Boko Haram desarrollada por Nigeria, Níger, Chad y Camerún, redujo su capacidad y a finales de 2017 el grupo fue desalojado en gran parte de su feudo en Sambisa Forest.
- La escalada de la violencia en Kasai, en el centro-sur de RDC, provocó que se doblara la población desplazada en el país, alcanzando los 4,1 millones, situándose como el primero en número de desplazados en África.
- El panorama en Libia se caracterizó por la persistente crisis política, la fragmentación institucional y la actividad de un sinnúmero de grupos armados que derivaron en múltiples focos de violencia.
- En Colombia, se dio por finalizado el conflicto entre FARC y Gobierno tras concluir el desarme y la desmovilización de este grupo armado, en un proceso verificado por la ONU.
- En Filipinas, Mindanao vivió la escalada de violencia más grave de los últimos años por los intensos enfrentamientos en la ciudad de Marawi durante cinco meses entre el Ejército y grupos armados leales a ISIS.
- La operación militar en el estado de Rakhine, en Myanmar, tras varios ataques del grupo armado rohingya ARSA generó una gravísima crisis humanitaria y de derechos humanos.
- Turquía intensificó su lucha contra el PKK dentro de Turquía y en la región, si bien el balance de víctimas mortales asociado al conflicto disminuyó de forma significativa respecto a 2016.
- El conflicto armado convirtió a Yemen en escenario de la peor crisis humanitaria a nivel mundial, con 22,2 millones de personas necesitadas de asistencia, 3,4 millones más que el año anterior.
- Iraq continuó siendo uno de los escenarios de conflicto de mayor intensidad a nivel mundial, en un año marcado por la expulsión del grupo armado ISIS de Mosul y de la mayor parte del territorio.
- El conflicto armado en Siria siguió agravándose fruto de las complejas dinámicas de violencia, los numerosos frentes de batalla y severos impactos en la población civil.

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2017. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2017, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2017.

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o interrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2017

Conflicto ¹ -inicio-	Tipología ²	Actores principales ³	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
África			
Argelia -1992-	Interno internacionalizado	Gobierno, AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel	1
	Sistema		=
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, facciones de antiguos grupos armados	1
	Gobierno		↓
Etiopía (Ogadén) -2007-	Interno internacionalizado	Gobierno, ONLF, OLF, milicias progubernamentales	1
	Autogobierno, Identidad		=
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Acuerdo Nacional con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, facciones armadas vinculadas a la Operación Dignidad (Ejército Nacional de Libia o ENL), grupos armados vinculados con la Operación Amanecer, milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi, ISIS, AQMI, entre otros actores armados; EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, EAU, entre otros países	3
	Gobierno, Recursos, Sistema		↑
Malí (norte) -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, GSIM, MLF, ANSIPRJ, MINUSMA, ECOWAS, Francia (Operación Barkhane), Fuerza Conjunta G5-Sahel	1
	Sistema, Autogobierno, Identidad		↑
Región Lago Chad (Boko Haram) ⁶ - 2011-	Interno internacionalizado	Boko Haram (BH), MNJTF (Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		=
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, MPC, UPC), milicias anti-balaka, milicia 3R, Francia (operación Sangaris), MINUSCA, EUFOR, grupos vinculados al antiguo Gobierno de François Bozizé, otros remanentes de grupos armados (antiguas Fuerzas Armadas), grupo armado ugandés LRA	2
	Gobierno, Recursos		↑

1. En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
3. En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
4. La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
5. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2017 con la del 2016, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2017 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.
6. En ediciones anteriores del informe *Alerta!* este caso había sido identificado como "Nigeria (Boko Haram)" por la concentración de las acciones armadas de esta organización en Nigeria. A partir de 2016 el caso pasa a denominarse "Región Lago Chad (Boko Haram)" dada la regionalización del conflicto armado a la región denominada Lago Chad, compartida por Nigeria, Chad, Níger y Camerún.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
RDC (este) -1998-	Interno internacionalizado	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR, milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, grupos armados de Ituri, grupo armado de oposición burundés FNL, Rwanda, MONUSCO	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		↑
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	2
	Sistema, Recursos		=
RDC (Kasai) -2017-	Interno	Gobierno, diversas milicias de adscripción étnica (Bana Mura, Kamwina Nsapu)	3
	Gobierno, Identidad		↑
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab	3
	Gobierno, Sistema		↑
Sudán (Darfur) -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, unidades paramilitares RSF, <i>janjaweed</i> , coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), otros grupos, UNAMID	2
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↓
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur	2
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↓
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF,SSNLM, REMNANA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS.	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		=
América			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, FARC-EP, ELN, grupos paramilitares	1
	Sistema		↓
Asia			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS	3
	Sistema		=
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		↑
Filipinas (Mindanao) -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, facciones del MILF y el MNLF	3
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↑
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobierno, JKLF, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, United Jihad Council, All Parties Hurriyat Conference	1
	Autogobierno, Identidad		↑
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	1
	Sistema		↓
Myanmar -1948-	Interno	Gobierno, grupos armados (KNU/KNLA, SSA-S, SSA-N KNPP, UWSA, CNF, ALP, DKBA, KNPLAC, SSNPLO, KIO, ABSDF, AA, TNLA, HaY, MNDAA)	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU	3
	Sistema		↓
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT; sociedad civil, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↓
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		↓

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Europa			
Rusia (Daguestán) -2010-	Interno	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Daguestán, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)	1
	Sistema		Fin
Turquía (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	2
	Autogobierno, Identidad		↓
Ucrania (este) ⁷ -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia	2
	Gobierno, Identidad, Autogobierno		=
Oriente Medio			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasam), Israel	3
	Sistema		=
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Irán, Turquía, PKK	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Israel-Palestina -2000-	Internacional	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, Ahfad al-Sahaba knaf Bayt al-Maqdis (vinculado a ISIS)	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		=
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		↑
Yemen (al-houthistas) -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Irán	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Yemen (AQPA) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, AQPA/Ansar Sharia, ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, EAU, milicias tribales, milicias al-houthistas	1
	Sistema		↓

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;

↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2017

En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados a lo largo de 2017, incluyendo el balance respecto a años anteriores, la distribución geográfica de los conflictos y las principales tendencias por regiones, la relación entre los actores implicados y el escenario de la disputa, las principales causas de los conflictos armados actuales, la evolución general de los contextos y la intensidad de los conflictos en función de sus niveles de violencia y su impacto. Asimismo, en este apartado se analizan algunas de las principales consecuencias de los conflictos armados en la población civil, entre ellas la repercusión de las hostilidades en niños y niñas, el agravamiento de situaciones de crisis humanitaria como resultado de conflictos, el impacto de la violencia sexual en

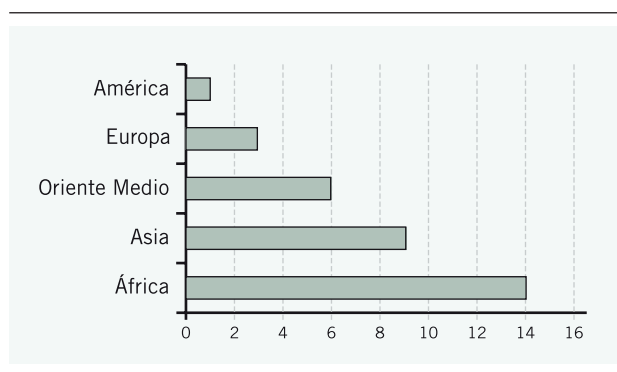
contextos bélicos y el desplazamiento forzado a causa de situaciones de conflicto y violencia.

1.2.1. Tendencias globales y regionales

Durante el año 2017 se mantuvo la tendencia observada en años anteriores respecto al número de conflictos armados, **con un total de 33 casos, la misma cifra que en 2016 y un número similar al registrado en períodos previos** (35 contextos en 2015, 36 en 2014, 35 en 2013). De los 33 casos contabilizados en 2017, solo 32 permanecían activos al finalizar el año ya que la situación en la república rusa de Daguestán dejó de ser considerada como un conflicto armado tras presentar un patrón de reducción significativa en los niveles de

7. En la anterior edición del informe *Alerta!* se analizaban por separado el conflicto armado Ucrania (este) y la tensión Ucrania – Rusia, que se analizan conjuntamente en esta edición.

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2017



violencia en los últimos años. En comparación con 2016, la lista de conflictos armados registró un nuevo caso en 2017: el conflicto en la región de Kasai en la RDC, tras la intensificación de las hostilidades entre el Gobierno congolés y la milicia Kamwina Nsapu y de los enfrentamientos entre organizaciones armadas vinculadas a diversos grupos étnicos. En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados a nivel mundial, los datos de 2017 ofrecen un panorama similar al de años anteriores. La gran mayoría de los casos se concentraron en África (14) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno). En comparación con 2016, la distribución de conflictos por regiones en 2017 presentó un contexto más en África –RDC (Kasai)– y uno menos en Asia –ya que el caso correspondiente a la región china de Xinjiang (Turquestán) dejó de ser considerado como conflicto armado al finalizar 2016 y durante 2017 pasó a ser analizado como un escenario de tensión.⁸ Cabe destacar que los casos en el continente africano representaron un 44% del total de conflictos armados a nivel global.

En lo referente a la relación entre los actores involucrados en el conflicto y el escenario de la disputa, se identificaron conflictos internos, internacionales y, mayoritariamente, internos internacionalizados. Un total de seis contextos o 18% de los conflictos a nivel global fueron de carácter interno, es decir, disputas entre actores armados de un mismo Estado y que operan exclusivamente en y desde las fronteras del mismo: RDC (Kasai), Filipinas (NPA), India (CPI-M), Myanmar, Tailandia (sur) y Rusia (Daguestán). A nivel mundial, solo un caso fue catalogado como internacional: el de Israel-Palestina (representando un 3% del total de conflictos). El resto de los conflictos armados –26 de 33 contextos, equivalentes a un 79%– fueron de carácter interno internacionalizado. Se trata de casos en los que alguna de las partes es foránea, los actores armados involucrados tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o cuando la disputa se extiende

a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores, incluyendo misiones de la ONU o vinculadas a organismos de carácter regional, coaliciones militares regionales e internacionales *ad-hoc*, Estados y grupos armados de acción transfronteriza, entre otros.

En diversos conflictos, y particularmente en África, se observó la implicación de misiones de la ONU, entre ellas MINUSCA en RCA, MONUSCO en RDC, UNAMID en Sudán o UNMISS en Sudán del Sur o MINUSMA en Malí. Esta última ha sido considerada como la misión de la ONU más peligrosa a nivel mundial tras la muerte de decenas de sus efectivos en los últimos años. Paralelamente, se mantuvo el despliegue de misiones de organizaciones regionales como la UA (AMISOM en Somalia), la UE (EUNAVFOR en Somalia) o la OTAN (misión Rolute Support en Afganistán) y también el de coaliciones militares de alcance regional y/o internacional creadas *ad-hoc* en el marco de algunos conflictos. Entre ellas, cabe destacar, por ejemplo, la Fuerza Conjunta G5-Sahel –concebida en 2014, pero formalizada en 2017– que reúne a tropas de Malí, Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania con el fin de dar respuesta a los retos de seguridad en la región del Sahel. Esta alianza militar estaría inspirada, a su vez, en la experiencia de la Fuerza Militar Conjunta Regional MNJTF, puesta en marcha en 2016 para combatir la amenaza del grupo armado Boko Haram e integrada por Nigeria, Níger, Chad y Camerún. Otro ejemplo de coalición militar *ad-hoc* es el del conglomerado de fuerzas liderado por Arabia Saudita e integrado por otros nueve países (EAU, Bahrein, Kuwait, Qatar, Egipto, Jordania, Marruecos, Senegal y Sudán) en el marco de su participación desde 2015 en la guerra en Yemen y el de la coalición internacional anti-Estado Islámico (ISIS) –Global Coalition Against Daesh–, establecida en 2014, liderada por EEUU e integrada por 71 países y cuatro instituciones (UE, Liga Árabe, OTAN e Interpol)⁹.

Algunos Estados tuvieron una especial implicación en conflictos fuera de sus fronteras, entre ellos Francia, que continuó con su participación en el conflicto armado en Malí a través del despliegue de su operación Barkhane; Egipto, que lanzó ataques en territorio libio en represalia por ataques del grupo armado ISIS; Turquía, que intensificó su lucha contra el PKK en países vecinos; Rusia e Irán, que continuaron activamente comprometidos en el apoyo al régimen de Bashar al-Assad en el marco de la guerra de Siria; o EEUU, que además de liderar la coalición internacional anti-ISIS en sus campañas en Siria e Iraq se mantuvo implicado en otros contextos. De hecho, en varios de estos casos el nuevo Gobierno de EEUU impulsó un aumento de sus actividades militares. Así, en Somalia, se produjo

8. Véase el resumen sobre China (Xinjiang) en el capítulo 2 (Tensiones).
9. Para más información, véase <http://theglobalcoalition.org/en/home/>.

un incremento sin precedentes de los ataques aéreos estadounidenses, más del doble que en 2016. Una tendencia similar se observó en Yemen, donde se triplicaron las acciones aéreas estadounidenses contra presuntos objetivos de AQPA e ISIS. En Afganistán, en tanto, EEUU reconoció haber desplegado un mayor número de tropas (11.000 respecto a lo que había admitido oficialmente, 8.400).

En diversos conflictos armados, el elemento de internacionalización estuvo vinculado a la presencia de grupos armados que operan más allá de las fronteras de sus países de origen. Uno de los casos emblemáticos fue AQMI, que continuó protagonizando acciones en Argelia, pero que también perpetró destacadas acciones en el Sahel, en el marco de un progresivo proceso de “africanización” del grupo en los últimos años. De hecho, las ofensivas más significativas del grupo durante 2017 tuvieron lugar en Malí, donde la filial de AQMI unió sus fuerzas a las de Al-Mourabitoun y Ansar Dine para crear una nueva organización autodenominada Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM). Otro ejemplo destacado fue ISIS, que a lo largo de 2017 sufrió importantes retrocesos en sus principales feudos en Iraq (Mosul) y Siria (Raqqqa), pero que continuó reivindicando acciones más allá de Oriente Próximo. Así, por ejemplo, ISIS expandió su actividad armada y fue responsable de algunos de los más graves atentados en Pakistán, reivindicó algunas de las ofensivas más cruentas en Afganistán y cobró un mayor protagonismo en la región filipina de Mindanao, donde se constataron fuertes vínculos de ISIS con grupos armados locales y una mayor presencia de combatientes foráneos en las hostilidades con el gobierno.

La mayor parte de los conflictos armados tuvo entre sus principales motivaciones la búsqueda de un cambio de gobierno o de sistema

Además de aprovechar situaciones de conflicto armado en numerosos países para ampliar su radio de acción, durante 2017 ISIS también reivindicó una serie de ataques en distintos puntos del mundo atribuidos a simpatizantes del grupo o células de la organización. Entre ellos cabe mencionar los ataques ocurridos en **Reino Unido** –un atentado en las afueras del Palacio de Westminster, en marzo, causó seis víctimas mortales; el ataque suicida durante un concierto en Manchester, en mayo, dejó 22 personas fallecidas; una camioneta atropelló y luego tres atacantes acuchillaron a diversas personas en la zona del puente de Londres, en junio, en un hecho que acabó con la muerte de ocho personas–, **Suecia** –el ataque en una zona comercial de Estocolmo, en abril, causó la muerte a cinco personas–, **Francia** –un incidente ocurrido en los Campos Elíseos, en abril, se saldó con dos personas fallecidas; otro ataque ocurrido en Marsella, en octubre, acabó en la muerte de tres personas–, **Indonesia** –el ataque a una estación de autobús en Jakarta, en mayo, provocó la muerte a tres policías–, **Irán** –dos ataques contra el Parlamento y el mausoleo del Ayatollah Khomeini en Teherán, en junio, acabaron con la vida de 17 personas–, **España** –una camioneta atropelló deliberadamente a transeúntes

en la zona de La Rambla en Barcelona, en agosto, causando la muerte a 13 personas y heridas a más de un centenar, mientras que un segundo ataque en la localidad de Cambrils resultó en la muerte de una mujer y de cuatro de los atacantes– y **EEUU** –un ataque con camión en Nueva York, en octubre, provocó la muerte de ocho personas y un intento de atentado suicida fue desarticulado en diciembre.

En materia de causas de los conflictos armados, el análisis de los distintos escenarios confirma su naturaleza multicausal. Siguiendo la tendencia observada en años previos, **durante 2017 la mayor parte de los conflictos armados tuvo entre sus principales motivaciones la oposición a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o al sistema político, económico, social o ideológico de un determinado Estado, que derivaron en luchas por acceder al poder o erosionarlo.** Este tipo de factores estuvo presente en 24 de los 33 casos analizados, es decir, en un 73% de los contextos. De éstos, en 18 casos se identificó la búsqueda de un cambio de sistema, promovido principalmente por actores armados de inspiración socialista –como en los casos de organizaciones como CPI-M en India, el NPA en Filipinas o las FARC en Colombia– o por organizaciones que se atribuyen una agenda yihadista y que pretenden imponer su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos últimos grupos cabe mencionar ejemplos como el autodenominado ISIS y sus filiales y organizaciones afines en distintos continentes –ISIS estuvo presente en países como Argelia, Libia, Nigeria, Somalia, Afganistán, Pakistán, Filipinas, Rusia, Turquía, Iraq, Siria, Yemen, entre otros–; las diversas ramas de al-Qaeda que operan en el norte de África y Oriente Medio –entre ellas AQMI (Argelia y Sahel) y AQPA (Yemen)–; las milicias talibán que operan en Afganistán y Pakistán o el grupo al-Shabaab en Somalia.

Un segundo gran grupo de casos tuvo entre sus principales causas aspiraciones de carácter identitario y/o demandas de autodeterminación o autogobierno. Este tipo de elementos se identificó en 18 de los 33 conflictos armados en 2017, equivalentes a un 55%, incluyendo casos como el de Malí (norte), los conflictos en el este de la RDC y en la región de Kasai, los de Darfur y Kordofán y Nilo Azul en el caso de Sudán, el de Mindanao en Filipinas, el de Jammu y Cachemira en India, el de Baluchistán en Pakistán, el del sur de Tailandia, el de Myanmar, o el del sudeste de Turquía vinculado a la cuestión kurda, por mencionar algunos. De estos casos, cabe destacar casos como el de Kasai o el de Myanmar, que vivieron una escalada de violencia especialmente significativa durante el año 2017 y en los que el componente identitario fue un elemento clave. Un tercer grupo de casos tuvo entre sus principales motivaciones cuestiones relacionadas con el control de recursos y territorios, presente en nueve de los 33 casos (27%). El factor vinculado a la disputa

por recursos se observó mayoritariamente en contextos del continente africano, incluyendo Libia, RCA, RDC (este), RDC (este-ADF), Sudán (Darfur), Sudán del Sur, aunque también estuvo presente en Asia, en el caso de Pakistán (Baluchistán). En tanto, el factor territorial fue un asunto clave en el conflicto entre Palestina e Israel.

En lo referente a la evolución de los conflictos armados en 2017, y siguiendo con la tendencia observada el año anterior, **la mayoría de contextos registró un empeoramiento en los niveles de hostilidad y violencia.**

Un total de 13 de los 33 casos –equivalentes a un 39%– presentó una evolución negativa, una cifra ligeramente inferior a la de 2016 (46%). Los casos en los que se identificó un claro deterioro de la situación durante 2017 fueron Libia, Malí (norte), RCA, RDC (este), RDC (Kasai), Somalia, Filipinas (NPA), Filipinas (Mindanao), India (Jammu y Cachemira), Myanmar, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). En algunos contextos, como en Malí o Libia, la intensificación del conflicto estuvo relacionada, al menos en parte, con las dificultades para implementar acuerdos para abordar los conflictos desde una perspectiva política. En el caso de Filipinas (NPA), el incremento de la violencia también estuvo vinculado a la crisis en las negociaciones entre el Gobierno y el NDF (referente político del NPA). Algunos de los casos en los que el deterioro fue más acusado fueron Myanmar, Siria y Yemen (al houthistas), donde se intensificaron los niveles de violencia, las graves violaciones a los derechos humanos y las crisis humanitarias, que afectaron principalmente a la población civil. En otros nueve de los 33 conflictos armados (27%) contabilizados en 2017 se registró una evolución similar a la de 2016, mientras que en otros 11 casos se constató una reducción en los niveles de violencia. La intensidad de la violencia disminuyó en escenarios como Colombia y Tailandia (sur) –producto de la implementación del acuerdo de paz y en el marco de un proceso de negociación activo, respectivamente– y también en la república rusa de Daguestán, donde la tendencia de reducción en los niveles de violencia de los últimos años llevó a que el caso dejara de ser considerado como un conflicto armado activo en 2017. Cabe destacar, sin embargo, que la identificación de

La mayor parte de los conflictos armados en 2017 (40%) fueron de alta intensidad, caracterizados por altos niveles de violencia y letalidad por encima de las mil víctimas mortales anuales

un caso como finalizado por reducción sostenida de las hostilidades no supone necesariamente que se hayan superado las causas de fondo del conflicto ni cierra la posibilidad de un futuro rebrote de la violencia.

En lo que respecta a la intensidad de los conflictos, una parte importante de ellos –12 de los 33 contextos, equivalentes a un 36%– presentó una intensidad baja, mientras que una porción menor de casos –ocho de los 33, que representan un 24%– registró un nivel medio. Siguiendo la tendencia de 2016, **la mayor parte de los conflictos armados en 2017 –13 de los 33 casos o un 40%– fueron de alta intensidad,** es decir, escenarios caracterizados por niveles de letalidad por encima de las 1.000 víctimas mortales anuales, con severos impactos en el territorio y graves consecuencias en la población. Los trece conflictos de mayor gravedad en 2017 fueron Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), RDC (Kasai), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Filipinas (Mindanao), Myanmar, Pakistán, Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).

Respecto a 2016, **Asia fue la región que presentó una mayor variación, con un incremento del 50% en los casos de alta intensidad en 2017, pasando de dos a cuatro contextos tras la dramática intensificación de la violencia en Filipinas (Mindanao) y Myanmar.** Cabe destacar, adicionalmente, que en muchos de estos casos se superó con creces el umbral del millar de víctimas anuales. Así, por ejemplo, en África, en la región de Lago Chad las hostilidades entre las fuerzas armadas de varios países de la zona y el grupo armado Boko Haram habrían causado unas 1.800 víctimas mortales entre enero y diciembre. En RDC (Kasai) solo hasta junio el conflicto había causado la muerte de al menos 3.400 personas, según cifras proporcionadas por la Iglesia Católica local; mientras que en Somalia balances parciales indicaban que al menos 3.800 personas murieron en 2017. En Asia, en Afganistán, sólo entre la población civil el conflicto causó más de 3.400 muertes –documentadas por la UNAMA–; en la región filipina de Mindanao murieron 1.100 personas en tan solo cinco meses; y en Myanmar durante el primer mes de operación militar en el estado de Rakhine habrían muerto al menos 6.700

Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados

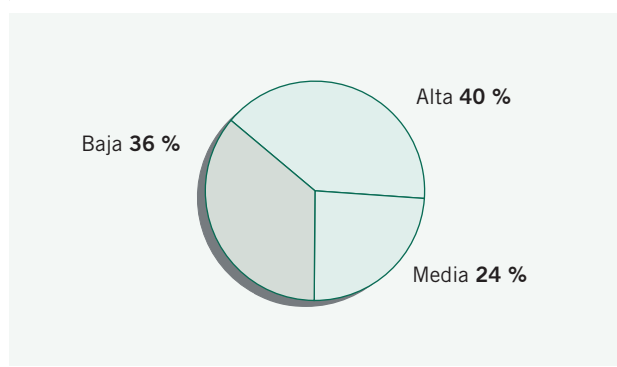
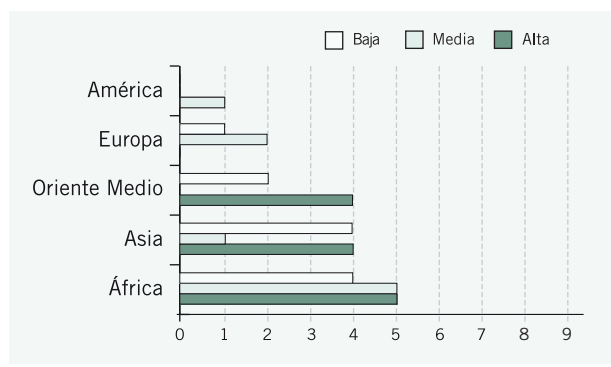


Gráfico 1.3. Intensidad de los conflictos por regiones



Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad armada

<p>ÁFRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente albergó el mayor número de casos de conflictos armados a nivel mundial, con 14 de los 33 (equivalentes a un 44%). Esta cifra supone el incremento en un caso respecto a 2016, dado que en 2017 los niveles de violencia en la región de Kasai en la RDC derivaron en que el caso pasara a ser considerado como un conflicto armado. • Más de un tercio de los conflictos en África fueron de alta intensidad (cinco de los 14) –Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), RDC (Kasai), Somalia y Sudán del Sur. • La mayor parte de los conflictos armados en el continente registraron un deterioro y una escalada en los niveles de violencia en 2017 y sólo en tres contextos se observó una reducción en las hostilidades. En otros cinco escenarios los niveles de violencia fueron similares a los de 2016. • Los conflictos armados africanos se caracterizaron por su alto nivel de internacionalización. En 13 de los 14 casos se observó la presencia de actores armados transnacionales, misiones internacionales o implicación de terceros Estados –entre otros elementos–, mientras que solo en un caso –RDC (Kasai)– las dinámicas del conflicto fueron eminentemente internas. • Los conflictos armados en África tuvieron como causas múltiples factores, entre los que destaca la aspiración a un cambio de gobierno o de sistema, presente en 11 de los 14 casos. El control de los recursos también tuvo una presencia destacada. El continente albergó siete de los ocho contextos a nivel mundial que tuvieron entre sus principales causas la disputa por el control de recursos.
<p>AMÉRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente fue escenario de un único conflicto armado, el de Colombia. América concentró, por tanto, un 3% de los casos de conflicto armado en 2017 a nivel mundial. • En línea con la tendencia observada en los últimos años, este caso presentó una disminución en los niveles de violencia como consecuencia del proceso de paz entre las FARC y el Gobierno y de la firma del acuerdo de paz en 2016.
<p>ASIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La región ocupó el segundo lugar en número de conflictos armados después de África, albergando un total de nueve casos (27% del total). • Una tendencia destacada en 2017 fue el porcentaje de casos de la región que sufrió una intensificación de la violencia –cuatro de los nueve contextos o 44%– y el aumento de casos de alta intensidad, que se duplicaron respecto a 2016, pasando de dos a cuatro casos: Afganistán, Pakistán (identificados como casos graves el año anterior), Myanmar y Filipinas (Mindanao) (que pasaron a ser catalogados como casos de alta intensidad en 2017). • Un rasgo distintivo de la región fue la elevada presencia de contextos de carácter interno, que representaron casi la mitad de los contextos (cuatro de nueve): Filipinas (NPA), India (CPI-M), Myanmar y Tailandia (sur). • En términos de causalidad de los conflictos armados en Asia, una buena parte de ellos –cinco de los nueve casos– tuvieron entre sus principales motivaciones cuestiones de identidad y autogobierno, aunque el factor vinculado al cambio de sistema también tuvo una presencia relevante y estuvo presente también en la mayoría de los contextos (cinco de los nueve conflictos en Asia).
<p>EUROPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente europeo albergó tres casos –Rusia (Daguestán), Turquía (sudeste) y Ucrania (este)–, que representaron un 9% de los conflictos armados a nivel mundial. • A diferencia del año anterior, durante 2017 el continente europeo no fue escenario de ningún conflicto armado de alta intensidad. Los niveles de violencia descendieron en el caso de Turquía (sudeste) en comparación a 2016 y el caso pasó a ser considerado de intensidad media, igual que Ucrania, que mantuvo un nivel de hostilidades similar al del año previo. • En el caso de Rusia (Daguestán) la consolidación de la tendencia de reducción de la violencia en los últimos años y también en 2017 llevó a que este caso dejara de ser considerado como un conflicto armado activo al finalizar el año. • Europa continuó caracterizándose por conflictos armados con prevalencia de los factores identitarios y de autogobierno, así como de cambio de sistema y gobierno. Dos de los tres casos fueron de carácter interno internacionalizado –Turquía (sudeste) y Ucrania (este)–, mientras que la disputa en la región rusa de Daguestán fue eminentemente interna.
<p>ORIENTE MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La zona ocupó el tercer lugar en números de casos de conflicto armado, con un total de seis contextos (18%) • La región continuó siendo, proporcionalmente, la que concentró un mayor número de casos graves a nivel mundial. Cuatro de los seis casos en Oriente Medio (equivalentes a un 67% de los contextos en la región) presentaron una alta intensidad: Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). • La mitad de los casos de la zona exhibieron un deterioro a lo largo de 2017 –Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)–, mientras que en otros dos los niveles de violencia fueron similares a 2016 –Egipto (Sinaí) e Israel-Palestina. Tan sólo en el conflicto vinculado a la presencia de AQPA en Yemen se identificó un ligero descenso en los niveles de violencia respecto a 2016. • Oriente Medio fue la única región en la que se identificó un caso de conflicto armado de carácter internacional –el de Israel-Palestina–, mientras que el resto de contextos fueron internos internacionalizados. • En cuanto a las causas de la conflictividad, los casos de la región estuvieron motivados por múltiples factores, pero la búsqueda de cambio de sistema tuvo una especial prevalencia, asociada en parte a la presencia de actores armados de inspiración yihadista que intentaron promover su particular interpretación de los preceptos islámicos.

rohingyas, de acuerdo a cifras proporcionadas por la ONG Médicos Sin Fronteras. La situación en este último caso fue especialmente grave durante 2017 y alentó denuncias sobre la comisión de crímenes contra la humanidad y genocidio, dada la persecución sistemática a la población rohingya. La región de Oriente Medio continuó concentrando, proporcionalmente, el mayor número de casos de alta intensidad y fue escenario de algunos de conflictos armados más cruentos de 2017, en especial Siria e Iraq. Cifras parciales y provisionales de la Syrian Network for Human Rights (SNHR) indicaban que el número de fallecidos entre la población civil podría ascender a las 10.000 personas

en 2017 en Siria –incluyendo 2.300 menores–; mientras que en Iraq el balance de la organización Iraq Body Count (IBC) situaba en más de 13.000 civiles los fallecidos a causa del conflicto a lo largo de 2017.

1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil

A nivel mundial, los conflictos armados continuaron teniendo severos impactos en la población civil. Estas consecuencias se reflejaron en los niveles letalidad, como ha quedado en evidencia en algunos de los

casos mencionados previamente, y en otro tipo de impactos como resultado del uso indiscriminado y/o deliberado de la violencia contra civiles. Durante 2017, esta situación se evidenció en prácticas como las ejecuciones sumarias e incendios de viviendas con personas en su interior, como se observó en Myanmar; en las numerosas ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos contra civiles en el marco del conflicto en Kasai (RDC); o en los asedios a población civil como los registrados en Siria, donde unas 390.000 permanecían atrapadas al finalizar el año sobreviviendo en condiciones extremas en la zona de Ghouta Oriental. En esta línea, un fenómeno destacado de 2017 fue la materialización de atentados especialmente cruentos en distintos conflictos armados. Así, por ejemplo, un ataque en Afganistán considerado como el de mayor gravedad desde la invasión militar estadounidense de 2001 provocó la muerte de unas 150 personas, en su mayoría civiles, mientras que otras 500 resultaron heridas. En Egipto, en el marco del conflicto armado en el Sinaí, el atentado más cruento en la historia reciente del país dejó más de 300 personas fallecidas tras una ofensiva con bomba y un posterior tiroteo en una mezquita frecuentada por la comunidad sufí. En Somalia, en tanto, el atentado más mortífero de la historia del país provocó la muerte a más de 500 personas y dejó heridas a otras 300. Además de estas acciones, atribuidas a grupos armados no estatales, durante 2017 también tuvieron lugar sonadas acciones en el marco de campañas militares que tuvieron graves repercusiones en la población civil. Así, por ejemplo, en el marco de la ofensiva contra ISIS en Iraq, un ataque aéreo estadounidense provocó la muerte de más de 150 civiles que se habían refugiado en un edificio huyendo de las hostilidades. Al finalizar el año EEUU reconoció que su campaña contra ISIS en Iraq y Siria había causado al menos 800 muertes entre la población civil desde 2014, aunque otras fuentes apuntaban a cifras de letalidad muy superiores.¹⁰

Los conflictos armados continuaron provocando y/o agudizando situaciones de crisis humanitaria. Así, por ejemplo, en RDC más de 7,7 millones de personas padecían inseguridad alimentaria grave, un 30% más que en 2016; mientras que en Sudán del Sur esta cifra ascendía a unas 4,8 millones de personas. En Iraq, 11 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria al acabar 2017. En Yemen, en tanto, al finalizar el año 22,2 millones de personas requerían asistencia, 3,4 millones de personas más que en 2016. De este total, 11,3 millones necesitaban ayuda urgente para sobrevivir. Adicionalmente, el conflicto armado en este país –el más pobre del mundo árabe– propició la expansión de enfermedades como el cólera, que durante

2017 afectó a un millón de personas y causó la muerte a más de 2.000, en el peor brote de esta enfermedad en la historia contemporánea.

Paralelamente, los conflictos armados en todo el mundo siguieron teniendo un **impacto especialmente grave en niños y niñas**. El informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos dado a conocer en 2017 –que hace referencia a la situación entre enero y diciembre de 2016– constató numerosas vulneraciones contra niños y niñas, al menos 4.000 atribuibles a fuerzas gubernamentales y otras 11.500 violaciones verificadas perpetradas por grupos armados no estatales.¹¹ El informe de la ONU subrayó que las y los menores de edad continuaron estando expuestos a morir o a resultar heridos en el marco de conflictos armados en todo el globo y destacó situaciones como las de Afganistán –donde se contabilizaron 3.512 víctimas menores de edad, la mayor cifra registrada

desde el inicio del conflicto (923 muertes y 2.589 con heridas)–, Yemen –donde la cifra de víctimas entre niños y niñas habría ascendido a 1.340 (502 muertes y 838 con heridas)–, Iraq y Siria –donde unos 2.000 menores habrían perdido la vida en el marco de las hostilidades asociadas al combate a ISIS– o RDC –país que habría registrado el mayor número de muertes entre menores de edad desde 2012. En este contexto, el secretario general hizo un llamamiento a las partes en disputa para que respeten los principios de distinción entre civiles y combatientes, proporcionalidad y precaución establecidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Más allá de este informe, los datos recopilados por la Escuela de Cultura de Pau (ECP) sobre la evolución de distintos escenarios de conflicto durante 2017 confirma este preocupante fenómeno. Así, por ejemplo, durante 2017 la campaña militar contra la población rohingya habría causado la muerte de más de 700 menores de edad tan solo en el primer mes de violencia; mientras que en otros contextos, como Siria, los datos de UNICEF indican que 2017 fue el peor año en términos de letalidad del conflicto armado en niños y niñas, con un 50% de incremento en el número de muertes respecto a 2016 –910 muertes verificadas, aunque la cifra definitiva podría ser mucho más elevada teniendo en cuenta que las estimaciones de algunas organizaciones apuntan a la muerte de 2.300 menores en el mismo período.¹²

Cabe destacar que el informe del secretario general de la ONU también llamó la atención sobre otra tendencia preocupante en los conflictos armados actuales: el bloqueo al acceso de ayuda humanitaria que perjudica directamente a niños y niñas, en áreas asediadas y sin el debido acceso a agua, alimentos, asistencia médica

10. Véase los resúmenes sobre Iraq y Siria en este capítulo.

11. Consejo de Seguridad de la ONU, *Report of the Secretary General: Children and armed conflict*, A/72/361-s/2017/821, 24 de agosto de 2017.

12. Véase los resúmenes sobre Myanmar y Siria en este capítulo y “El impacto de los conflictos y la violencia en niños y niñas de la región MENA” en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo para 2018).

y medicinas, incluyendo vacunas. Asimismo, expresó su preocupación por el continuo ataque contra infraestructuras civiles que afectan a menores, como es el caso de escuelas y hospitales. El informe también denunció la práctica del reclutamiento forzado de menores, especialmente prevalente en países como Somalia y Siria, donde este fenómeno se duplicó en 2016 en comparación con 2015. El análisis de casos de conflicto armado en 2017 también revela que este flagelo tuvo especial notoriedad en países como RDC –en la región de Kasai los grupos armados han hecho un extensivo reclutamiento de menores– y también en la zona de Lago Chad, donde la organización armada Boko Haram continuó utilizando a niños y niñas, cuadruplicando la frecuencia en el uso de menores para llevar a cabo ataques en comparación con 2016. Según resaltó el informe del secretario general de la ONU, las y los menores también siguieron siendo objeto de violencia sexual en diversos escenarios de conflicto armado, entre ellos Nigeria, RDC, Somalia, Sudán del Sur y Siria.

En lo que se refiere a **la violencia sexual, estuvo presente en numerosos conflictos armados**, aunque se trata de un fenómeno por lo general infra-denunciado. El informe del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en contextos de conflicto publicado en abril de 2017 –que cubre el período correspondiente a enero-diciembre de 2016– destacó el uso de los cuerpos de mujeres y niñas como moneda de cambio en el marco de la economía de guerra y llamó la atención sobre la utilización de la violencia sexual como “táctica terrorista”.¹³ El informe de la ONU subrayó la recurrencia a esta práctica por parte de diversos grupos extremistas como fórmula para aterrorizar y someter a poblaciones, como método para forzar el desplazamiento de civiles y como vía para incentivar el reclutamiento de combatientes –a quienes ofrecen niñas y mujeres como método de compensación–, entre otras actividades. Adicionalmente, la violencia sexual se convierte en un instrumento de la economía del conflicto al convertir a mujeres en víctimas de tráfico y esclavitud sexual, prostitución forzada o para forzar el pago de rescates a las familias. El informe también destaca el profundo estigma que padecen las personas que sobreviven a episodios de violencia sexual en el marco de conflictos y condena el impacto de algunas medidas contrterroristas que también vulneran los derechos y libertades de personas que han sido liberadas después de períodos en cautiverio, en ocasiones objeto de arrestos por sospechas de filiación o colaboración con grupos armados.

El informe también aporta información sobre episodios de violencia sexual en contextos de conflicto y posconflicto

El informe de la ONU sobre menores y conflictos denunció la práctica de reclutamiento forzado, que entre 2015 y 2016 se duplicó en países como Somalia y Siria

A finales de 2016 un total de 65,6 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de situaciones de conflicto, persecución, violencia y/o violaciones de los derechos humanos

en 19 países. A partir de estos antecedentes, el análisis de la ECP destaca que de los 17 conflictos armados en los que se produjo violencia sexual, diez eran casos de conflicto de alta intensidad en 2017 –Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), RDC (Kasai), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).¹⁴ Más allá del diagnóstico del informe de la ONU, el análisis de los acontecimientos ocurridos a lo largo de 2017 demuestra la persistencia de este flagelo en numerosos contextos, incluyendo Sudán del Sur –donde continuó utilizándose la violencia sexual a escala masiva contra personas de grupos étnicos considerados rivales–; Malí –escenario de violencia sexual y de género perpetrada por diversos actores armados en el norte y centro del país–; Myanmar –con graves informaciones sobre la violencia sexual utilizadas por las fuerzas de seguridad birmanas contra la población rohingya, en especial mujeres y niñas–; Ucrania –donde se constató el uso de violencia sexual como método de tortura para castigar y extraer confesiones– o Siria –donde se documentó el impacto de la violencia sexual contra hombres y niños y su explotación sexual en contextos de desplazamiento forzado. Frente a estos desarrollos negativos, a lo largo de 2017 también se identificaron algunas iniciativas de respuesta contra la violencia sexual y de lucha contra la impunidad.¹⁵

Finalmente, cabe mencionar que **el desplazamiento forzado continuó siendo otra de las consecuencias más graves de los conflictos armados a nivel global** y que se mantuvo la tendencia de significativo incremento observada en los últimos años. Según el informe de ACNUR publicado a mediados de 2017, y que ofrece un balance de la situación de desplazamiento forzado hasta finales de 2016, un total de 65,6 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares como resultado de situaciones de conflicto, persecución, violencia y/o violaciones de los derechos humanos, unas 300.000 más que a finales de 2015. **De este total de 65,6 millones de personas, 22,5 millones eran población refugiada –17,2 millones bajo mandato de ACNUR y 5,3 millones de palestinos y palestinas registrados por la UNRWA–, 40,3 millones eran personas que se encontraban en situación de desplazamiento forzado interno y 2,8 millones eran solicitantes de asilo.** De acuerdo con los datos de ACNUR, durante el año 2016 10,3 millones de personas padecieron situaciones de desplazamiento forzado por primera vez, de las cuales 3,4 millones se convirtieron en personas refugiadas o solicitantes de asilo y 6,9 huyeron en busca de un lugar más seguro dentro de las fronteras de sus propios países. **Los y las menores constituyeron un 51% de la población**

13. Consejo de Seguridad de la ONU, *Report of the UN Secretary General on conflict-related sexual violence*, S/2017/249, 15 de abril de 2017.

14. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

15. Ibid.

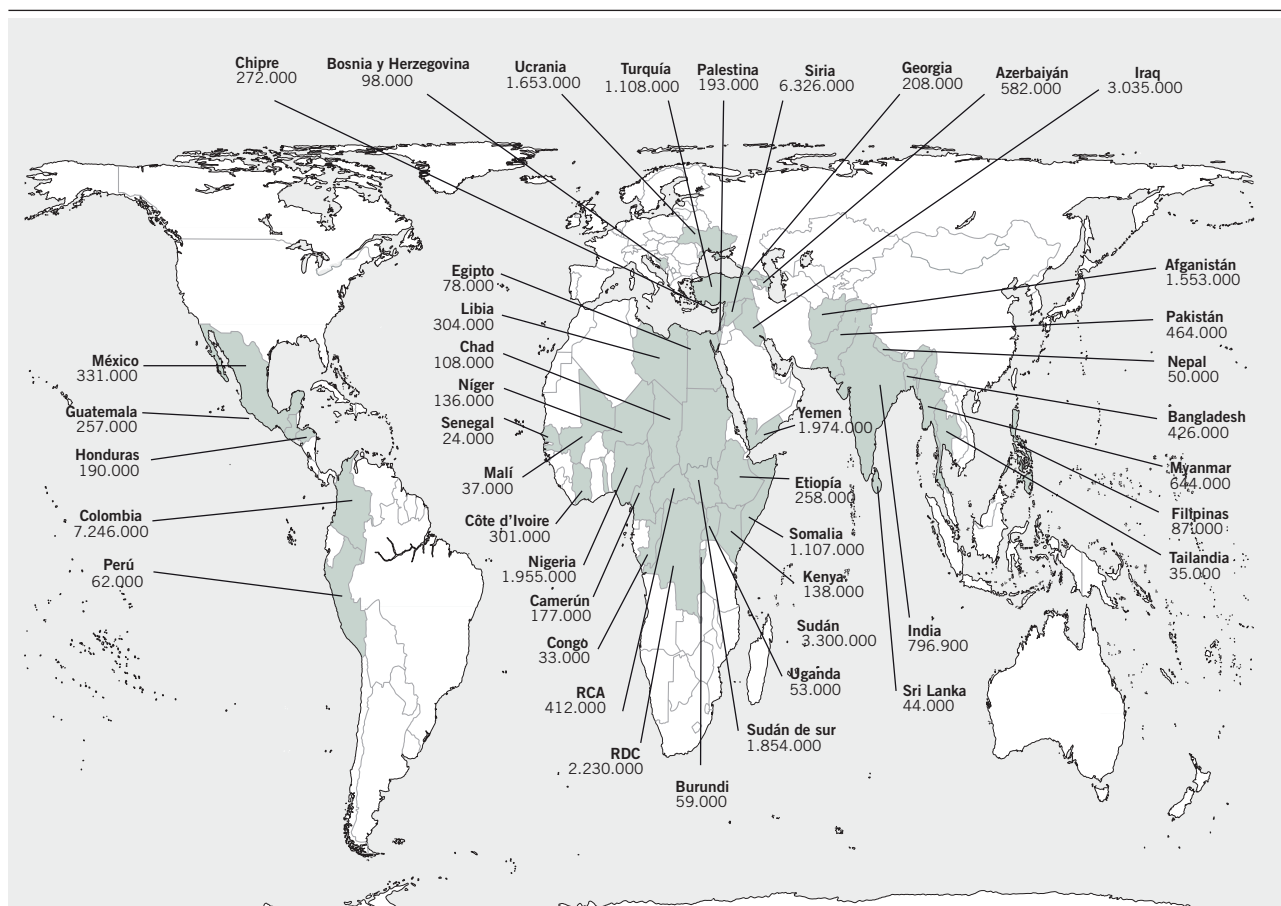
refugiada en 2016. En este sentido, cabe destacar que el informe sobre menores y conflictos del secretario general de la ONU subrayó que las cifras sin precedentes sobre niños y niñas en situación de desplazamiento forzado son fruto no sólo de los conflictos en general, sino también de la brutalidad con que las partes conducen las hostilidades, en muchos casos atacando directamente a las y los menores de edad. Más de la mitad de la población refugiada mundial procedía de tan solo tres países: Siria (5,5 millones), Afganistán (2,5 millones) y Sudán del Sur (1,4 millones). Según las cifras de ACNUR, los países en desarrollo continuaron albergando la mayoría de población refugiada a nivel mundial. En 2016 los principales países receptores fueron Turquía (2,9 millones), Pakistán (1,4 millones), Líbano (1 millón), Irán (979.400), Uganda (940.800) y Etiopía (791.600). En términos proporcionales, Líbano continuó siendo el país con mayor porcentaje de población refugiada respecto a la población nacional, con una relación de 1/6, seguido por Jordania (1/11) y Turquía (1/28).

A lo largo de 2017 se produjeron graves episodios de desplazamiento forzado a causa de conflictos en RDC (Kasai), Filipinas (Mindanao), Myanmar, Iraq y Siria, entre otros

duplicara hasta llegar a 4,1 millones de personas, convirtiendo a RDC en el Estado con mayor número de personas desplazadas de África. En Mindanao (Filipinas), los enfrentamientos más graves de los últimos años entre las Fuerzas Armadas y diversos grupos armados provocaron el desplazamiento forzado de más de 600.000 personas. En Myanmar, en tanto, la ofensiva contra la población rohingya causó el desplazamiento de más de 660.000 personas entre agosto y diciembre, la mayoría de las cuales se refugiaron en Bangladesh. En Iraq, la campaña armada contra ISIS mantenía a 3,2 millones de personas desplazadas a causa de la violencia. Mientras, en Siria, se estima que solo en los primeros nueve meses del año se habían producido 1,8 millones de movimientos de personas a causa del conflicto –equivalentes a unas 6.550 personas cada día–, con muchísimos desplazamientos sucesivos. A estas situaciones se añaden casos como el de Libia, donde el conflicto ha convertido al país en un escenario propicio para la explotación y vulneración de derechos de la población migrante y refugiada, sometida a detenciones arbitrarias, tráfico, torturas, trabajos forzados y explotación sexual. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció la existencia de mercados de esclavos y esclavas en Libia, mientras que diversos actores –incluyendo la ONU– alertaron sobre las políticas

La tendencia de deterioro en este ámbito amenazaba con continuar agravándose si se tienen en cuenta algunos de los antecedentes sobre desplazamiento forzado en contextos de conflicto en 2017. Así, por ejemplo, en RDC la situación en la región de Kasai en 2017 motivó que el número de población desplazada en el país se

Mapa 1.2. Número de personas desplazadas internas al finalizar 2016



Fuente: IDMC, GRID 2017: Global Report on Internal Displacement, mayo de 2017.

europas que estaban facilitando la vulneración de derechos de estas personas en territorio libio.¹⁶

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Occidental

Malí (norte)	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, GSIM, MLF, ANSIPRJ, MINUSMA, ECOWAS, Francia (Operación Barkhane), Fuerza Conjunta G5-Sahel
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:

La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuareg designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNLA) se vio crecientemente desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país.

La situación en Malí se deterioró respecto al año anterior, con una intensificación de las dinámicas de violencia que afectan principalmente a la zona norte y centro del país y dificultades para implementar el acuerdo de paz suscrito en 2015. Balances informales a partir de informaciones de prensa indican que, como mínimo, 350 personas murieron producto del conflicto durante 2017. A lo largo del período continuaron los ataques contra las fuerzas de

seguridad locales, miembros de la misión de la ONU en el país (MINUSMA), efectivos de la operación francesa Barkhane, grupos armados firmantes del acuerdo de paz y civiles, en forma de ataques suicidas, atentados explosivos y tiroteos. Buena parte de estas acciones – en algunos casos las ofensivas no fueron reivindicadas– fueron de autoría de grupos no firmantes del acuerdo de paz, especialmente organizaciones de línea yihadista vinculados a al-Qaeda. Así, por ejemplo, al-Mourabitoun reivindicó un ataque contra un campo de las fuerzas militares y grupos armados en Gao –donde se preparaban patrullas conjuntas en el marco de la implementación del acuerdo de paz– que causó 61 víctimas mortales en enero. En marzo, **los líderes de al-Mourabitoun, Ansar Dine y de la filial de AQMI en Malí anunciaron la unión de sus fuerzas y la creación de una nueva organización autodenominada Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en inglés), que declaró su lealtad a al-Qaeda. A partir de entonces GSIM reivindicó numerosas ofensivas,** entre ellas un ataque contra soldados malienses que dejó 11 muertos en marzo en la región de Mopti; el ataque contra un complejo turístico en Bamako, en junio, en el que murieron cinco personas, además de cuatro de los asaltantes; o la ofensiva en la región de Ménaka, en noviembre, contra una patrulla conjunta de MINUSMA y el Ejército maliense que causó cuatro muertes. Según informes de la ONU, en torno a 150 soldados malienses murieron en distintos hechos de violencia en 2017. La MINUSMA continuó siendo una de las misiones de la ONU más peligrosas a nivel mundial, con 42 fallecidos durante el año. Las fuerzas yihadistas también sufrieron bajas producto de enfrentamientos y ataques, entre los que destaca una ofensiva de la Operación Barkhane en octubre en la que habrían fallecido 15 combatientes de GSIM además de 11 soldados y tres guardias malienses que permanecían secuestrados por el grupo. Adicionalmente, durante el año se produjeron episodios de violencia intercomunitaria, incluyendo enfrentamientos entre grupos fulani y bambara que causaron 21 muertos en la región de Ségou, en febrero; o los choques entre miembros de la comunidad dagon y fulani en la región de Mopti, en junio, que dejaron otra treintena de fallecidos. GSIM también protagonizó algunos choques con la comunidad bambara en Ségou que habrían provocado decenas de víctimas en marzo. Una filial de ISIS que opera en la zona –el autodenominado Estado Islámico en el Gran Sáhara– también estaba explotando las tensiones intercomunitarias en el área fronteriza entre Níger y Malí.

Paralelamente, a mediados de año también **se produjo una escalada de violencia entre grupos firmantes del acuerdo de paz,** principalmente entre GATIA –que forma parte de la plataforma pro-unidad nacional– y sectores de la alianza separatista CMA en la zona de Kidal. La escalada estuvo precedida por dificultades para implementar aspectos del acuerdo de paz –incluyendo retrasos y objeciones en la designación de autoridades interinas– y sólo remitió tras la suscripción de ceses el fuego –en agosto y septiembre– y la firma de un nuevo acuerdo para la región de Kidal (Anefis 2), en octubre.

16. Véase el resumen sobre Libia en este capítulo.

Al finalizar el año se mantenía la tregua y la atención se focalizaba en las elecciones regionales –que debían celebrarse en diciembre, pero que fueron pospuestas a abril de 2018–, y en las propuestas de reforma a la Constitución, entre ellas una polémica disposición para fortalecer los poderes del presidente. Teniendo en cuenta que en junio de 2017 finalizó formalmente el período interino previsto en el acuerdo de paz adoptado en 2015, la MINUSMA y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicaron un balance del período iniciado en 2016. En un informe conjunto documentaron 608 casos de abusos a los derechos humanos –incluyendo detenciones ilegales, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y violencia sexual– en las regiones de Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Ségou, Tombuctú y en el distrito de Bamako, con un total de 1.481 víctimas.¹⁷ Cabe destacar que **durante el año también se avanzó en la puesta en marcha de la Fuerza Conjunta G5-Sahel** – iniciativa concebida en 2014, promovida por Francia, que se formalizó en febrero de 2017–, que reúne a Malí, Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania con el fin de responder a los retos de seguridad en la región. G5-Sahel lanzó su primera operación (“Hawbi”) a finales de octubre en la zona fronteriza entre Malí, Níger y Burkina Faso. Según trascendió, la fuerza militar conjunta contará con unos 5.000 efectivos y estará plenamente operativa durante el primer trimestre de 2018. Algunos análisis destacaron que esta fuerza emula a la MNJTF que opera en la zona de Lago Chad contra Boko Haram y que existen muchas dudas sobre los problemas y retos que enfrentará, entre ellos su capacidad operativa, el nivel de coordinación entre sus miembros y otras fuerzas que ya operan en terreno (MINUSMA, Barkhane y EEUU, que mantiene un número indeterminado de efectivos en la región), y los desafíos estratégicos de un escenario donde –a diferencia del contexto de la MNJTF– actúan no uno, sino una veintena de grupos armados.¹⁸

Al-Mourabitoun, Ansar Dine y la filial de AQMI en el Sahel se unieron en el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM), que reivindicó diversas acciones en el norte de Malí

Región Lago Chad (Boko Haram)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Boko Haram (BH), MNJTF (Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	=
Síntesis:	La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones

públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Una filial del grupo, Ansaru, también ha protagonizado ataques en el país. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se regionalizó, afectando también a los países fronterizos con el Lago Chad: Chad, Níger y Camerún.

La estrategia regional de presión militar sobre Boko Haram **desarrollada por Nigeria, Níger, Chad y Camerún, a través de la implementación de la fuerza militar conjunta regional (MNJTF) desde mediados de 2016 redujo su capacidad e impacto en la región y a finales de 2016 el grupo insurgente incluso fue desalojado** en gran parte de su base de operaciones en Sambisa Forest. Tras esta derrota, las fuerzas gubernamentales concentraron sus esfuerzos en la destrucción de los feudos restantes del grupo en la cercana región del Lago Chad, lo que vino acompañado por la liberación de centenares de secuestrados y la entrega o el arresto de decenas de combatientes.

Según datos registrados por el Nigeria Security Tracker (NST),¹⁹ **el balance de víctimas mortales producidas en Nigeria como consecuencia del conflicto con Boko Haram hasta el mes de diciembre fue de 954 muertes, a las que habría que añadir 874 muertes en enfrentamientos directos entre Boko Haram y las fuerzas de seguridad, lo que asciende a un total de 1.828 víctimas mortales entre enero y diciembre de 2017. Este balance supone un incremento del 12% respecto a las 1.605 víctimas mortales del año 2016, según cifras del NST, pero sigue siendo muy inferior a las cifras de 2015, cuando murieron 8.410 personas. Este incremento en 2017 contradice el discurso del Gobierno nigeriano por el cual Boko Haram estaba prácticamente desarticulado, según destacó en septiembre de 2017 Amnistía Internacional.** Las cifras varían según las organizaciones consultadas. En este sentido, por ejemplo, el balance ofrecido por el Africa Center for Strategic Studies señala que La violencia derivada de las actividades de Boko Haram causó alrededor de 3.499 víctimas mortales en 2016, cifra ostensiblemente inferior a las 11.519

17. MINUSMA – Nations Unies Droits de l'Homme Haut Commissariat, *Human Rights and the Peace Process in Mali (January 2016 – June 2017)*, febrero de 2018.

18. International Crisis Group, *Finding the Right Role for the G5 Sahel Joint Force*, Africa Report no.258, 12 de diciembre de 2017.

19. Council on Foreign Relations, *The Nigeria Security Tracker*, 20 de enero de 2018.

víctimas mortales del año anterior.²⁰ Se estima que más de 20.000 personas han muerto desde el inicio del conflicto en 2009 en toda la región y más de 2,6 millones de personas se han desplazado como consecuencia de la violencia.

El grupo continuó llevando a cabo ataques suicidas en pequeña escala contra objetivos predominantemente civiles en aldeas rurales y campamentos de desplazados, principalmente en el estado nigeriano de Borno y en la provincia camerunesa de Far North. En esta última región, se estima que han muerto unas 2.000 personas desde el inicio del conflicto y otras 241.000 se han desplazado como consecuencia de la violencia. Las ofensivas militares durante septiembre y octubre de 2017 fueron considerables y consiguieron debilitar ostensiblemente al grupo insurgente. Las Fuerzas Armadas nigerianas intensificaron los ataques y bombardeos aéreos en el noreste durante todo el año. Ante los avances en la lucha contra Boko Haram, EEUU y Rusia decidieron aprobar la venta de diversos aviones de combate para apoyar la ofensiva. Además, las fuerzas de seguridad ejecutaron o capturaron varios objetivos de alto perfil, como Mallama Fitdasi, la esposa del líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, que fue blanco de un ataque aéreo en la zona del gobierno local de Konduga en octubre; e Idris Ibrahim Babawo, un teniente de alto rango de Shekau que fue arrestado en el estado de Ondo a finales de septiembre. Varios informes de inteligencia indicaron, según ACLED, que un gran número de combatientes de Boko Haram huyeron al estado nigeriano de Adamawa para evitar la alta presencia de los cuerpos de seguridad en Borno, lo que provocó el despliegue de fuerzas de seguridad por parte del gobernador de Adamawa en Madagali. La violencia de Boko Haram en Nigeria disminuyó en general desde principios de 2017. Como resultado de este debilitamiento del grupo, sus acciones han sido ataques de bajo perfil contra objetivos civiles y militares. **En 2017, se produjo un cambio radical en el uso de menores para llevar a cabo estos ataques, cuadruplicando su frecuencia en relación a 2016, según destacó UNICEF.** El Gobierno informó sobre la proximidad de la captura del comandante de Boko Haram, Shekau, citando un ataque aéreo a finales de agosto que produjo la muerte de cinco de sus principales lugartenientes. Análisis de ACLED señalaron que las acciones a corto plazo de Boko Haram probablemente se determinarán según su capacidad financiera y destacaron que sus fondos actuales son limitados, por lo que es posible que los secuestros a cambio de un rescate se vuelvan más frecuentes durante el 2018.²¹

UNICEF destacó que se produjo un cambio radical en el uso de menores por parte de Boko Haram para llevar a cabo ataques en 2017, cuadruplicando su frecuencia en relación a 2016

Cuerno de África

Etiopía (Ogadén)	
Inicio:	2007
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ONLF, OLF, milicias progubernamentales (“Liyu Police”)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de resistencia al poder central desde los años setenta. El grupo armado ONLF surgió en 1984 y opera en la región etíope de Ogadén, en el sureste del país, exigiendo un mayor grado de autonomía para la comunidad somalí que habita esta zona. En diversas ocasiones el ONLF ha llevado a cabo actividades insurgentes más allá de Ogadén, en colaboración con el grupo armado OLF, que exige al Gobierno una mayor autonomía de la región de Oromiya desde 1973. El Gobierno somalí ha apoyado al ONLF contra Etiopía, con quien se enfrentó por el control de la región entre 1977 y 1978, guerra en la que Etiopía derrotó a Somalia. El fin de la guerra entre Eritrea y Etiopía en el 2000 comportó el incremento de las operaciones del Gobierno para poner fin a la insurgencia en Ogadén y explotar sus recursos naturales. Tras las elecciones celebradas en el año 2005, los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el ONLF se incrementaron, en especial en 2007, cuando se produjo un ataque a unas instalaciones chinas de exploración de petróleo por parte del ONLF en el que murieron 74 personas, aunque en los últimos años la intensidad del conflicto ha disminuido.

La escalada de inseguridad y represión gubernamental que azotó el país en 2016 persistió durante todo el año 2017.

Este clima de violencia se añadió a la situación que sufren diferentes regiones de Etiopía, en especial la región de Ogadén (denominada región Somalí), escenario de conflicto desde los años ochenta. A pesar del levantamiento del estado de emergencia en todo el país en agosto, la situación no mejoró. La Liyu Police (“Policía Especial”), milicia paramilitar gubernamental involucrada en tareas de contrainsurgencia en la región, continuó cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y abusos contra la población civil. No existen balances de víctimas mortales de la insurgencia, de cuerpos de seguridad del Estado o de la población debido a la opacidad gubernamental y el bloqueo informativo en el acceso a la zona a los medios, por lo que no se disponen de fuentes oficiales que puedan contrastar las informaciones vinculadas a la insurgencia o al movimiento pro independentista. Excepcionalmente, una investigación de HRW publicada

20. Africa Center for Strategic Studies, *Map of Africa's Militant Islamist Groups*, 26 de abril de 2017.

21. ACLED, *Nigeria – September 2017 Update*, septiembre de 2017.

en abril de 2017 denunció la ejecución extrajudicial de 21 personas en junio de 2016 en la localidad de Jaamac Dubad, así como el saqueo e incendio de tiendas y domicilios.²² La Policía Liyu²³ fue creada para llevar a cabo acciones contra los grupos opositores en la región de Ogadén, y su actividad se concentra en esta región, aunque en los últimos años también ha dado apoyo a las acciones de la misión de la UA en Somalia (AMISOM) en la zona fronteriza entre ambos países y, sobre todo, ha ampliado sus actividades en el territorio de la región de Oromiya desde diciembre de 2016, donde ha sido acusada de perpetuar graves violaciones de los derechos humanos contra comunidades en zonas fronterizas. Según el proyecto Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED),²⁴ se produjeron 64 ataques y enfrentamientos entre milicias de la región de Oromiya y la Policía Liyu entre enero y noviembre de 2017 en los que habrían muerto 434 personas. A finales de agosto las autoridades somalíes entregaron al Gobierno etíope a Abdikarin Sheikh Muse, un miembro del comité ejecutivo del grupo armado ONLF que vivía en Mogadiscio y había sido detenido en Galkayo el 23 de agosto, según señaló Reuters.

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU, y el poder de los

diversos señores de la guerra. La última iniciativa de paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y kenyanas presentes en el país) y las tropas gubernamentales se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

Somalia siguió padeciendo en el año 2017 uno de los conflictos más graves de los últimos años de todo el continente africano.

El grupo armado islamista somalí al-Shabaab se situó como el más letal del año 2016 por encima del nigeriano Boko Haram,²⁵ al pasar de 3.046 víctimas mortales en 2015 a 4.281 en 2016, cifra que podría ser superada en 2017, ya que entre enero y septiembre de 2017 se produjeron 3.287 víctimas mortales, según ACLED, sin incluir un grave atentado producido en octubre. El 14 de ese mes se produjo el **atentado más mortífero de la historia del país, en el que murieron 512 personas, otras 300 resultaron heridas y 70 permanecían desaparecidas en el balance realizado en diciembre**, por lo que también podrían haber muerto en el atentado, según fuentes oficiales. Un camión de grandes dimensiones cargado con 350 kg de material explosivo fue detonado en la zona conocida como PK5, cerca del hotel Safari, en una de las calles más concurridas de Mogadiscio. El atentado, que conmocionó el país y colapsó los servicios sanitarios durante varias semanas, no fue reivindicado, aunque las autoridades responsabilizaron a al-Shabaab. Ante la magnitud de los hechos, analistas señalaron que la organización podría no querer socavar su apoyo popular al asociarse con una pérdida tan grande de vida civil. No obstante, el ataque, cometido en medio de la escalada de las intervenciones de EEUU en el país y solo dos días después de la visita del jefe de AFRICOM al presidente somalí, pretendería incrementar la implicación de EEUU en Somalia, intensificada durante la administración Obama y que todavía ha aumentado más desde la llegada al poder de Donald Trump. Miles de somalíes se manifestaron en las calles de la ciudad para condenar los hechos.

El centro-sur del país se vio gravemente afectado por los continuos ataques de al-Shabaab, las operaciones militares de las Fuerzas Armadas somalíes apoyadas o lideradas por AMISOM así como las acciones de

22. Human Rights Watch, *Ethiopia: No Justice in Somali Region Killings*, 5 de abril de 2017.

23. En 2008, la Policía Liyu se convirtió en un grupo contrainsurgente poderoso y liderado por el jefe de seguridad de la región, Abdi Mohammed Omar, conocido como Abdi Illey, quien en 2010 se convirtió en presidente de la región de Somalí, aunque la Policía Liyu continuó bajo su mando. HRW, *Íbid*.

24. Armed Conflict Location & Event Data Project's, *Ethiopia*, November ACLED-Africa Conflict Trends Report, noviembre de 2017.

25. Véase la polémica suscitada en torno a la cuestión a raíz del informe de Africa Center for Strategic Studies, *Map of Africa's Militant Islamist Groups*, 26 de abril de 2017; *Al-Shabab and Boko Haram: Patterns of Violence*, ACLED, 2017; y Solomon, Salem y Frechette, Casey, "No, al-Shabab is not deadlier than Boko Haram. Here are better numbers", *The Washington Post*, 21 de julio de 2017.

contrainsurgencia y ataques aéreos de EEUU en el país. Las acciones de al-Shabaab se ampliaron progresivamente hacia el norte del país, tendencia ya destacada en los últimos años junto al aumento de acciones insurgentes protagonizadas por grupúsculos de ISIS en Somalia y el faccionalismo clánico. ACLED señaló que las acciones de las milicias de clanes, como las milicias de los clanes y subclanes Habar Gedir, Jejele y Darood-Marehan, contra la población civil fue un creciente factor de violencia en 2017. El clima de optimismo derivado de la elección como presidente de Mohamed Abdullahi “Farmajo”, en febrero, según diversos analistas, fue eclipsado por la persistencia de la violencia, la resiliencia de al-Shabaab, la debilidad crónica de los cuerpos de seguridad gubernamentales y, en definitiva, los déficits de gobernabilidad que apuntalan la inestabilidad que padece el país, según destacó el International Crisis Group. A esta situación se añadieron las crecientes tensiones entre Mogadiscio y los gobiernos regionales pertenecientes a la federación somalí, exacerbadas por la crisis entre Arabia Saudita y sus aliados contra Qatar, incluido el principal aliado internacional de Qatar, Turquía, que es a su vez uno de los principales donantes de Somalia. En paralelo, la anunciada retirada de AMISOM del país, prevista para 2020, iniciada en diciembre de 2017 con la reducción de 1.000 de los 22.000 soldados que dispone la misión, abrió un clima de preocupación ante los retos en términos de seguridad que todavía afronta el país (incluida la reforma del sector de seguridad) y ante una posible regresión de los avances alcanzados contra al-Shabaab por llevar a cabo una retirada precipitada.

En paralelo, se produjo un incremento sin precedentes de la presencia y ataques aéreos de EEUU en el país. En mayo murió en combate un soldado de los cuerpos especiales de EEUU, y otros dos resultaron heridos, la primera muerte en combate en el país desde 1993. El estadounidense Donald Trump autorizó nuevas prerrogativas a AFRICOM en el país en abril, lo que se tradujo en 34 operaciones aéreas durante 2017, concentradas en la segunda mitad del año, más del doble de las perpetradas en 2016 (14) o el triple que en 2015 (11). Solo el mes de noviembre concentró ocho ataques aéreos. Los ataques aéreos de EEUU tuvieron como objetivo al-Shabaab e ISIS. No obstante, en cinco ataques perpetrados desde julio resultaron muertos o heridos más de 50 civiles, entre los cuales menores. El Departamento de Defensa de EEUU dispone al menos de 500 miembros en el país (entre civiles, cuerpos especiales y miembros de contratistas), más del doble de las 200 personas de que disponía en marzo de 2017, según AFRICOM. EEUU estima que hay entre 3.000 y 6.000 combatientes de al-Shabaab en el país y menos de 250 miembros de ISIS. Además de la muerte de varios comandantes de al-Shabaab en operaciones militares, cabe destacar la desertión el 13 de agosto en Bakool

El 14 de octubre se produjo el atentado más mortífero de la historia de Somalia, en el que murieron 512 personas, otras 300 resultaron heridas y 70 permanecían desaparecidas en diciembre

del antiguo vicecomandante y portavoz de al-Shabaab, Mukthar Robow Ali, conocido como Abu Mansur, después de haber sobrevivido al último intento de al-Shabaab de ejecutarlo o capturarlo. Abu Mansur criticó las actividades de al-Shabaab por no estar al servicio de la población y pidió perdón por sus actos, además de pedir a la militancia del grupo que siguiera sus pasos. Abu Mansur había sido uno de los fundadores del grupo en su inicio y en 2013 se dio a la fuga por estar en desacuerdo con el nuevo liderazgo del grupo en manos de Ahmed Godane. Desde entonces al-Shabaab había llevado a cabo numerosos intentos de capturarlo y ejecutarlo por la posibilidad que revelara información sensible del grupo.

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, facciones de antiguos grupos armados
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país.

Persistió el clima de violencia política, abusos y vulneraciones de los derechos humanos derivado de la decisión del presidente, Pierre Nkurunziza, de postular a un tercer mandato presidencial, decisión considerada inconstitucional y que ya había provocado en 2015 una oleada de protestas sociales y un clima de represión que se ha traducido en un conflicto de baja intensidad. Continuaron cometiéndose graves violaciones de derechos humanos a diario con total impunidad principalmente por parte del Gobierno y de las milicias

juveniles Imbonerakure del CNDD-FDD, el partido del presidente. Según destacó en septiembre un informe de una comisión de investigación de la ONU establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se cometen periódicamente ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, casos de torturas y detenciones arbitrarias, acciones que tienen lugar en un entorno de privación de derechos básicos. El mandato de esta comisión se prolongó un año, a pesar de la resistencia del Gobierno. En paralelo, podrían estar cambiando los patrones de uso de la violencia, ya que los ataques con granadas a bares y otros lugares de reunión se habían centrado tradicionalmente en la capital, Bujumbura, pero durante el año afectaron otros lugares fuera de la capital. La mayoría de estos ataques podrían estar motivados políticamente, con miembros de los partidos de la oposición a menudo siendo el objetivo. No obstante, ACLED destacó que se había producido una reducción paulatina de actos de violencia, ya que en octubre se alcanzó el nivel más bajo de ataques y el segundo menor recuento de víctimas reportado (13) desde antes de las elecciones presidenciales de 2015, mientras que los meses de junio y julio tuvieron el balance más alto de víctimas mortales (34).²⁶ Desde inicios de la crisis en 2015 se estima que unas 400.000 personas han abandonado el país, según UNHCR. El componente policial de la ONU siguió sin desplegarse y la ampliación de la autorización de la resolución 2303 para promover el despliegue de la misión generó controversia en el Consejo de Seguridad, ya que se adoptó una declaración de la presidencia del Consejo sin incluir explícitamente esta cuestión.

Una comisión de investigación de la ONU dictaminó que en Burundi se cometen periódicamente ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, casos de torturas y detenciones arbitrarias

En el ámbito político fracasaron los intentos de reactivar el diálogo interburundés por parte de la EAC y la ONU debido al bloqueo del Gobierno a reconocer a la coalición opositora CNARED como interlocutor político en el proceso de diálogo. La ONU nombró en junio a su nuevo enviado especial para el país, Michel Kafando, el cuarto desde junio de 2015, en sustitución de Jamal Benomar, quien había tenido una difícil relación con el Gobierno burundés. Las autoridades señalaron que esperaban que el relevo pudiera reactivar el proceso pero alertaron de posible parcialidad hacia la oposición política. **El presidente Pierre Nkurunziza lanzó oficialmente la campaña para reformar la Constitución** vía un referéndum el 12 de diciembre, que se prevé para la primera mitad del 2018. Esta reforma contempla permitir al actual presidente competir por un cuarto mandato presidencial en las elecciones de 2020. Las enmiendas previstas pretendían abolir el límite de dos mandatos y prolongar el mandato presidencial a siete años. Por otra parte, cabe destacar que Burundi finalmente formalizó a finales de octubre su salida de

la CPI por considerar al tribunal parcial y centrado en los delitos perpetrados sólo por africanos. Es el primer Estado miembro que toma esta decisión, que supone un duro golpe para la justicia internacional, pero no afecta a la competencia de la Corte sobre una investigación anterior sobre Burundi. Fechada en 2015, incluye la muerte de 430 personas en las protestas registradas tras el anuncio de que el presidente Pierre Nkurunziza, antiguo líder rebelde de la comunidad hutu (mayoritaria en el país), optaba a un tercer mandato. La Fiscalía presentará en breve sus conclusiones. La marcha de Burundi fue notificada hace un año oficialmente a Naciones Unidas.²⁷ A pesar de todo, la fiscal jefe, Fatou Bensouda, siguió adelante con su trabajo en el país. Un expediente en el que figura el arresto de 3.400 personas y la huida de unas 230.000 más en busca de refugio en los países vecinos, además de asesinatos, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas completan la documentación.

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, MPC, UPC), milicias antibalaka, milicia 3R, Francia (operación Sangaris), MINUSCA, EUFOR, grupos vinculados al antiguo Gobierno de François Bozizé, otros remanentes de grupos armados (antiguas Fuerzas Armadas), grupo armado ugandés LRA
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

Desde su independencia en 1960, la situación en la RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, en,

26. ACLED, *Conflict Summaries – October 2017*, octubre de 2017.

27. Véase "La retirada de países africanos de la CPI: retroceso en términos de protección de los derechos humanos" en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo) de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2017! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2017.

la que participan combatientes extranjeros, tomó el poder en marzo de 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los últimos 10 años había combatido a estas insurgencias del norte. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Djotodia, para controlar a esta coalición rebelde, que cometió graves violaciones de los derechos humanos saqueos, ejecuciones extrajudiciales, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana ("anti balaka"). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del anterior presidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizado. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo que condujera a una transición negociada.

Durante el año **persistió el deterioro de la situación en el país experimentado desde septiembre y octubre de 2016 y que se recrudeció nuevamente en mayo y junio de 2017 en los alrededores de Bangassou y Bria**, contribuyendo al empeoramiento de la seguridad en gran parte del territorio. Si bien Bangui se mantuvo relativamente en calma, los enfrentamientos armados y la violencia contra la población civil continuaron en el resto del país, especialmente en el sudoeste, el centro, y algunas partes del oeste del país (prefecturas de Ouham y Ouham-Pendé), tal y como señaló el informe del secretario general de la ONU. La violencia fue provocada por el aumento de la competencia entre los grupos armados por el control sobre los recursos, cada vez más agravada por las tensiones entre comunidades y grupos étnicos, sobre todo entre musulmanes y cristianos. Surgieron nuevos grupos armados que intensificaron los enfrentamientos y los ataques contra civiles. El inicio de la temporada de lluvias no disminuyó sus acciones. En el centro y el este del país, muchos de los incidentes incluyeron actividades delictivas y ataques contra las comunidades musulmanas por parte de grupos antibalaka. La creciente retórica incendiaria divisiva utilizada por algunos agentes nacionales contribuyó a un aumento de las tensiones sectarias, especialmente en el sudeste del país, donde los musulmanes, en general, y los fulani, en particular, fueron blanco de ataques, según destacó en octubre el informe del secretario general de la ONU. Los ataques fueron llevados a cabo por motivos étnicos y religiosos por agentes armados cada vez más fragmentados y desorganizados, vagamente asociados con las facciones antibalaka o ex-Séléka.

A pesar de la firma del acuerdo para proceder al desarme de 13 de los 14 grupos armados activos en el país promovido por la Comunidad de Sant Egidio en junio en Roma, **el contexto político**

siguió caracterizándose por un recrudecimiento de la violencia. Se produjeron enfrentamientos entre milicias ex Séléka, entre milicias ex Séleka y antibalaka, y entre la misión de la ONU en el país y los grupos armados. Los grupos armados siguieron compitiendo por afianzar o ampliar su control sobre los recursos y el territorio. Las críticas al Gobierno se hicieron más fuertes y varias figuras de la oposición cuestionaron al presidente y a su Gobierno, por incapacidad de garantizar la estabilidad, según destacó el informe de la ONU. Las persistentes tensiones entre el poder ejecutivo y legislativo agravaron la situación. Varias iniciativas nacionales y regionales de paz y reconciliación no cobraron impulso durante el año, y el Gobierno, dirigido por el presidente Faustin Archange Touadéra, prácticamente no tenía ningún tipo de control de la situación fuera de la capital. Los esfuerzos de desarme avanzaron solo de forma limitada, y las facciones de los antiguos grupos Séléka y anti-balaka siguen estando armadas y controlando amplias zonas del país. La MINUSCA también fue objeto de críticas por no contener a los grupos armados e incluso por no desarmarlos a la fuerza y diferentes sectores pidieron el rearme de las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA) no reformadas. Durante el año murieron 25 cascos azules, 15 de ellos en acciones bélicas, convirtiéndose en la tercera misión de la ONU más peligrosa de la actualidad. Cabe destacar que en noviembre la misión fue prorrogada por un año más y se amplió con 900 soldados, alcanzando la cifra de 13.000 cascos azules y policías. Los trabajadores humanitarios también fueron objeto de ataques (12 muertos hasta finales de octubre), lo que redujo

gravemente el espacio humanitario, forzando el cierre de la presencia humanitaria en el terreno, como fue el caso de MSF, que en noviembre evacuó su misión en Bangassou, en el sureste del país, lo que dejó a medio millón de personas sin asistencia en esta localidad diamantífera fronteriza con RDC. Mientras tanto, el número de personas desplazadas internas aumentó en 200.000 en 2017, alcanzando un total de 600.000. El Gobierno exigió el levantamiento del embargo de armas para rearmar a las FACA con el argumento de proteger a los civiles. En este sentido, a mediados de diciembre Rusia solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que hiciera una excepción y permitiera el envío de nuevo armamento a los soldados entrenados por la misión de la UE, la EUTM RCA, a lo que accedieron EEUU y Francia con la condición de que se registraran los números de serie de cara a su trazabilidad. UNICEF señaló que el elevado clima de violencia, invisibilizado por los medios de comunicación, sitúa al país como uno de los peores donde ser menor de edad.

La ONU destacó que la creciente retórica incendiaria divisiva utilizada por algunos agentes nacionales contribuyó a un aumento de las tensiones sectarias en la República Centroafricana

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR, milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, grupos armados de Ituri, grupo armado de oposición burundés FNL, Rwanda, MONUSCO
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El actual conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de éste en 1997. Posteriormente, en 1998, Burundi, Rwanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabue, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio rwandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la desertión de los militares del antiguo grupo armado CNDP integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, llamada M23, apoyada por Rwanda. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada. A pesar de ello persiste el clima de inestabilidad y violencia.

La situación en el país se caracterizó por un grave deterioro de la situación humanitaria en el país y la persistencia de la grave crisis política y social como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila en diciembre de 2016, que derivó en un elevado clima de tensión a nivel nacional.²⁸ Siguió activos los diferentes focos de violencia en Haut Uélé y Bas Uélé (noreste del país), vinculados a las actividades del grupo armado de origen ugandés LRA;²⁹ en Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y Tanganica (este del país) por el conflicto armado vinculado a las actividades de las diferentes milicias Mai Mai, las FDLR y sus escisiones; y por el conflicto armado en el norte de la provincia de Kivu Norte por las actividades del grupo de origen ugandés ADF. Finalmente, se produjo un grave deterioro de la situación en Kasai (centro-sur), donde este nuevo conflicto provocó que la población desplazada se doblara en el país, **alcanzando los 4,1 millones de personas desplazadas en el conjunto**

La ONU elevó la situación de emergencia de RDC a la categoría de otros tres países: Siria, Iraq y Yemen

de la RDC, situando al país como el primero en número de desplazados en África. Más de 622.000 congolese se encuentran refugiados en países vecinos, 100.000 de ellos este año. El país albergaba más de medio millón de refugiados de los vecinos Burundi, RCA, Rwanda y Sudán del Sur. Alrededor de 7,7 millones de personas padecían inseguridad alimentaria grave, un aumento del 30% respecto de hace un año. Aproximadamente 13,1 millones de personas (en su mayoría mujeres y menores), necesitarán protección y asistencia humanitaria en 2018, lo que representa un aumento del 50% con respecto a 2017.

Las provincias de Kivu Norte y Sur continuaron siendo el feudo de decenas de grupos armados y milicias Mai Mai que llevaron a cabo acciones periódicas de saqueo, extorsión y ataques contra MONUSCO y las FARDC. La organización HRW y el centro de investigación Congo Research Group crearon el Kivu Security Tracker para hacer un seguimiento de la violencia en los Kivus. Según este portal, entre junio y noviembre de 2017 al menos 526 civiles fueron asesinados en los Kivus, al menos 1.087 personas fueron secuestradas, y hubo al menos siete incidentes de violaciones en masa. En octubre, la ONU elevó la situación de emergencia del país al nivel 3, categoría que solo se otorga a otros tres países: Siria, Iraq y Yemen. En materia de explotación de recursos naturales, se siguió documentando informaciones relativas a contrabando de estaño, tántalo y tungsteno, infracciones del sistema de rastreo de esos minerales, así como violaciones del embargo de armas y desvíos por parte de las FARDC hacia los grupos armados procedentes de Burundi. Las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario siguieron siendo una práctica generalizada. Respecto a las milicias Mai Mai y otros grupos, como el grupo Nyatura, **se constató un incremento de las actividades armadas y la expansión de las zonas bajo su control como consecuencia del envío de unidades de las FARDC estacionadas en los Kivus hacia Kasai, para hacer frente a la insurgencia de Kamwina Nsapu.**

A pesar de esta situación, la ONU anunció el cierre de diversas bases en Kivu Norte durante el año como consecuencia de los recortes en las actividades de mantenimiento de la paz. En la provincia de Ituri, la FRPI seguía siendo la mayor amenaza para la población civil, y fue responsable de gran parte de los abusos de los derechos humanos documentados en la zona.

En 2016 las FDLR quedaron debilitadas por las operaciones Sukola II dirigidas por las FARDC y la escisión del CNRD³⁰ y siguieron perdiendo fuerza a causa de las defecciones y la falta casi completa de nuevos reclutas. Sin embargo, el grupo armado mantuvo alianzas con grupos armados congolese y generó ingresos mediante la venta local de carbón vegetal y madera producidos principalmente dentro del Parque Nacional de Virunga, según destacó el informe del Grupo de expertos de la ONU en RDC.³¹ Los enfrentamientos del CNRD

28. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 2 (Tensiones) y en el capítulo 3 (Procesos de paz).

29. Véase el resumen de África Central (LRA) en el capítulo 2 (Tensiones).

30. Véase el resumen sobre RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados) de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2017! Informe sobre sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2017.

31. Grupo de Expertos sobre la RDC, *Informe de mitad de período del Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) del Consejo de Seguridad*, Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) relativa a la República Democrática del Congo, S/2017/1091, 22 de diciembre de 2017.

con las FDLR disminuyeron, aunque las FDLR estuvieron involucradas en varios incidentes con grupos armados locales. Las FDLR están emplazadas principalmente en la zona tribal de Bwito (territorio de Rutshuru, el Petit Nord), cuentan con un número de combatientes estimado de entre 400 y 600. Por su parte, el CNRD también se seguía debilitando a causa de las constantes deserciones y las dificultades para reclutar a nuevos combatientes, y contaba con unos 300 miembros. En la provincia de Kivu Sur, el resurgimiento de las milicias Mai Mai Yakutumba y el control temporal de posiciones de las FARDC, cerca de la ciudad de extracción de oro de Misisi, a finales de junio, provocaron el desplazamiento forzado de 80.000 personas. Las FARDC lograron repeler el grupo armado con el apoyo de la MONUSCO. Sin embargo, las Yakutumba consolidaron su posición y control sobre un importante tramo de la costa del lago Tanganica, realizando operaciones de piratería y acelerando las actividades de contrabando, lo que contribuyó en mayor medida al fortalecimiento del grupo armado. El conflicto entre las milicias luba y twa se intensificó en el territorio de Kalemie (provincia de Tanganica) durante el año, causando decenas de víctimas mortales.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congoleños que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenya y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización islamista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda, gozaba también del apoyo de Kenya y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congoleña, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil.

Continuó activo el conflicto armado en la zona conocida como Grand Nord (norte de la provincia de Kivu Norte), en el este del país, en el que participa el grupo armado

de origen ugandés ADF. **Las ADF continuaron operando en el territorio de Beni (Grand Nord), y aunque se redujeron las matanzas de civiles,** aumentó el número de secuestros de civiles, y además se intensificaron sus acciones insurgentes contra las FARDC y la MONUSCO. En diciembre **Uganda llevó a cabo una operación militar de envergadura en territorio congolés contra las ADF.** Durante el 2017 diversos informes de la ONU constataron que las ADF continuaron llevando a cabo actividades de reclutamiento forzado en RDC, Uganda y Rwanda, utilizando falsas promesas para atraer a jóvenes ugandeses pobres hacia la región oriental de la RDC, donde los obligaban a sumarse al grupo armado. Persistió el descontento de la población local y de la sociedad civil y la oposición política contra el Gobierno y la MONUSCO ante la incapacidad gubernamental para controlar la situación.

La ONU habría determinado un cambio del modus operandi de las ADF, pasando de evitar el contacto con las FARDC a realizar ataques directos contra sus efectivos. Este cambio podría estar relacionado con un interés común entre algunos comandantes de las ADF y grupos Mai Mai, que recientemente han centrado sus ataques en las FARDC y los símbolos del Estado. La MONUSCO siguió siendo uno de los objetivos de las ADF. Cabe remarcar que en diciembre **se produjo en Semliki (Kivu Norte) el ataque más mortífero cometido en el país por un grupo armado contra personal de mantenimiento de la paz de la ONU, en el que resultaron muertos 15 soldados de Tanzania y otros 44 resultaron heridos.** La autoría del ataque se atribuyó a las ADF. El 22 de diciembre, Uganda informó que, tras consultar con las autoridades de la RDC, sus Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF), habían llevado a cabo un “ataque quirúrgico” en campamentos de las ADF en el territorio de Beni. El ataque de las UPDF se produjo desde el territorio de Uganda en la zona fronteriza. El 27 de diciembre el portavoz del Ministerio de Defensa ugandés anunciaba que los ataques de 22 de diciembre de las UPDF iban dirigidos contra ocho campamentos de las ADF y que causaron la muerte de un centenar de miembros de las ADF y varios heridos.

RDC (Kasai)	
Inicio:	2017
Tipología:	Gobierno, Identidad Interno
Actores:	RDC, diversas milicias de adscripción étnica (Bana Mura, Kamwina Nsapu)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto en la región del Grand Kasai, que incluye cinco provincias del centro-sur del país (Kasai-Central, Kasai, Kasai-Oriental, Lomami y Sankuru), enfrenta a las fuerzas de seguridad del Estado congolés contra diversas milicias de la zona, organizaciones que también se enfrentan entre

ellas y contra la población civil. En 2012, Jean-Pierre Pandi debía suceder a su difunto tío como el sexto “Kamwina Nsapu”, uno de los principales jefes consuetudinarios en el territorio de Dibaya en Kasai-Central. Tales jefes desempeñan un papel importante, ejerciendo el control sobre la tierra y la administración en sus dominios. Supuestamente apolíticos y seleccionados de acuerdo con las tradiciones, deben ser reconocidos por el Estado central, requisito que alienta a los jefes a apoyar al régimen para que respalde a los solicitantes. En Grand Kasai, la interacción entre la autoridad consuetudinaria y la administración del presidente congolés Joseph Kabila ha sido particularmente compleja porque la región es un bastión de la oposición. Kinshasa se negó a reconocer oficialmente a Pandi lo que incrementó la tensión. En agosto de 2016, Pandi fue asesinado en su casa durante enfrentamientos entre sus combatientes y las fuerzas de seguridad en circunstancias controvertidas, lo que desencadenó una rebelión por parte de sus seguidores, que adoptaron el nombre de Kamwina Nsapu para vengar a su líder. El movimiento se convirtió en una insurrección generalizada al sumarse otros grupos de la zona. Los grupos han ganado notoriedad por su extensivo reclutamiento de menores. El conflicto, inicialmente en Kasai-Central, se extendió a otras localidades y hacia las provincias de Kasai, Kasai-Oriental, Sankuru y Lomami. La desproporcionada respuesta de las FARDC provocó la escalada de la situación, que ha tomado un cariz intercomunitario ya que Kamwina Nsapu, surgida de la comunidad luba, ha ampliado sus ataques a la población que no pertenece a esta etnia, y el Gobierno ha apoyado a la milicia Bana Mura, de la comunidad tchokwe.

La situación se deterioró gravemente en la región de Kasai, en el centro del país. Los enfrentamientos entre la milicia Kamwina Nsapu y el Gobierno congolés, y entre milicias de grupos étnicos, continuaron durante el año y se extendieron a las cinco provincias que forman el Grand Kasai. Las milicias actúan de forma autónoma y no disponen de un liderazgo claro. Aunque en un inicio la milicia Kamwina Nsapu había focalizado sus ataques contra los cuerpos de seguridad del Estado y funcionarios civiles, progresivamente nuevas milicias han surgido y han ampliado sus ataques a otros grupos étnicos de la región acusados de simpatizar con el régimen de Joseph Kabila. Asimismo, también se desencadenaron represalias contra la población civil acusada de apoyar a los grupos insurgentes. Durante el año la ONU identificó al menos 80 fosas comunes en la región y condenó los graves abusos que se están cometiendo en la zona de los que parte son responsabilidad de los cuerpos de seguridad, que estaría actuando de forma indiscriminada contra la población civil. El representante de la ONU sobre Derechos Humanos, Jose María Aranaz, anunció que el país debía identificar a los policías y otros cuerpos de seguridad involucrados en las masacres de la región de Kasai. La milicia Bana Mura está recibiendo apoyo por parte de las FARDC y la Policía para combatir a las milicias luba, y está formada por miembros de la comunidad tchokwe. Bana Mura ha ejecutado a civiles de las comunidades luba y luluwa acusados de apoyar a Kamwina Nsapu o a alguna de las milicias y grupos autónomos que combaten a las FARDC, con el apoyo e incluso junto a los cuerpos de seguridad, y se le acusa de atrocidades y graves violaciones de los derechos humanos contra

menores y mujeres. La ONU denunció 251 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las milicias Bana Mura, Kamwina Nsapu y las FARDC desde el inicio del conflicto en agosto de 2016. **La Iglesia Católica situó en junio la cifra de víctimas mortales del conflicto en 3.383 desde el inicio del conflicto**, y denunció que al menos 20 localidades habían sido incendiadas y destruidas, la mitad por parte de las FARDC. Las cifras de la ONU para los seis primeros meses de 2017 sitúan la cifra de víctimas mortales en 428. Algunos de los hechos más destacados fueron la ejecución y decapitación de al menos 40 policías el 24 de marzo. MSF alertó que la región de Kasai se había convertido en una de las principales crisis humanitarias del mundo. Desde agosto de 2016, 1,4 millones de personas de las cinco provincias que componen la región del Grand Kasai se han visto forzadas a desplazarse como consecuencia de la violencia, entre las cuales 850.000 menores, alcanzando los 4,1 millones de desplazados en el conjunto de la RDC, situando al país como el primero en número de desplazados en África.

Sudán (Darfur)	
Inicio:	2003
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, unidades paramilitares RSF, janjaweed, coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), otros grupos, UNAMID
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Síntesis:	El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región por parte de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes <i>janjaweed</i> . La magnitud de la violencia cometida por todas las partes contendientes contra la población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades, según Naciones Unidas. Después de la firma de un acuerdo de paz (DPA) entre el Gobierno y una facción del SLA en mayo del 2006, la violencia se recrudeció, además de generar la fragmentación de los grupos de oposición y un grave impacto regional por los desplazamientos de población, por la implicación sudanesa en el conflicto chadiano y la participación chadiana en el conflicto sudanés. A esta dimensión se suma la tensión intercomunitaria por el control de los recursos (tierra, agua, ganado, minas), en algunos casos instigada por el propio Gobierno. La misión de observación de la UA AMIS, creada en 2004, fue integrada en el año 2007 en una misión conjunta UA/ONU, la UNAMID. Esta misión ha sido objeto de múltiples ataques e incapaz de cumplir con su mandato de proteger a la población civil y al personal humanitario.

Se redujo la violencia asociada al conflicto armado, si bien continuaron produciéndose enfrentamientos. El

Gobierno prolongó el alto el fuego en Darfur –así como en Kordofán Sur y Nilo Azul– en enero por seis meses, de nuevo en julio por cuatro meses y en octubre hasta el 31 de diciembre. En diversos momentos del año el Gobierno dio por acabado el conflicto en Darfur, en contraste con los hechos de violencia –tanto ataques contra civiles, como enfrentamientos entre fuerzas de seguridad e insurgencia, como violencia entre sectores de la insurgencia– y con las dificultades del proceso de paz. Ocho personas murieron y unas 60 resultaron heridas a manos de hombres uniformados en Jebel Marra en enero. La insurgencia del SLA-MM acusó a fuerzas pro-gubernamentales. Choques entre las RSF y el grupo armado SLM-AW en abril resultaron en una veintena de fallecidos, también en Jebel Marra. Se incrementó la violencia en mayo, con nuevos choques entre Ejército y las RSF y las insurgencias SLM-MM y SLM-TC, que habría causado miles de desplazados. En relación al rebrote de violencia, el Gobierno y las RSF acusaron a la insurgencia de intentar tomar de nuevo Jebel Marra abriendo dos frentes, con combatientes retornados de Libia y Sudán del Sur. Asimismo, se produjeron choques en Darfur del Norte en noviembre entre las RSF y combatientes leales a Musa Hilal, ex asesor del presidente sudanés, Omar al-Bashir, con una decena de víctimas mortales, precedidos de tensiones y enfrentamientos en meses anteriores, en el marco de la implementación de la campaña de recolección de armas anunciada en julio. El Gobierno exigió en noviembre a todos los grupos armados de Darfur la entrega de armas. A su vez, se registraron choques entre fuerzas de seguridad y población desplazada del campo de Kalma (Darfur del Norte) en septiembre, en protesta por la visita de al-Bashir, con tres fallecidos y una treintena de heridos.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en junio una reducción del 30% de las tropas y policía de la misión UNAMID y la reconfiguración de sus operaciones, en medio de alertas de organizaciones de derechos humanos sobre los riesgos para la seguridad de la población civil, ante la continuación de los abusos del régimen. En el marco del repliegue, la UNAMID informó en octubre del cierre de 11 bases de operaciones en Darfur. Según el plan aprobado, la misión quedará reducida a 11.395 militares y 2.888 policías en enero de 2018 y, tras una evaluación de las condiciones en Darfur, a 8.735 militares y 2.500 policías en junio de 2018. Por otra parte, EEUU aprobó el levantamiento definitivo del embargo comercial y otras sanciones –algunas en vigor desde hacía 20 años– contra Sudán, alegando progresos en la lucha antiterrorista y en derechos humanos, en medio de críticas de organizaciones de derechos humanos.

Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)	
Inicio:	2011
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado

Actores:	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

La reconfiguración nacional de Sudán tras la secesión del sur, en julio de 2011, agravó las tensiones del Gobierno sudanés con las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul, que durante el conflicto armado sudanés apoyaron a la insurgencia sureña del SPLA. La necesidad de introducir reformas democráticas y de llevar a cabo una descentralización efectiva, que permita el desarrollo económico de todas las regiones que constituyen el nuevo Sudán, se encuentra en la base del resurgimiento de la violencia. La falta de reconocimiento de la pluralidad étnica y política, en la que se incluyen las formaciones políticas ligadas al SPLM sureño, sería también otra de las raíces de la violencia. La contraposición entre las élites de Jartum y los estados del Alto Nilo, que controlan la riqueza económica sudanesa, y el resto de los estados que conforman el país se sitúa en el eje de las tensiones que amenazan la paz.

Se redujo la violencia en el conflicto armado entre el Gobierno y las insurgencias en los estados de Kordofán sur y Nilo Azul.

Como en el caso de Darfur, el Gobierno extendió el alto el fuego durante el año, prolongándolo en enero, julio y octubre, hasta finales de diciembre. Pese a la medida, se registraron enfrentamientos en diversos momentos del año, incluyendo choques entre facciones insurgentes. Se produjeron choques entre el Ejército y el SPLM-N tras la muerte de cerca de siete pastores cerca de la capital de Kordofán Sur, Kadugli, el 10 de febrero. El SPLM-N acusó al Gobierno y milicias progubernamentales del ataque y de tratar de arrastrar a tribus locales al conflicto, mientras el Ejército acusó al grupo de iniciar las hostilidades. Pese a las tensiones, el grupo armado liberó a principios de marzo a 125 prisioneros, mayoritariamente soldados retenidos en Kordofán Sur y en Nilo Azul, a través de la mediación de Uganda y con apoyo del CICR. La medida fue acompañada días después por la liberación por parte del Gobierno de 259 rebeldes de diversos orígenes. Aun así, se produjeron choques y acusaciones de violaciones del alto el fuego entre el Ejército y el SPLM-N en otros momentos del año, como a finales de junio y septiembre.

Por otra parte, se acrecentaron las tensiones dentro del SPLM-N.

Su vicepresidente Abdel-Aziz al-Hilu dimitió en marzo por desacuerdos con su máximo dirigente, Malik Agar, y con la posición negociadora del grupo, contraria a plantear la cuestión de la autodeterminación de las Montañas Nuba, como defendía al-Hilu. El Consejo de Liberación de las Montañas Nuba, órgano político del SPLM-N, aprobó en junio relegar a Agar y nombrar a al-Hilu como nuevo líder y comandante general, así como retirar también al secretario general y principal negociador Yasir Arman, e impedirles entrar en áreas bajo control del grupo. El órgano político justificó las medidas en la negativa de Agar y Arman a incluir la cuestión de la autodeterminación de las Montañas

Nuba en las negociaciones con el Gobierno. La tensión llevó a choques entre facciones leales a Agar y al-Hilu a finales de julio en el estado de Nilo Azul, que llevaron a combatientes seguidores de Agar a desplazarse al estado del Alto Nilo y a Sudán del Sur. Se produjeron nuevos choques en agosto en Nilo Azul, con varias decenas de víctimas mortales entre los combatientes. La conferencia general celebrada por el SPLM-N en octubre ratificó a al-Hilu como nuevo líder y reiteró la demanda de autodeterminación, mientras cerró la puerta al acercamiento con la facción liderada por Agar. A finales de año el presidente sudanés extendió el estado de emergencia al estado de Kordofán Norte y Kasala, que se suma a la medida vigente en Kordofán Sur y Nilo Azul y los cinco estados de Darfur.

Las divisiones internas en el bloque gubernamental y en el bloque insurgente agravaron el conflicto en Sudán del Sur

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF,SSNLM, REMNASA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS.
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del ex vicepresidente Riek Machar, quien cuenta con el apoyo de algunos de estos militares y milicias desafectas.

Cuatro años después del inicio del conflicto, la situación en el país continuó siendo de extrema gravedad entre los

diferentes actores del escenario sursudanés. **Persistió la grave situación humanitaria, las sistemáticas violaciones de los derechos humanos (detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, presión a actores políticos opositores) y el clima de inseguridad reinante.** En lo concerniente a la seguridad, los enfrentamientos entre el Gobierno y los actores opositores fueron permanentes en numerosas áreas del país, entre las que se incluyen las regiones de Ecuatoria y el Alto Nilo, y se teme que se produzca un incremento de la violencia debido a la proximidad de la estación seca (noviembre-abril) y la mejora de la movilidad, que tradicionalmente se traduce en un incremento de los niveles de violencia. Entre los meses de mayo y octubre, coincidiendo con la temporada de lluvias, se redujo la intensidad del conflicto. Según OCHA, hay 1,86 millones de personas desplazadas internas y 2,1 millones de personas refugiadas en los países vecinos, cifra que no para de aumentar. Aproximadamente 4,8 millones de personas se enfrentan a una grave situación de inseguridad alimentaria, cifra que a principios de 2018 se elevará, previsiblemente, a 5,1 millones, de los cuales 1,1 son menores, según alertó Save the Children.

A pesar de declarar un cese al fuego unilateral en mayo, el Gobierno lanzó operaciones militares contra posiciones del opositor SPLA-IO y recuperó el control de determinadas zonas controladas por el SPLA-IO. Las divisiones visibles dentro de facciones progubernamentales e insurgentes corren el riesgo de socavar aún más la situación de seguridad, según destacó el centro de investigación ACLED. En primer lugar, el descontento entre las fuerzas de seguridad por el hecho de que el Gobierno no pagó sus salarios en medio de dificultades económicas y escasez de alimentos se ha traducido en niveles crecientes de criminalidad. En Juba se denunciaron regularmente robos a mano armada en los últimos meses del año, así como saqueos y quema de propiedades civiles en áreas agrícolas. En segundo lugar, ha habido tensiones internas crecientes en la comunidad dinka, que dividen la base de apoyo del Gobierno. La violencia entre las comunidades dinka ha continuado tanto en Aweil en el norte de Bahr el Ghazal como en Warrap (estado natal del presidente Kiir) desde que Kiir declaró el estado de emergencia en estos dos estados en julio. Las tensiones se vieron agravadas por el descontento por el confinamiento domiciliario del ex general del Ejército Paul Malong por parte del Gobierno en Juba entre su comunidad de origen en Aweil y el gubernamental SPLA, lo que provocó desertiones. En tercer lugar, el SPLA-IO se vio limitado por el aumento de la competencia con nuevos frentes rebeldes. También se continuaron formando nuevos grupos, lo que subraya la falta de coherencia dentro del movimiento insurgente. A pesar de que el 21 de diciembre de 2017 las facciones enfrentadas en Sudán del Sur firmaron un acuerdo de alto el fuego, los combates no cesaron, y era probable que se agravaran durante la estación seca. A principios de año la posibilidad de establecer el embargo de

armas, iniciativa perseguida por EEUU, volvía a estar sobre la mesa. La organización regional IGAD continuó llevando a cabo iniciativas de cara a promover el diálogo entre las partes durante todo el año y, a finales de 2017, realizó consultas de cara a preparar la celebración del foro de revitalización del proceso de paz (High-Level Revitalization Forum) en los primeros meses de 2018.

Magreb - Norte de África

Argelia	
Inicio:	1992
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jun al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a distintos grupos islamistas desde comienzos de los noventa, tras un ascenso del movimiento islamista en Argelia que respondió al descontento de la población, la crisis económica y la falta de espacios de participación política. La confrontación se inició después de la ilegalización del Frente Islámico de Salvación (FIS) en 1992 tras su triunfo electoral frente al partido histórico que había liderado la independencia del país, el Frente de Liberación Nacional. La lucha armada enfrentó a varios grupos (EIS, GIA y el GSPC, escindido del GIA y convertido en Al Qaeda en el Magreb Islámico en 2007) con el Ejército, apoyado por milicias de autodefensa. El conflicto provocó unas 150.000 muertes durante los noventa y continúa cobrándose víctimas, aunque los niveles de violencia han descendido desde 2002, después de que algunos grupos renunciaran a la lucha armada. En los últimos años el conflicto ha estado protagonizado principalmente por AQMI, que se convirtió en una organización transnacional, ampliando sus operaciones más allá del territorio argelino y afectando a países del Sahel. Argelia, junto a Malí, Libia, Mauritania y Níger, entre otros, se han enfrentado a AQMI y otros grupos armados que operan en la zona, entre ellos el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y las organizaciones al-Mourabitoun (Firmantes de Sangre), Jund al-Khilafa (filial de ISIS) e ISIS.

El conflicto armado en Argelia mantuvo una tendencia similar a la de 2016 y años previos, con hechos de violencia de baja intensidad que, según datos oficiales, dejaron en torno a un centenar de fallecidos. De acuerdo con las cifras publicadas por el ministerio de Defensa argelino, **durante 2017 el Ejército dio muerte a 91 presuntos militantes y recuperó los cuerpos de otros seis, además de arrestar a otros 40, incluyendo nueve mujeres.** Adicionalmente fueron detenidas otras 200 personas acusadas de formar parte de las redes de apoyo a grupos armados; se

decomisaron más de 600 armas, junto a municiones y productos de propaganda; y se destruyó material explosivo. En paralelo, informaciones de prensa también reseñaron algunas acciones de militantes armados contra las fuerzas de seguridad argelinas que habrían provocado algunas bajas. Entre ellas el ataque de combatientes de AQMI que dejó tres soldados muertos en la provincia de Ain Defla (norte), en mayo; o los atentados explosivos reivindicados también por AQMI que provocaron la muerte a cuatro militares en Tebessa (noreste) y Batna (noreste) en junio y julio. La filial de ISIS en Argelia también reclamó la autoría de algunas ofensivas contra gendarmes y estaciones de policía que causaron algunos heridos. Algunos ataques fueron reivindicados tanto por AQMI como por ISIS. Respecto a la filial de ISIS, durante 2017 se informó de la muerte en una operación militar del líder del escuadrón Ghoraba, en la provincia de Constantine, en marzo; y del desmantelamiento de una célula encabezada por un ex dirigente de AQMI que presuntamente planeaba ataques en Argel.

AQMI siguió siendo el grupo armado más relevante en el país norteafricano. Durante 2017, diversos análisis llamaron la atención sobre su evolución a diez años de su filiación a al-Qaeda. Si bien el grupo mantiene sus operaciones en Argelia, las circunstancias estratégicas –incluyendo las operaciones militares que han limitado sus actividades– han debilitado a la organización en este país y motivado un creciente foco hacia el sur, hacia el Sahel, en un proceso de “africanización”. Así, durante el año, las acciones más significativas de AQMI y sus filiales se produjeron fuera de las fronteras de Argelia, en especial en Malí.³² En abril, en una entrevista con una publicación de AQPA (la filial de al-Qaeda en Yemen) **el líder de AQMI, Abdelmalek Droukdel, reconoció las dificultades que enfrenta el grupo en Argelia por falta de apoyos, en contraste con lo que califica como “despertar yihadista” en Libia, Túnez y áreas del Sahel.** Según fuentes de seguridad, en total habría entre 800 y un millar de militantes activos en Argelia –principalmente en zonas montañosas y áreas fronterizas– y los grupos armados que operan en el país enfrentarían crecientes problemas para reclutar nuevos militantes. Esto habría llevado a estas organizaciones, según fuentes de seguridad, a pedir refuerzos a células en Túnez y Libia. De acuerdo con informaciones de prensa, células que hasta ahora mantenían sus bases en las montañas de Kabylia y Jijel se desplazaron al sureste, cerca de la frontera con Túnez.

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado

32. Véase el resumen sobre Malí (norte) en este capítulo.

Actores:	Gobierno de Acuerdo Nacional con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, facciones armadas vinculadas a la Operación Dignidad (Ejército Nacional de Libia o ENL), grupos armados vinculados con la Operación Amanecer, milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI, entre otros actores armados; EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, EAU, entre otros países
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la “liberación” de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y la conformación de dos parlamentos y dos gobiernos, en Tobruk y Trípoli, que cuentan con el apoyo de sendas coaliciones armadas. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto dificultados por este panorama de fragmentación y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de nuevos grupos, como ISIS, en el país norteafricano.

La situación en Libia siguió deteriorándose a lo largo de 2017 como consecuencia de la **persistente crisis política, la fragmentación institucional y la actividad de un sinnúmero de grupos armados de diverso signo que derivaron en múltiples focos de violencia en todo el territorio**. A pesar de las iniciativas de la ONU y actores regionales e internacionales para intervenir en la marcha del proceso político en el país norteafricano –incluyendo la UE, la UA, países vecinos y Estados europeos–, durante el año persistieron los desacuerdos y las dificultades para implementar el acuerdo de Skhirat suscrito en diciembre de 2015. Así, continuó la bicefalia de centros de poder, con un gobierno de facto en el este del país, con base en al-Bayda, y otro en Trípoli, vinculado al Consejo Presidencial y encabezado por el primer ministro Fajez Sarraj, creado según las disposiciones del acuerdo de Skhirat y con reconocimiento internacional, pero altamente frágil y con ascendencia sobre una limitada fracción de los cuerpos armados. Adicionalmente, igual que el

año anterior, sectores vinculados a Khalifa Ghweil y al autodenominado Gobierno de Salvación Nacional (GSN) –que en el pasado estuvo en funcionamiento en Trípoli– volvieron a desafiar al Ejecutivo de Serraj en la capital libia, creando una Guardia Nacional paralela e intentando tomar el control de sectores de la ciudad. Las diferencias internas también se reflejaron en el seno de la Cámara de Representantes, donde sectores cuestionaron el diálogo auspiciado por la ONU. En paralelo al convulso clima político, las diversas dinámicas de conflicto derivaron en enfrentamientos armados en todo el país, en especial en zonas como Bengasi, Derna, Misrata, Sirte, Trípoli, la zona petrolera del Golfo de Sirte y las provincias de Sabha y al-Jufrah (centro-sur). **Los combates, ataques explosivos y bombardeos causaron la muerte de centenares de personas durante 2017**, aunque la cifra total de víctimas a causa de las hostilidades era difícil de precisar.

Entre los episodios de violencia más significativos cabe mencionar los enfrentamientos entre el Ejército Nacional Libio (ENL) del general Khalifa Hifter y la coalición armada Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB) en torno a las instalaciones petroleras de Sidra y Ras Lanuf que causaron más de 40 muertes en marzo; los choques entre fuerzas del Gobierno liderado por Serraj y opositores del GSN que dejaron más de 50 fallecidos en Trípoli en mayo; el ataque del grupo Third Force (de Misrata) y BDB contra la base aérea de Brak al-Shati, en el sur que causó la muerte a entre 80 y 130 miembros del ENL, además de civiles, también en mayo; las hostilidades en las zonas de Sabha y Jufrah (centro-sur), incluyendo ataques aéreos del ENL contra grupos rivales que provocaron decenas de fallecidos a mediados de año; los continuos combates del ENL con grupos armados en Bengasi (este), incluyendo Shura Council of Benghazi Revolutionaries que acabó siendo expulsado de la ciudad en junio; y el asedio a la ciudad de Derna (este) por parte del ENL, en el marco de su lucha con milicias islamistas, que llevó a un grave deterioro de la situación humanitaria durante el segundo semestre. Cabe destacar que, tras la expulsión de su feudo en Sirte en 2016, el grupo armado ISIS también continuó activo en Libia en forma de pequeñas células en distintos puntos del territorio. La organización lanzó diversos ataques durante el año, principalmente contra las fuerzas de la operación Bunyan al-Marsous (BAM). Además, **varios terceros Estados continuaron interviniendo en Libia. Así, EEUU lanzó ofensivas contra posiciones de ISIS**, una de las cuales causó la muerte a unos 90 miembros del grupo al sur de Sirte en enero y a otros 17 en septiembre. Egipto, en tanto, apoyó con ataques aéreos las acciones del ENL en el centro-sur de Libia y lanzó una ofensiva en Derna en mayo después de un ataque contra cristianos coptos reivindicado por ISIS.³³ En términos generales, a nivel de frentes de batalla, se constató una consolidación del ENL en Bengasi y un avance de este grupo desde el este hacia el oeste y centro sur del país. En paralelo, Hifter siguió

33. Véase el resumen sobre Egipto en este capítulo.

perfilándose como una figura clave en el devenir de Libia. El general mantuvo algunas reuniones con Serraj, quien en julio propuso una hoja de ruta para resolver la crisis. Tras una reunión en París, ambos suscribieron una declaración comprometiéndose a un cese el fuego y a trabajar por restituir la seguridad del país y celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias. No obstante, poco después **Hifter puso en duda la capacidad de que este acuerdo pudiera implementarse y, al finalizar el año, rechazó públicamente el acuerdo político de 2015 y consideró obsoletas las instituciones emanadas del pacto, incluyendo el Gobierno de Serraj.** En este contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU defendió la vigencia del acuerdo y el nuevo enviado especial a Libia, Ghassan Salamé –nombrado en julio en sustitución de Martin Kobler– continuó promoviendo un plan para salir de la crisis que incluía la reformulación de algunos aspectos del acuerdo de Skhirat.

A esta compleja situación política y de seguridad cabe **añadir el panorama de derechos humanos en Libia, que continuó siendo crítico.** ONG y sucesivos informes de la misión de la ONU en el país (UNSMIL) denunciaron las repetidas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario perpetradas por numerosos actores armados libios, entre ellas ejecuciones sumarias, secuestros, torturas, asesinatos de civiles, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ofensivas contra centros de salud. Adicionalmente, **un tema de especial preocupación fue el de la vulnerabilidad de la población migrante y refugiada en Libia, sometida a condiciones extremas:** detenciones arbitrarias en atestados centros administrados por el oficial Departamento para el Combate de la Inmigración Ilegal libio (DCIM, por sus siglas en inglés), por grupos armados o redes de trata y tráfico de personas; acceso insuficiente a comida, agua e instalaciones sanitarias; torturas, trabajos forzados y explotación sexual. En abril, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció la existencia de mercados de esclavos y esclavas en Libia. Estas denuncias transcurrieron en paralelo a la adopción de una serie de medidas para frenar los flujos de población migrante y refugiada hacia Europa, a partir de acuerdos de autoridades libias con la UE e Italia que supusieron una reducción en 67% de la llegada de personas a las costas italianas entre julio y noviembre, en comparación con el mismo período de 2016. **El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos calificó de “inhumanas” las políticas de asistencia de la UE a la Guardia Costera libia para interceptar y retornar inmigrantes en el Mediterráneo.** Amnistía Internacional acusó a gobiernos europeos de complicidad en los abusos, alertó sobre la colusión entre miembros de la

La situación de la población migrante y refugiada en Libia causó especial preocupación en 2017, en especial después de que la OIM denunciara la existencia de mercados de esclavos y esclavas en el país

Guardia Costera libia y las redes de tráfico y trata y apuntó que unas 20.000 personas permanecían detenidas en los centros gestionados por el DCIM, donde la extorsión y la tortura son prácticas habituales.³⁴

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FARC-EP, ELN, nuevos grupos paramilitares
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacen dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del statu quo mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia.

Se produjo una desescalada de la violencia en el marco del conflicto armado que afecta a Colombia. Por una parte, **tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, finalizó el desarme y la desmovilización de este**

grupo armado, en un proceso verificado por la ONU que culminó en agosto con la retirada de los contenedores de armas.

No se registraron nuevos enfrentamientos entre las FARC y las fuerzas de seguridad colombianas, lo que llevó a actores políticos, sociales e internacionales a dar por finalizado el conflicto entre FARC y Gobierno. No obstante, y tal como recogieron algunas investigaciones,³⁵ la violencia no desapareció totalmente y permanecieron algunos factores de riesgo. Por una parte, en torno a 700 guerrilleros disidentes permanecerían activos aunque

sin vinculación a las nuevas estructuras políticas creadas por las antiguas FARC. Por otra parte, en setenta municipios del país se incrementó la violencia y los homicidios tras la retirada de las FARC, al haber sido ocupados por el ELN o por organizaciones armadas de

34. Amnistía Internacional, *Libya: European governments complicit in horrific abuse of refugees and migrants*, 12 de diciembre de 2017.

35. Valencia Agudelo, León, *Terminó la guerra, el postconflicto está en riesgo: a un año del acuerdo de paz*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2017.

carácter paramilitar. Con respecto al conflicto armado con el ELN, cabe destacar que a lo largo del año se redujo la violencia como consecuencia del inicio formal de las negociaciones de paz entre la guerrilla y el Gobierno, e incluso se alcanzó un alto el fuego de carácter bilateral temporal, vigente entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018, que sin embargo no fue renovado en los primeros días de 2018. Durante el año, y a pesar del diálogo, se produjeron diferentes episodios de violencia. Así, en febrero un policía murió en Bogotá como consecuencia de un atentado del ELN, en abril ocho integrantes de esta guerrilla murieron en una operación de las fuerzas de seguridad en el Catatumbo y durante todo el año se repitieron los enfrentamientos entre ELN y fuerzas de seguridad que dejaron decenas de víctimas mortales. Con el inicio del alto el fuego esta violencia se redujo notablemente y cesaron los combates, aunque al menos 26 personas murieron en diferentes incidentes de violencia durante este periodo, según señaló la organización CERAC. No obstante, cabe destacar que durante el año persistió la acción armada de diferentes grupos paramilitares como el Clan del Golfo. Además, resultó especialmente preocupante el aumento de asesinatos de líderes sociales, que según INDEPAZ, pasaron de 117 en 2016, a 170 muertes de líderes sociales y defensores de paz en 2017.

1.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en 1989 y el ascenso de los muyahidín al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de 1990. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales

de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral tras la segunda ronda en la que los dos líderes más votados, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá, mantuvieron los resultados en el aire durante meses. En septiembre, se llegó a un acuerdo para crear un Gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014, aunque en el terreno quedó desplegada la misión “Resolute Support”, con mandato de la OTAN para formar y entrenar a las fuerzas afganas y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo, integrada por soldados norteamericanos, misión “Freedom Sentinel”.

El conflicto armado en Afganistán mantuvo niveles de alta intensidad durante todo el año, con múltiples enfrentamientos armados, atentados y graves violaciones de los derechos humanos en todo el país. La UNAMA documentó 10.453 víctimas civiles, 3.438 muertes y 7.015 heridas. A lo largo de todo el año se produjeron múltiples atentados en Kabul, causando centenares de muertes, gran parte de ellas civiles. En enero, dos explosiones en las inmediaciones del Parlamento afgano causaron la muerte de al menos 30 personas, en un ataque reivindicado por la insurgencia talibán. En febrero murieron al menos 20 personas como consecuencia de un atentado suicida contra la sede del tribunal supremo en Kabul. En marzo se produjeron al menos tres atentados de gravedad en la capital. Dos tuvieron lugar el 1 de marzo, reivindicados por los talibanes, y en ellos murieron 15 personas y 50 resultaron heridas. En el primero un coche bomba explotó junto a una comisaría de policía y el segundo se produjo en las inmediaciones de una oficina de los servicios de inteligencia afganos, el National Directorate for Security. Días después el hospital de Sardar Daud Khan en Kabul fue objeto de un atentado en el que murieron 50 personas. El atentado fue reivindicado por ISIS, aunque algunos análisis señalan que esta organización no tendría la capacidad suficiente para llevar a cabo un ataque de esta magnitud en Afganistán. De ser obra de ISIS se trataría del ataque de mayor complejidad llevado a cabo por esta organización. **El 31 de mayo se produjo el atentado de mayor gravedad del año y posiblemente desde la invasión militar estadounidense en 2001. 150 personas murieron, presumiblemente civiles en su mayoría, y cerca de 500 resultaron heridas como consecuencia del ataque que tuvo lugar en las inmediaciones de la Embajada de Alemania, y en la calle que lleva a la Embajada de EEUU y a los cuarteles generales de EEUU y la OTAN, por lo que se desconoce si la intención era atacar la Embajada de Alemania o estos otros objetivos.** El atentado no fue reivindicado y la insurgencia talibán negó su implicación, aunque los servicios de inteligencia acusaron a la Red Haqqani de estar detrás. En diciembre se produjo otro atentado de enorme gravedad en Kabul cuando un ataque suicida contra el centro cultural chií Tebyan, que también es sede de una agencia de noticias iraní, causó la muerte de 50 personas e hirió a más de 80. ISIS reivindicó el atentado, del que la insurgencia talibán se desmarcó. Por otra parte, se intensificaron los enfrentamientos armados en diferentes zonas del

país. Uno de los episodios más graves tuvo lugar en abril, cuando un ataque perpetrado por 10 insurgentes talibanes contra la base militar afgana de Camp Shaheen, en la provincia de Balkh, causó la muerte de 160 soldados. Por otra parte, la insurgencia talibán también dio muestras de capacidad militar mediante su creciente control de zonas del país. Por ejemplo, en el mes de julio, los talibanes lograron hacerse con el distrito de Janikhel, provincia de Paktia, después de varios días de intensos enfrentamientos. La insurgencia talibán también logró el control del distrito de Kohistan, en la provincia de Faryab, aunque dos días después fue recuperado por las fuerzas de seguridad afganas, en una operación en la que según fuentes oficiales murieron 20 insurgentes talibanes. El tercero de los distritos capturados por la insurgencia en julio fue el de Taywara, en la provincia de Ghor.

En agosto el Gobierno de EEUU reconoció que el despliegue militar en el terreno era de 11.000 soldados estadounidenses, una cifra superior a la que se había reconocido de forma pública anteriormente, que era de 8.400.³⁶ El secretario de Defensa de EEUU, James Mattis, anunció un despliegue adicional de 3.000 efectivos militares, lo que llevaría a un despliegue total de 14.000 soldados estadounidenses en el país, a los que habría que añadir el personal civil y los contratistas que trabajan junto a las Fuerzas Armadas. Este nuevo despliegue se produjo en el marco de la **nueva estrategia para el país anunciada por el presidente Donald Trump, en la que se comprometió a no salir de Afganistán y en la que desveló que la operación militar no se centrará en cuestiones vinculadas a la promoción de la democracia y el apoyo a la construcción de Estado sino en el combate militar al terrorismo**. Trump señaló que una retirada de tropas implicaría un vacío que sería ocupado por al-Qaeda e ISIS. También anunció un endurecimiento en la relación con Pakistán, a quien acusó de dar cobijo a organizaciones terroristas en su territorio, lo que generó un amplio rechazo en este país.

Cabe destacar el informe del Secretario General de evaluación de la UNAMA,³⁷ presentado en agosto ante la Asamblea General en el que Naciones Unidas reconoce el deterioro en la situación de seguridad del país de los últimos años, en los que se ha consolidado un aumento de la capacidad talibán para controlar el territorio, al tiempo que amplios sectores insurgentes no contemplan la posibilidad de una solución negociada al conflicto armado dado su creciente poder militar. Además, el informe advierte sobre el poder cada vez mayor de ISIS en el país, que aunque sigue siendo un actor integrado por un número pequeño de insurgentes, complejiza el contexto y añade inseguridad, puesto que este grupo ha sido responsable de varios atentados de gravedad durante el año. Por otra parte,

La capital afgana fue escenario de múltiples atentados durante todo el año que causaron centenares de muertes, gran parte civiles

la UNAMA también denunció un incremento de los ataques contra centros religiosos, especialmente lugares de culto chií, provocando decenas de víctimas civiles.³⁸

India (Jammu y Cachemira)	
Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, JKLF, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, All Parties Hurriyat Conference, United Jihad Council
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira escaló de intensidad a lo largo del año con un aumento de la mortalidad, siguiendo la tendencia de escalada de 2016. A lo largo de 2017 se produjeron 358 muertes vinculadas al conflicto armado –57 civiles, 83 integrantes de las fuerzas de seguridad y 218 insurgentes–, según las cifras recogidas por el South Asia Terrorism Portal, el balance más elevado desde el año 2010. No obstante, otras fuentes elevaron esta cifra y, por ejemplo, la coalición Jammu Kashmir Coalition of Civil Society, que agrupa a varias organizaciones de derechos humanos señaló que durante 2017 habían muerto 451 personas –108 civiles, 125 integrantes de las fuerzas de seguridad y 218 insurgentes–. **Además, las organizaciones denunciaron la persistencia de graves violaciones de derechos humanos, como la negativa del gobierno a investigar las desapariciones forzadas que se han producido a lo largo de las últimas décadas, torturas o detenciones arbitrarias**, entre otras. También se produjeron ataques específicos contra mujeres, como el fenómeno

36. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, *Quarterly Report to the United States Congress*, octubre 2017.

37. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe especial sobre el examen estratégico de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán. Informe del Secretario general A/72/312-S/2017/696*, 10 de agosto de 2017.

38. UNAMA, *Protection of Civilians in Armed Conflict: Attacks against Places of Worship, Religious Leaders and Worshipers*, UNAMA, 7 de noviembre de 2017.

conocido como “Braid chopping”, del que fueron víctimas cientos de mujeres.³⁹ Las fuerzas de seguridad anunciaron a mediados de año el inicio de la operación militar “Operation All Out”, con la que pretendían matar a los dirigentes más visibles de la insurgencia cachemir. A finales de año, el responsable de la operación e inspector general de la Policía de Jammu y Cachemira señalaba a los medios de comunicación que se había matado a 18 mandos de alto nivel de diferentes organizaciones insurgentes, incluyendo líderes de LeT, Hizbul Mujahideen y Jaish-e-Mohammad.

Entre los hechos más graves del año estuvo el atentado contra una comisaría en Pulwana en septiembre, en el que murieron ocho policías y reivindicado por Jaish-e-Mohammad, el de mayor gravedad desde septiembre de 2016, cuando 18 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en un ataque a un campamento militar. Posteriormente se inició una fuerte operación de seguridad que fue contestada con protestas sociales en varias poblaciones. En julio, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Burhan Wani miembro del grupo armado Hizbul Mujahideen, cuya muerte en 2016 desencadenó graves disturbios y enfrentamientos, se impusieron serias restricciones, similares a las de un toque de queda para dificultar las protestas en las calles. No obstante, se registraron diferentes episodios de violencia incluyendo un intercambio de fuego en la frontera entre India y Pakistán en el que murieron siete personas, en medio de un cruce de acusaciones entre los dos países.

Se produjo una escalada en la violencia en Jammu y Cachemira con el inicio de la operación militar “Operation All Out” y con denuncias de graves violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad

Se registró un ligero descenso de la violencia en el conflicto armado que enfrenta al grupo armado de oposición naxalita CPI-M con las fuerzas de seguridad indias en varios estados del país. Según las cifras de mortalidad relacionadas con el conflicto armado recogidas por el South Asia Terrorism Portal, durante el año 2017 se registraron 332 muertes –109 civiles, 74 integrantes de las fuerzas de seguridad indias y 149 insurgentes–. En ocho estados indios se registraron enfrentamientos con víctimas mortales, siendo el más afectado Chhattisgarh con 169 víctimas, seguido de Jharkhand (56), Odisha (36), Maharashtra (25), Bihar (24), Telangana (13), Andhra Pradesh (9) y Madhya Pradesh (1) No obstante, a pesar de esta reducción global de la violencia, durante 2017 se produjeron algunos de los episodios de mayor gravedad de los últimos años. En el estado de Chhattisgarh, en el distrito de Sukma se produjeron dos graves episodios de violencia. En el mes de marzo, un ataque de la insurgencia causó la muerte de 12 miembros de la Fuerza de Reserva Central de Policía, encargada de llevar a cabo tareas de contrainsurgencia. **En abril se produjo el ataque más grave del año cuando 25 miembros de las fuerzas de seguridad murieron tras ser emboscados**

en la zona de Sukma, en el estado de Chhattisgarh. 300 insurgentes habrían participado en la emboscada, en la que atacaron a un grupo de 100 policías que patrullaban una zona en la que se estaban llevando a cabo obras de infraestructura. Según la propia Policía, en el ataque, uno de los más mortíferos de los últimos años, habrían muerto 12 insurgentes, pero sus cuerpos no fueron hallados posteriormente. Entre los insurgentes atacantes también habría mujeres. La zona de Sukma está fuertemente afectada por la presencia insurgente y las operaciones militares de las fuerzas de seguridad. A este ataque le siguió una operación de seguridad a gran escala en la que murieron al menos 12 insurgentes. La operación, conocida como Prahara, es una de las mayores de los últimos meses y tuvo lugar en una de las zonas considerada feudo de la insurgencia naxalita. Más de 1.500 policías se desplegaron en el marco de esta operación. Por otra parte, persistieron las denuncias por parte de organizaciones de la sociedad civil relativas a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad y las empresas extractivas que operan en los estados afectados por el conflicto.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU

39. Cientos de mujeres fueron atacadas por hombres no identificados que les cortaron el cabello y las agredieron físicamente, generando un clima de terror entre las mujeres del estado. Algunos sectores acusaron a las fuerzas de seguridad indias de instigar estas agresiones.

Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación Zarb-e Azb para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur.

Pakistán fue escenario de elevados niveles de violencia, aunque continuó la tendencia iniciada en 2015 y se produjo una reducción tanto de los incidentes violentos como de la mortalidad asociada a esta violencia. De acuerdo con las cifras registradas por el Center for Research and Security Studies de Pakistán, durante 2017 murieron 2.048 personas como consecuencia del conjunto de conflictos armados y situaciones de tensión que transcurren en el país. En las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Punjab y en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA), que son el epicentro de la actividad de la insurgencia talibán, se produjeron 1.090 muertes. **ISIS expandió su actividad armada, y fue responsable de algunos de los más graves atentados registrados durante el año.** Entre sus acciones cabe destacar el atentado que se produjo en febrero contra el santuario sufí de Sehwan en la provincia de Sindh que causó la muerte de al menos 88 personas, 20 de ellas menores y centenares de personas resultaron heridas. Este fue el atentado suicida más mortífero desde el ataque de diciembre de 2014 contra un colegio en Peshawar en el que murieron más de 150 personas. Las fuerzas de seguridad señalaron que al menos 39 personas resultaron muertas en las operaciones de seguridad iniciadas posteriormente al atentado y que llevaron al cierre de dos puntos fronterizos con Afganistán. ISIS también reivindicó el atentado que se produjo contra una iglesia en Quetta en diciembre, en el que murieron nueve personas y más de 40 resultaron heridas. Dos atacantes suicidas atacaron la iglesia cuando centenares de personas asistían a una ceremonia religiosa con motivo de la navidad.

La insurgencia talibán fue responsable también de varios atentados, algunos de ellos perpetrados por la facción talibán Jamaat-ul-Ahrar. **La ciudad de Parachinar, capital de Kurram Agency y predominantemente chií, resultó especialmente afectada por la violencia, con múltiples atentados** como el que tuvo lugar en marzo en las inmediaciones de una mezquita chií, y que causó la muerte a 23 personas e hirió a otras 73. El grupo armado sunní Lashkar-e-Jhanvi, en colaboración con la facción talibán liderada por Shahryar Mahsud, perpetró otro atentado en un mercado de Parachinar en enero que causó la muerte de 22 personas. Además, alrededor de 90 personas resultaron heridas por la explosión, que tuvo lugar en una zona mayoritariamente chií. En junio tuvo lugar uno de los atentados más graves del año también en Parachinar, reivindicado por la facción al-Alami de Lashkar-i-Jhangvi, en el que murieron 72 personas y más de 200 resultaron heridas.

Pakistán (Baluchistán)	
Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT; sociedad civil, LJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, si no miles, de baluchíes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

La provincia de Baluchistán siguió afectada por el conflicto armado que transcurre en su territorio todo el año, aunque se redujo la intensidad de la violencia con respecto a años anteriores y disminuyó el número de víctimas mortales. Según los datos recopilados por el Center for Research and Security Studies de Pakistán, durante 2017 murieron 489 personas como consecuencia del conflicto armado en Baluchistán, frente a las 805 muertes de 2016. La reducción de la mortalidad benefició sobre todo a insurgentes y miembros de las fuerzas de seguridad, pero no se redujo

tanto el número de víctimas civiles. El grupo armado de oposición más activo fue el BLA. Además, Baluchistán fue uno de los escenarios en los que transcurrió también el conflicto armado que enfrenta a la insurgencia talibán con las fuerzas de seguridad, y en paralelo, ISIS continuó expandiendo sus actividades. También se repitieron los ataques de carácter sectario contra la población hazara, que ha sido objetivo de múltiples actos de violencia.

Uno de los hechos más graves del año tuvo lugar en el mes de agosto, cuando un atentado suicida perpetrado por un motociclista causó la muerte a 15 personas y ocasionó heridas a otras 25 en la ciudad de Quetta, capital de la provincia. El objetivo del atentado era un camión militar. Ocho de las víctimas eran soldados y otras siete civiles. La explosión se produjo en la víspera de la celebración de la independencia de Pakistán y fue reivindicado por ISIS. Pocos días después, ocho miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes murieron como consecuencia de un atentado reivindicado por el grupo armado de oposición baluchi BLA. Los fallecidos, que eran miembros del Cuerpo Fronterizo, murieron consecuencia del estallido de un artefacto explosivo improvisado al paso de su vehículo que patrullaba en el distrito de Harnai. En octubre, el BLA reivindicó otro ataque en el que murieron cuatro miembros de las fuerzas de seguridad que tuvo lugar en la zona Panjgur. En esta misma zona se produjeron ataques contra infraestructuras vinculadas al proyecto multimillonario del Corredor Económico China Pakistán, que ha sido atacado por la insurgencia baluchi en repetidas ocasiones.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:

El NPA, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inicia la lucha armada en 1969 y alcanza su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas y al National Democratic Front (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

La violencia se incrementó significativamente respecto del año anterior a raíz de las sucesivas crisis que sufrieron las negociaciones de paz entre el Gobierno y el NDF, así como de la declaración de la ley marcial impuesta a finales de mayo (y posteriormente prorrogada) por el presidente, Rodrigo Duterte. A principios de diciembre, el Gobierno declaró que, tras la interrupción de las conversaciones de paz en el mes de febrero, 264 combatientes del NPA habían fallecido o sido arrestados, otros 573 se habían entregado voluntariamente y se habían incautado 622 armas. En la misma línea, a principios de noviembre las Fuerzas Armadas señalaron que entre el 1 de enero y el 6 de noviembre el NPA había cometido 353 crímenes solamente en Mindanao oriental y habría provocado daños por valor de 2,18 billones de pesos, un incremento sustancial respecto del año anterior, en el que la cifra rondó los 100 millones de pesos. Durante el mismo periodo, las acciones del NPA habrían provocado la muerte de 70 civiles y 64 militares, policías o CAFGU (Citizen Armed Force Geographical Unit). Además, 127 policías o militares habrían resultado heridos, mientras que 28 civiles habrían desaparecido. Estos datos contrastan claramente con los bajos niveles de violencia que se registraron en la segunda mitad de 2016, tras la reanudación de las negociaciones entre el nuevo Ejecutivo de Duterte y el NDF tras varios años de inactividad bajo la administración anterior de Benigno Aquino. En cuanto a las dinámicas del conflicto, la violencia se incrementó precisamente en aquellos momentos del año en los que las negociaciones atravesaron crisis. En el mes de febrero, por ejemplo, el número de incidentes armados se incrementó drásticamente respecto de los meses anteriores después de que, a principios de mes, el NPA y el Gobierno dieran por finalizado sus respectivos alto el fuego unilaterales –el NPA lo hizo matando a seis soldados y secuestrando a otros dos– y el presidente Duterte anunciara la retirada del Gobierno de las negociaciones y el inicio de una guerra total contra el NPA. A finales de febrero, por ejemplo, Manila declaró que 14 combatientes del NPA y siete soldados habrían muerto en varios enfrentamientos. Tras la finalización del acuerdo de alto el fuego, Duterte calificó de terroristas al NPA y ordenó el arresto de varios miembros del NDF que habían participado en las negociaciones, especialmente de aquellos que habían sido liberados temporalmente para ello. Por su parte, el ministro de Defensa comparó al NPA con Abu Sayyaf por recurrir a la extorsión, el secuestro y los atentados con explosivos. Además, el Gobierno acusó al NPA de haber utilizado el acuerdo de alto el fuego en vigor durante la segunda mitad del 2016 y principios del 2017 para incrementar el reclutamiento de nuevos efectivos hasta alcanzar nuevamente la cifra de unos 5.000 combatientes. Sin embargo, en un congreso celebrado a finales de marzo con motivo del 48º aniversario de la fundación del NPA, el grupo declaró contar con 70.000 miembros en todo el territorio nacional. En este mismo congreso, el Partido Comunista de Filipinas anunció haber renovado y rejuvenecido notablemente su comité

central. Por su parte, el NPA justificó su decisión de poner fin al alto el fuego a principios de febrero alegando la negativa del Gobierno a liberar a lo que considera prisioneros políticos y a ordenar el repliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en bastiones tradicionales del grupo.

La tensión entre las partes y los niveles de violencia en el campo de batalla volvieron a incrementarse sustancialmente a finales de mayo, después de que, a raíz de los episodios de violencia en la ciudad de Marawi (Lanao del Sur), Duterte impusiera la ley marcial en Mindanao, región en la que últimamente se concentra la mayor parte de la actividad armada del NPA. Ello comportó que se cancelara la quinta ronda de negociaciones prevista para finales de mayo y principios de junio en Holanda después de que durante varias conversaciones informales en los meses de marzo y abril se hubiera retomado el diálogo y se hubiera acordado la reanudación de sendos alto el fuego unilaterales de manera temporal. A pesar de que el NPA ofreció infructuosamente su apoyo en la lucha contra los grupos armados que tomaron zonas de la ciudad de Marawi, la relación entre ambas partes siguió muy deteriorada durante la segunda mitad del año. El Partido Comunista de Filipinas ordenó al NPA un incremento de sus acciones militares y de sus campañas de reclutamiento. Por su parte, Duterte declaró en varias ocasiones que utilizaría los poderes extraordinarios al amparo de la ley marcial para combatir al NPA y utilizó la existencia de este grupo (junto a la de otros como Abu Sayyaf, el BIFF o el grupo Maute) para pedir al Parlamento la prolongación de la ley marcial. Además, anunció que, una vez finalizada la ofensiva militar en Marawi –que concentró la mayor parte de los esfuerzos militares del Gobierno en 2017– iniciaría una guerra total contra el NPA. A finales de noviembre, pocos días antes del inicio de la quinta ronda de negociaciones que debería haberse celebrado en Oslo, Duterte firmó una proclamación presidencial por la que oficialmente ponía fin a las negociaciones de paz con el NDF. Pocos días más tarde firmó otra proclamación presidencial por la que consideraba como organizaciones terroristas al NPA y al Partido Comunista de Filipinas. Cabe recordar que algunos meses antes el propio Duterte había pedido, infructuosamente, al Gobierno de EEUU que retirara a ambas organizaciones de su listado de grupos terroristas. Tras estas decisiones, los niveles de violencia volvieron a incrementarse en los meses de noviembre y diciembre. El NPA anunció una intensificación de sus operaciones en el norte de Mindanao y declaró que, solamente en la primera quincena del mes de noviembre habría llevado a cabo 27 acciones militares en las que 13 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habrían fallecido y otros 12 habrían resultado heridos. Por su parte, el Gobierno anunció una intensificación de sus operaciones contra el NPA y declaró que en el mes de noviembre 119 combatientes del NPA habían sido neutralizados (69 se entregaron, 29 fueron arrestados y 21 murieron en combate) y que había sido tomado uno de los principales campamentos del grupo. El Ejecutivo

destacó la muerte de 14 combatientes del NPA en la región de Batangas a finales de noviembre y de otros 15 cerca de Manila en el mes de diciembre.

Filipinas (Mindanao)	
Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato. Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por vez primera un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

El conflicto armado en Mindanao vivió la escalada de violencia más grave de los últimos años, especialmente por los intensos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el denominado grupo Maute y otras organizaciones armadas en la Ciudad de Marawi (provincia de Lanao del Sur) durante cinco meses, que provocaron la muerte de más de 1.100 personas y el desplazamiento forzoso de más de 600.000 personas. Además de este episodio de violencia en Lanao del Sur, en otras partes de Mindanao siguieron registrándose enfrentamientos entre el Ejército y varios grupos, como Bangasmoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) –especialmente en la provincia de Maguindanao y Cotobato Norte–, Abu Sayyaf –especialmente en el archipiélago de Sulu– o Ansar Al Khilafah –sobre todo en la provincia de Sarangani–, así como enfrentamientos

entre algunos de estos grupos y efectivos del MILF – grupo en pleno proceso de paz con el Gobierno–, o casos esporádicos de enfrentamientos clánicos o familiares (conocidos localmente como rido) entre miembros de algunas de estas organizaciones armadas. A raíz de la situación de violencia en el sur del país, poco después del inicio de los enfrentamientos en la ciudad de Marawi en mayo, el presidente, Rodrigo Duterte, impuso la ley marcial en Mindanao, medida que fue prorrogada por el legislativo en varias ocasiones y que fue criticada por determinadas fuerzas políticas y por organizaciones de derechos humanos. En cuanto al sitio de la ciudad de Marawi, los enfrentamientos se iniciaron a finales de mayo tras un operativo militar y policial fallido para detener a Isnlon Hapilon, líder histórico de Abu Sayyaf que según muchos medios se había erigido en los últimos tiempos en el máximo exponente de Estado Islámico (ISIS) en la región. Como respuesta a dicho operativo, alrededor de 100 combatientes (principalmente del grupo Maute y de Abu Sayyaf) tomaron algunas partes de la ciudad, destruyeron edificios, tomaron decenas de rehenes y liberaron prisioneros, en un modus operandi parecido al que se utilizó en la toma de la localidad de Butig en 2016 por parte del grupo Maute. Durante los primeros días de enfrentamientos, que incluyeron numerosos bombardeos aéreos por parte de las Fuerzas Armadas, unas 130 personas murieron y más de 170.000 se vieron obligadas a huir. En los siguientes meses, trascendió que hasta 40 combatientes foráneos (de países como Indonesia, Malasia, Singapur, Arabia Saudita o Yemen) estaban tomando parte en los enfrentamientos y que algunos de ellos jugaron un papel decisivo en la presunta canalización de medios desde ISIS, que reivindicó las acciones armadas en Marawi y facilitó el reclutamiento de combatientes a través de varios llamamientos a luchar en Mindanao. En este sentido, cabe destacar que el Gobierno y el propio presidente reconocieron los sólidos vínculos entre ISIS y el grupo Maute y otras organizaciones armadas presentes en Marawi, pero también declaró que parte de sus fondos procedían del narcotráfico. Al terminar la ofensiva militar en Marawi a finales de octubre, habían muerto una cincuentena de civiles, más de 160 militares y alrededor de un millar de combatientes, incluyendo a Isnlon Hapilon, a Omar y Abdullah Maute –líderes y fundadores del grupo–, así como varios de sus otros hermanos y Mahmud Ahmad, combatiente de origen malasio que según la inteligencia filipina había jugado un papel importante en las relaciones entre ISIS y varios de los grupos que operan en Mindanao. Respecto de la muerte de Isnlon Hapilon, la Policía especuló con la posibilidad de que el malasio Mohammad Mon Baco hubiera sido designado su sucesor, pero las Fuerzas Armadas declararon que éste había muerto en combate. Poco después, el Gobierno señaló que Esmael Abdulamlik, alias Abu Toraiife, líder destacado del BIFF, podría haber asumido las funciones que hasta entonces ejercía Hapilon. En noviembre Amnistía Internacional acusó a ambas partes de haber perpetrado numerosas violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra durante los enfrentamientos en Marawi.

Cabe destacar que antes del inicio de los enfrentamientos en el mes de mayo ya se habían detectado algunos indicios sobre el incremento de la presencia de grupos armados en Lanao del Sur. En enero algunos informes de inteligencia señalaron que Isnlon Hapilon se había trasladado desde su bastión tradicional de Sulu a la provincia de Lanao del Sur para coordinar y fortalecer la presencia de ISIS en la zona. En este mismo mes se produjeron varios enfrentamientos en Lanao en los que 15 personas murieron y el propio Isnlon Hapilon resultó herido. En fechas parecidas, en una operación en la provincia de Sarangani contra el grupo Ansar Al-Khilafah –grupo que juró lealtad a ISIS y que según varias fuentes tendría sólidas alianzas con el grupo Maute– murió su líder y fundador, Mohammad Jafaar Maguid, alias Tokboy. Según el Gobierno, su muerte era relevante por cuanto seguramente supondría el desmembramiento de Ansar Al-Khilafah –también conocido como Ansar al-Khalifa, Ansarul Khilafa o Ansar Khilafa– y por sus estrechos contactos que mantendría con combatientes de ISIS en Siria. En este sentido, el propio Gobierno había anunciado que estimaban en 50 el número de células de ISIS en Mindanao y había advertido sobre la posibilidad de que miembros de ISIS que hasta ahora estaban combatiendo en Siria e Iraq se trasladaran a Mindanao. De hecho, durante los combates en la ciudad de Marawi, algunos informes de inteligencia militar señalaron que el modus operandi de los grupos armados en Marawi era parecido al de la insurgencia en Iraq. Finalmente, cabe señalar que en abril, poco antes del inicio de los combates en Marawi el Gobierno informó sobre la muerte de 36 combatientes del grupo Maute y de Yemaah Islamiyah durante unos enfrentamientos en Lanao del Sur que habrían terminado con la toma de uno de los principales campamentos del grupo.

En cuanto al conflicto armado en otras regiones de Mindanao, cabe destacar especialmente el incremento de la actividad del BIFF en las regiones occidentales de Mindanao. **Según datos oficiales recogidos por la prensa, como mínimo un centenar de personas habrían muerto en episodios de violencia en los que participó el BIFF.** Algunos de estos episodios más destacados fueron la muerte de 21 combatientes a mediados de marzo en Maguindanao; la muerte de otros 31 miembros del BIFF en la misma provincia (en la localidad de Datu Salibo) a principios de mayo; el atentado contra un helicóptero que transportaba al gobernador de Maguindanao a finales de julio; los enfrentamientos entre el BIFF y el MILF en Maguindanao a finales de agosto, que finalizaron con la muerte de 25 combatientes (cinco de ellos del MILF); o la ofensiva de las Fuerzas Armadas contra dos facciones distintas del BIFF a finales de diciembre en las provincias de Maguindanao y Cotabato Norte, provocando la muerte de más de 20 combatientes.

En cuanto a Abu Sayyaf, prosiguió su actividad armada principalmente en su bastión tradicional del archipiélago de Sulu y, como en los últimos años, siguió incurriendo en prácticas como el secuestro. Algunos de los momentos en los que el grupo captó

mayor atención política y mediática coincidieron con el ataque del grupo contra un barco vietnamita y la decapitación de un rehén en febrero; la incursión de Abu Sayyaf en la isla turística de Bohol en abril, con la presunta intención de llevar a cabo secuestros y atentar contra una reunión de ASEAN, y que provocó varios enfrentamientos en los que murieron una decena de personas; el operativo de las Fuerzas Armadas para rescatar a rehenes vietnamitas a principios de abril, y en el que unos 10 miembros de Abu Sayyaf murieron y más de 30 soldados resultaron heridos; o la muerte de unos 20 combatientes del grupo en Basilan a principios de mayo, poco antes del inicio de los enfrentamientos en Marawi. En la segunda mitad del año siguieron produciéndose enfrentamientos regulares en los que un número indeterminado de personas perdieron la vida, pero éstos se vieron eclipsados por los episodios de violencia en Marawi. Finalmente, cabe señalar que algunos medios se hicieron eco de una presunta división interna en el grupo a raíz de la decisión de Isnilon Hapilon de jurar lealtad a ISIS, erosionando así sus vínculos históricos con al-Qaeda, así como de erigirse en el máximo responsable de ISIS en Mindanao y desplazar el núcleo principal de sus actividades a Lanao del Sur.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, grupos armados (KNU/KNLA, SSA-S, SSA-N KNPP, UWSA, CNF, ALP, DKBA, KNPLAC, SSNPLO, KIO, ABSDF, AA, TNLA, HaY, MNDAA)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados.

La situación en Myanmar se deterioró gravemente con una escalada en la violencia sin precedentes en los últimos años. El principal foco de conflicto se situó en el estado de Rakhine, donde la violencia se incrementó a lo largo de todo el año, pero especialmente a partir del mes de agosto, cuando tras varios ataques del grupo armado de oposición rohingya ARSA (anteriormente conocido como HaY),⁴⁰ se inició una operación militar a gran escala que generó una gravísima crisis humanitaria y de derechos humanos.

El año se iniciaba con el desplazamiento forzado de más de 20.000 personas rohingya hacia Bangladesh como consecuencia de las operaciones militares iniciadas en 2016.⁴¹ La propia relatora especial de la ONU para Myanmar, Yanghee Lee, denunciaba en el mes de febrero los graves abusos y violaciones a los derechos humanos padecidos en Myanmar por los grupos de personas refugiadas rohingyas desplazadas a Bangladesh desde octubre de 2016, incluyendo ejecuciones sumarias, violencia sexual, incendio de viviendas con personas en el interior, entre otros graves hechos. En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó enviar una misión internacional de investigación a Myanmar, centrada en las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en Rakhine. En junio y julio la situación se tensó en el estado con enfrentamientos comunitarios entre grupos de población budista y rohingya. Sin embargo, los episodios de violencia más graves se vivieron a partir del mes de agosto cuando ARSA atacó en una misma mañana al menos 30 puestos policiales y en respuesta a los ataques llevados a cabo por centenares de insurgentes se desencadenó una operación militar a gran escala. La organización Médicos sin Fronteras denunció que **al menos 6.700 rohingyas murieron como consecuencia de la violencia, incluyendo numerosos menores –más de 700 menores de cinco años–, en el primer mes después del inicio de la operación militar, y más de 660.000 personas se desplazaron entre agosto y diciembre refugiándose en Bangladesh.** Al finalizar el año el CICR advertía sobre las condiciones de vida de la población rohingya que ha quedado en el estado Rakhine, en el que únicamente permanecían 180.000 rohingyas en medio de graves tensiones comunitarias. A mediados de septiembre ARSA decretó un alto el fuego unilateral de un mes, pero la operación militar siguió activa hasta finales de octubre, cuando después de que EEUU y la UE anunciaran posibles sanciones contra el país, las Fuerzas Armadas iniciaron una retirada parcial de efectivos militares desplegados en Rakhine. La crisis humanitaria se agravó por el bloqueo gubernamental a la ayuda de la ONU y de ONG, impidiendo el acceso humanitario a la población, aunque a finales de octubre las autoridades birmanas habrían accedido a reanudar el reparto de ayuda alimentaria por parte de la ONU.

40. Denominación utilizada en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2017! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Icaria, 2017.

41. Véase el resumen sobre Myanmar en el capítulo 1 (Conflictos armados) de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2017! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Icaria, 2017.

Amnistía Internacional acusó a las fuerzas de seguridad de crímenes contra la humanidad denunciando que centenares de miles de personas rohingya se convirtieron en víctimas de una persecución sistemática, forzando su desplazamiento en condiciones de extrema precariedad en Bangladesh. Amnistía señaló que algunos de los sucesos más graves tuvieron lugar en la población de Tula Toli, escenario de una masacre documentada por medios de comunicación como The Guardian. La ONG denunció que las Fuerzas Armadas actuaron contra el conjunto de la población civil con una actitud de venganza por las acciones del grupo armado. Naciones Unidas también denunció que medio millón de personas se habían desplazado después de que las fuerzas de seguridad quemaran casas, campos de cultivo y aldeas enteras. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres exhortó a las autoridades birmanas a detener las operaciones militares y **el Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló que no podía descartarse que en el futuro un tribunal calificara de genocidio los actos cometidos contra la población rohingya, y que se trataba de ataques perfectamente diseñados y planificados**, al tiempo que exigía una mayor contundencia de la líder birmana Aung San Suu Kyi para detener la acción militar. En noviembre, el Consejo de Seguridad emitió una declaración presidencial, al no lograr el consenso de Rusia y China para la aprobación de una resolución, en la que se condenaban los ataques del ARSA contra las fuerzas de seguridad birmanas y la violencia sistemática y generalizada de éstas contra la población rohingya en las posteriores operaciones militares. El texto instaba al Gobierno a no hacer un uso excesivo de la fuerza y a investigar todas las violaciones de derechos humanos incluyendo la violencia sexual. No obstante, el papel de la ONU en la gestión de la crisis también fue cuestionado, lo que llevó a que se nombrara a un nuevo coordinador residente para el país en sustitución de Renata Lok-Dessallien, acusada de haber retirado un informe encargado por la organización internacional a un consultor independiente en el que se alertaba de los riesgos de deterioro del conflicto y advertía a la ONU de que debía endurecer sus denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos en el estado Rakhine. El informe advertía que las fuerzas de seguridad de Myanmar actuarían previsiblemente de forma indiscriminada y con extrema dureza, tal y como sucedió meses después. El Gobierno birmano rechazó en la ONU las acusaciones de genocidio y limpieza étnica. Internacionalmente, se intensificaron las críticas contra la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, por su inacción ante las violaciones de los derechos humanos de la población rohingya, que no visitó la zona norte del estado de Rakhine, la más afectada por el conflicto, hasta noviembre.

En lo que respecta a los enfrentamientos armados con otras organizaciones insurgentes, estos se produjeron

La operación militar contra la población rohingya en Myanmar originó una escalada de la violencia sin precedentes y una gravísima crisis de derechos humanos con acusaciones de crímenes contra la humanidad y genocidio

en diferentes momentos del año. En febrero, las Fuerzas Armadas señalaron que más de 100 soldados habían muerto en los enfrentamientos que se produjeron en los meses de noviembre y diciembre de 2016 en el estado Shan con los grupos armados agrupados bajo el paraguas de la Northern Alliance (MNDAA, AA, TNLA y KIA). En marzo se reanudaron estos enfrentamientos, forzando a miles de personas a huir de sus hogares, desplazándose a campos en la frontera con China y a la ciudad de Mandalay. Los enfrentamientos se concentraron en la ciudad de Laukkai, capital administrativa de la región Kokang en el estado Shan y muy próxima a la frontera con China. Los grupos armados señalaron que los enfrentamientos se habían reanudado en el mes de marzo ante la negativa del Gobierno a que estas insurgencias participaran en el proceso de paz y como respuesta a las ofensivas militares en los territorios controlados por el MNDAA y el TNLA. También se produjeron enfrentamientos en el estado Kachin entre las Fuerzas Armadas y el KIA en varios momentos del año.

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Patani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

Los niveles de violencia en el sur de Tailandia no solamente se redujeron sustancialmente respecto del año 2016, sino que alcanzaron sus mínimos históricos desde el 2004, año en que se considera que se reanudó el conflicto armado. Desde entonces, unas 7.000

personas han muerto (entre ellas 87 menores) y otras 13.000 han resultado heridas (incluyendo a 553 menores). Según el centro de investigación Deep South Watch, en 2017 murieron 235 personas y otras 356 resultaron heridas en 545 episodios de violencia, cifras éstas muy inferiores a las del año 2007 –en el que 892 personas murieron y otras 1.681 resultaron heridas–, e incluso a las del año 2016, en el que 309 personas murieron. La media anual de víctimas mortales desde el año 2004 es de 455. Cabe destacar también que los niveles de violencia durante la primera mitad del año fueron sensiblemente inferiores a los de la segunda, puesto que hasta finales de junio habían muerto 50 personas y 138 habían resultado heridas. Ello arroja una media mensual de 8,3 víctimas mortales y 23 personas heridas, una reducción muy significativa respecto de la media mensual del año 2016: 12,8 y 35,2. Según Deep South Watch, la reducción de los niveles de violencia observados en 2017 está en sintonía con la disminución general de los umbrales de violencia que se observa en el sur del país desde que la entonces primera ministra Yingluck Shinawatra iniciara conversaciones de paz en 2013, que posteriormente fueron reanudadas en 2015 por la junta militar que depuso a Shinawatra. Algunos autores sostienen que las principales causas que explican la reducción sostenida de la violencia en los últimos años son el incremento de las medidas de seguridad por parte del Estado y la mayor presencia de informantes sobre el terreno; el hecho de que haya un proceso de negociación activo en el que el principal tema de la agenda sustantiva sea el establecimiento de las denominadas zonas de seguridad o acuerdos de alto el fuego limitados; la exigencia del Gobierno a Mara Patani de que demuestre su control sobre los niveles de violencia o su ascendencia sobre los grupos armados que la perpetran; la voluntad por parte de los grupos armados insurgentes de ser más selectivos en la elección de sus objetivos; o el cambio en la estrategia militar del principal grupo armado de la región, el BRN, tras la muerte en el exilio en enero de uno de sus líderes históricos –Sapaesing Basor, a cuyo funeral asistieron miles de personas–, que se produjo pocos meses más tarde que la muerte de otro líder histórico –Masae Using–, lo que comportó que el antiguo comandante militar del grupo, Abdullah Wan Mat Noor (o Doonloh Wae-mano) asumiera la máxima responsabilidad dentro del BRN.

A pesar de la clara reducción en los niveles de violencia, la Junta militar expresó en varias ocasiones su preocupación por la situación de inestabilidad en el sur del país, como así lo demuestra el incremento del presupuesto militar de 2018 respecto al de 2017 en más de un 5% o el hecho de extendiera nuevamente la vigencia del decreto de emergencia que rige en las provincia de Yala, Patani y Narathiwat desde el año 2005 (se ha prorrogado en 45 ocasiones), propiciando las críticas de numerosas organizaciones de derechos humanos. Así, durante el año se produjeron varios incidentes armados que denotaron la capacidad militar de los grupos insurgentes en el sur del país. Cabe destacar especialmente la serie de ataques acaecidos en febrero, poco después de que

el Gobierno y Mara Patani acordaran su intención de establecer cinco zonas de seguridad; los más de 20 ataques coordinados con ataques explosivos los días 6 y 7 de abril o los 13 ataques simultáneos pocos días más tarde (el 19 de abril) en las provincias sureñas de mayoría musulmana; así como el atentado contra un centro comercial en Pattani en mayo en el que 80 personas (casi todas civiles) resultaron heridas. Por último, cabe destacar que, a raíz del descubrimiento de una fábrica de armamento del BRN por parte de la Policía de Malasia en enero y de la aparente consolidación de Estado Islámico en el Sudeste Asiático (especialmente en Mindanao) algunos medios de comunicación advirtieron sobre una mayor asertividad hacia el conflicto en el sur de Tailandia por parte del Gobierno de Malasia, que históricamente había sido acusado de connivencia hacia los grupos armados tailandeses.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Ucrania (este)	
Inicio:	2014
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia
Intensidad:	2
Evolución:	=
Síntesis:	
Ucrania, considerado un país en transición desde su independencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y territorio de gran importancia geoestratégica, afronta un conflicto armado en zonas del este del país y es escenario de la crisis más grave entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. Precedido por un cúmulo de focos de tensión en el conjunto del país entre finales de 2013 y 2014 (protestas masivas pro-europeas y antigubernamentales; caída del presidente Víctor Yanukóvich y su régimen; anexión de Crimea por Rusia; protestas anti-Maidán y emergencia de actores armados en el este), la situación en el este de Ucrania derivó en conflicto armado en el segundo trimestre de 2014, enfrentando a milicias separatistas pro-rusas en las regiones de Donetsk y Lugansk, apoyadas por Rusia, y a las Fuerzas Armadas estatales bajo las nuevas autoridades pro-europeas. Las áreas de Donetsk y Lugansk bajo control de las fuerzas rebeldes se declararon repúblicas independientes. A cuestiones como el estatus de esas provincias se añade de fondo la dimensión geoestratégica internacional (rivalidad política, económica y militar entre Occidente y Rusia en el este de Europa; demostración de fuerza de Rusia ante su propia opinión pública; entre otros elementos). La guerra ha tenido un grave impacto en la población civil, especialmente en términos de desplazamiento forzado. La guerra transcurre en paralelo a un proceso de paz con negociaciones en diversos niveles y formatos.	

El conflicto armado en el este Ucrania se mantuvo en niveles de violencia similares a los de 2016, mientras el proceso de resolución del conflicto continuó estancado. La guerra causó en torno a 600 víctimas

mortales, incluyendo fuerzas de seguridad ucranianas, combatientes de Donetsk y Lugansk y civiles. La cifra de civiles fallecidos se acercó al centenar (98, según el balance de ACNUDH de hasta mediados de noviembre), similar a 2017 (92 civiles fallecidos). Además, en torno a 2.000 personas resultaron heridas –450 de ellas civiles. Además, 239.075 personas de origen ucraniano continuaban en situación de refugio o similar al refugio, y 1,8 millones seguían desplazadas en Ucrania, según el último balance de ACNUR, referente a 2016. **La situación de seguridad fue inestable y volátil, con recurrentes violaciones del alto el fuego** de Minsk y de los altos el fuego adicionales que se pactaron durante el año en abril, junio, agosto y finales de diciembre, tras una fuerte escalada ese mes. La misión de observación de la OSCE registró cerca de 400.000 violaciones del alto el fuego y cerca de 4.000 casos de armamento prohibido por los acuerdos de Minsk. Entre las principales causas de víctimas civiles por el conflicto en 2017, cabe mencionar, por una parte, la proliferación de minas, restos explosivos, armas trampa y artefactos explosivos improvisados y, por otra parte, los bombardeos.⁴² Además, la ONU documentó uso de la violencia sexual en el marco del conflicto, la mayoría de casos en contexto de privación de libertad por las fuerzas gubernamentales o los grupos armados, principalmente perpetrada entre 2014 y 2015, si bien ACNUDH siguió recibiendo testimonios que señalaban la continuación de violencia sexual en la línea de contacto y en Crimea.⁴³ Durante el año, la violencia más intensa se concentró en torno a Avdiivka, Yasynuvata y el aeropuerto de Donetsk; así como el sur y sureste de Svitlodarsk (Donetsk); este de Mariúpol (Donetsk); oeste, suroeste y norte de Horlivka (Donetsk); y áreas junto a Popasna y Pervomaisk, en Lugansk. A finales de año la OSCE advirtió de que los actores armados seguían desplegados muy cerca unos de otros.

La ONU expresó preocupación por el impacto de las hostilidades sobre la población y las periódicas escaladas de violencia junto a infraestructura de suministros de agua, electricidad y gas, con impactos humanitarios y riesgos medioambientales. A lo largo de 2017 se registraron 135 incidentes en que quedaron dañadas instalaciones de saneamiento y tuberías de agua, según UNICEF. Por otra parte, se incrementó la tensión política y social relacionada con el conflicto en diversos momentos. El Gobierno formalizó en marzo el bloqueo de las líneas ferroviarias que conectan con Donetsk y Lugansk, impuesto desde enero por sectores nacionalistas ucranianos y tras el cual las autoridades de Donetsk y Lugansk impusieron la nacionalización de empresas ucranianas en las áreas bajo su control. Por otra parte, en Lugansk, dimitió en noviembre el líder de la región, Igor Plótnitski, tras una escalada de lucha interna de poder, que implicó despliegue de hombres armados en la ciudad, bloqueo de edificios

administrativos y despliegue de vehículos militares. No obstante, el Gobierno ruso afirmó que la situación era de continuidad. Durante el año la ONU siguió documentando violaciones de derechos humanos a ambos lados de la línea de contacto, así como en Crimea. Pese al estancamiento en el proceso de paz se produjeron algunos avances, como el intercambio a final de año de 300 presos de Ucrania, Donetsk y Lugansk, el mayor hasta la fecha.

Rusia y Cáucaso

Rusia (Daguestán)	
Inicio:	2010
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Daguestán, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)
Intensidad:	1
Evolución:	Fin

Síntesis:

Daguestán, la república más extensa, poblada y con mayor diversidad étnica del norte del Cáucaso, afronta desde finales de los años noventa un incremento de la conflictividad. La insurgencia armada de corte islamista salafista, que defiende la creación de un Estado islámico en el norte del Cáucaso, se enfrenta a las autoridades locales y federales, en un contexto de atentados periódicos y operaciones de contrainsurgencia. La oposición armada se ha articulado en torno a diversas estructuras, como la red de unidades armadas y de carácter islamista conocida como Sharia Jammát, y posteriormente a través de Vilayat Daguestán, ambas integradas en la insurgencia del norte del Cáucaso (Emirato Caucásico). A partir de finales de 2014 diversos comandantes de Daguestán y el norte del Cáucaso proclamaron su lealtad a ISIS, escindiéndose de Emirato Caucásico y estableciendo una rama caucásica vinculada a ISIS (Vilayat Kavkaz). Además, una parte de la insurgencia se ha desplazado a Siria e Iraq, uniéndose a diversos grupos armados. La violencia armada en Daguestán es resultado de un cúmulo de factores, incluyendo la regionalización de la insurgencia islamista procedente de Chechenia así como el clima local en Daguestán de violaciones de derechos humanos, a menudo enmarcadas en la “lucha contra el terrorismo”. Todo ello en un contexto social y político frágil, de malestar social por los abusos de poder y la corrupción y los elevados índices de desempleo y pobreza, pese a la riqueza de recursos naturales. A ello se añaden tensiones interétnicas, rivalidades por el poder político y violencia de corte criminal.

Se redujo de manera significativa la violencia en la república de Daguestán, alcanzando niveles inferiores a los de conflicto armado, siguiendo la tendencia de reducción de los últimos años. Durante el año, medio centenar de personas murieron y en torno a una decena

42. OHCHR, *Report on the human rights situation in Ukraine. 16 May to 15 August 2017*, OHCHR, 12 de septiembre de 2017; y OHCHR, *Report on the human rights situation in Ukraine. 16 August to 15 November 2017*, OHCHR, 12 de diciembre de 2017.

43. OHCHR, *Conflict Related Sexual Violence in Ukraine, March 2014 to 31 January 2017*, OHCHR, 16 de febrero. Véase el capítulo 4 (Género, paz y seguridad)

resultaron heridas en incidentes vinculados al conflicto entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia islamista, según el balance del Caucasian Knot. El balance acentúa la reducción de víctimas de años anteriores (136 víctimas mortales en 2016, 111 en 2015, 188 en 2014, 341 en 2013, 405 en 2012, 423 en 2011). Aun así, se mantuvieron las llamadas de alerta sobre el riesgo de futuros incrementos de violencia asociados al retorno de insurgentes originarios del norte del Cáucaso que han combatido en Siria e Iraq. Según el Ministerio de Interior daguestaní, en torno a 1.200 personas de Daguestán combatían en las filas de ISIS, de un total de en torno a 4.000 combatientes de Rusia, incluyendo sectores de la diáspora. Durante el año se produjeron diversos incidentes de seguridad, incluyendo tiroteos en puestos de control y enfrentamientos en el marco de operaciones antiterroristas. Como en años anteriores, se produjeron violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones de diversos ciudadanos y de familiares de personas acusadas de ser combatientes. Además, las autoridades mantuvieron la práctica de llevar a cabo redadas y detenciones masivas de creyentes salafistas, durante el rezo o a la salida de mezquitas en diversos distritos, liberados posteriormente. Entre estos hechos, las autoridades arrestaron a 30 fieles en una mezquita en la capital a principios de junio y días después arrestaron a otras 90 personas en redadas en mezquitas y cafeterías. En agosto, una quincena de personas fueron arrestadas en una mezquita y liberadas. A finales de ese mes, otros 17 creyentes fueron detenidos tras el rezo y posteriormente liberados. 25 fieles de varias mezquitas de la capital y del distrito de Jasaviurt fueron trasladados a una comisaría a principios de noviembre. También se produjeron detenciones de personas acusadas de ser miembros de ISIS. A su vez, algunos de los incidentes de violencia durante el año fueron reivindicados por ISIS, como un ataque en agosto, en que murió un policía. En el plano político, el gobernador de Daguestán, Ramazan Abdulatipov, dimitió de su cargo, y fue sustituido por Vladimir Vasiliyev, designado por el presidente ruso en octubre.

Sudeste de Europa

Turquía (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

El PKK, creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para

reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imrali 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años 80 ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Turquía y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

Se redujo significativamente la mortalidad asociada al conflicto entre Turquía y el PKK, tras un 2016 de grave violencia urbana y rural. No obstante, se mantuvieron elevados niveles de militarización y tensión social y política, bajo el paraguas del estado de emergencia, renovado en abril y octubre, y la polarización asociada al referéndum constitucional.⁴⁴ El balance de fallecidos fue de unos 800 (1.900 en 2016), según International Crisis Group, de los cuales el 66% eran combatientes del PKK, 21% fuerzas de seguridad y 13% civiles (45%, 34% y 14%, respectivamente, junto a un 7% de afiliación desconocida en 2016). Además, 57.925 personas con nacionalidad turca estaban en situación de refugio o similar, y 23.228 esperan respuesta a su petición de asilo, según el último balance de ACNUR, referente a 2016. El Gobierno intensificó las operaciones militares en el invierno de 2016-2017 en áreas del sudeste, y en marzo lanzó una macrooperación militar en la provincia de Diyarbakir, con el despliegue de 7.000 efectivos, mientras continuó la declaración de zonas de seguridad especial. El PKK redujo los ataques en el periodo previo al referéndum de abril, mientras los reanudó en meses posteriores, incluyendo contra civiles, como varios cargos locales del partido oficialista AKP. El liderazgo del PKK anunció en junio que se habían incrementado las acciones de la guerrilla, y en septiembre que había tomado prisioneros a dos cargos de alto rango de los servicios de inteligencia turcos (MIT) en el norte de Iraq, junto a otros funcionarios del MIT. Entre otros hechos de violencia, un ataque del PKK con bomba contra un autobús policial en Mersin en octubre causó 18 heridos. También el grupo armado kurdo TAK amenazó con ataques contra lugares turísticos.

Turquía intensificó su lucha contra el PKK dentro de Turquía y en los países vecinos. Como parte de ello,

44. Véase el resumen sobre Turquía en el capítulo 2 (Tensiones).

el Ejército bombardeó por primera vez posiciones del PKK en Sinjar (norte de Iraq), causando también bajas de peshmergas kurdoiraquíes. Turquía incrementó en agosto su presencia militar en la frontera con la región kurda de Afrin (Siria) –bajo control de las YPG/YPJ, vinculadas al PKK–, y acordó con Irán ese mismo mes reforzar el control de su frontera mutua, con la construcción de una barrera. En octubre lanzó una operación militar terrestre contra el PKK en el norte de Iraq, la primera desde 2008. Ese mes, el Gobierno advirtió contra las posibilidades de un corredor en Siria que conecte Afrin con otras zonas sirias bajo control kurdo, amenazando con adoptar las medidas necesarias para impedirlo. Las amenazas se produjeron en un contexto de escalada de la tensión entre Turquía y EEUU, por el apoyo militar estadounidense a las YPG. En los últimos meses del año, Turquía también anunció que las operaciones de gran escala contra el PKK continuarían en invierno, llegando a afirmar en diciembre que el final del PKK estaba muy cerca. Durante el año continuaron las detenciones de políticos, periodistas y activistas del movimiento kurdo, con cientos de personas en prisión. El Estado mantuvo la intervención directa de 94 de 102 municipalidades kurdas del BDP.

Turquía intensificó su lucha contra el PKK dentro de Turquía y en la región, si bien el balance de víctimas mortales asociado al conflicto disminuyó de forma significativa respecto a 2016

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen (al-houthistas)	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Irán
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría shíi, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se ha cobrado miles de víctimas

mortales y ha provocado también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis han fracasado y las treguas suscritas en los últimos años se han roto sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. En un contexto de internacionalización, el conflicto ha ido adquiriendo tintes sectarios y una dimensión regional.

La situación en Yemen siguió deteriorándose en 2017, con un gravísimo impacto en la población civil, en un año marcado por la desaparición de uno de los actores clave del conflicto armado y hombre fuerte del país durante más de tres décadas, el ex presidente Alí Abdullah Saleh. La violencia causó centenares de víctimas durante el año, aunque no era posible precisar la cifra definitiva. La ONU continuaba utilizando como referencia el balance que barajaba el año anterior, de al menos 10.000 personas fallecidas desde la intensificación de las hostilidades en marzo de 2015, aunque este número se consideraba como una estimación a la baja. Además de las muertes directas de civiles y combatientes, el

conflicto continuó teniendo otras severas consecuencias, precarizando aún más la frágil economía del país –el más pobre del mundo árabe– y convirtiendo a **Yemen en escenario de la peor crisis humanitaria a nivel mundial. Al finalizar 2017 diversas ONG y agencias de la ONU advertían que 22,2 millones de yemeníes requerían asistencia, 3,4 millones de personas más que el año anterior.** De este total, 11,3 millones necesitaba ayuda urgente para sobrevivir. UNICEF y OCHA alertaron especialmente sobre el impacto del conflicto en niños y niñas, ya que 1,8 millones de menores de cinco años estaban malnutridos –incluyendo unos 400.000 que padecían desnutrición severa– y casi dos millones no se estaban escolarizando. A esto se suma que las condiciones creadas por el conflicto facilitaron la expansión de un brote de cólera que hasta finales de año ya había contagiado a un millón de personas y provocado la muerte a más de 2.000, en el que ha sido considerado como el peor brote de esta enfermedad en la historia contemporánea. Las cifras de desplazamiento forzado (principalmente interno), en tanto, se mantenían en torno a los tres millones de personas.

A lo largo del año las hostilidades enfrentaron principalmente a la coalición internacional liderada por Arabia Saudita que apoya al depuesto presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi y a las fuerzas al-houthistas, en alianza con los sectores próximos al ex mandatario Saleh. Como en años previos, el conflicto afectó diversas

zonas del país, transcurrió en paralelo a otras dinámicas de tensión y violencia –como las aspiraciones secesionistas de sectores del sur del país⁴⁵ y la presencia en el territorio de una filial de al-Qaeda e ISIS–;⁴⁶ y se vio influido por las tensiones regionales entre Arabia Saudita e Irán. Durante 2017 los frentes más activos de la disputa fueron diversos puntos de la costa del Mar Rojo –entre ellos el puerto de Hodeida, en la provincia del mismo nombre, y Mokha city, en la provincia de Taiz–; las regiones del norte, fronterizas con Arabia Saudita –Hajja, Saadah y al-Jawf–; y la capital yemení, Sanaa, y sus alrededores. **Algunas de las ofensivas causaron numerosas víctimas civiles, en especial como consecuencia de ataques aéreos en áreas residenciales, zonas próximas a mezquitas y mercados.** Las fuerzas al-houthistas atacaron zonas fronterizas de Arabia Saudita y también lanzaron misiles con capacidad de alcanzar la capital, Riad, que fueron interceptados por las fuerzas saudíes. Riad denunció que los misiles lanzados por los al-houthistas habían sido suministrados por Irán, acusación que fue apoyada por EEUU y que estaba siendo investigada por la ONU. Arabia Saudita también acusó a Hezbollah de dar entrenamiento a los al-houthistas. Como respuesta a estas acciones, a principios de noviembre la coalición liderada por Arabia Saudita impuso un férreo bloqueo al puerto de Hodeida, sitio estratégico para la entrada de suministros a Yemen, un país que importa más del 90% de los alimentos, el combustible y las medicinas que consume. Riad mantuvo el cerco durante varias semanas y no lo levantó hasta finales de diciembre, ante las crecientes críticas internacionales que denunciaron que el bloqueo estaba agravando aún más la crisis humanitaria.

Los bandos en conflicto también exhibieron fracturas internas, complejizando aún más el panorama de violencia. Así, se produjeron choques entre partidarios de Hadi y sectores yemeníes del sur del país apoyados por EAU. La ruptura más relevante, sin embargo, se produjo en el bando de los al-houthistas y Saleh, poniendo fin a una alianza de conveniencia vigente desde 2014, cuando el ex presidente dio apoyo a sus antiguos adversarios para que controlaran Sanaa y expulsaran del poder a Hadi. Los roces en este bando se intensificaron desde mediados de año y desembocaron en una lucha abierta en el último trimestre, que culminó en diciembre con **el asesinato de Saleh por parte de fuerzas al-houthistas después de que el ex mandatario se mostrara públicamente dispuesto a cambiar de bando y a dialogar con los saudíes.** La coalición encabezada por Riad intensificó entonces las ofensivas en Yemen, en un aparente intento por aprovechar la desestabilización en el frente al-houthista, motivando críticas internacionales por el impacto de estos ataques

Las luchas internas en los distintos bandos en conflicto en Yemen complejizaron el panorama de violencia en el país y derivaron en el asesinato del ex presidente Saleh por los al-houthistas al finalizar el año

en la población civil. Según datos de la ONU, sólo entre el 6 y el 28 de diciembre unos 225 civiles habían fallecido a causa de la violencia. El conflicto acababa así el año en medio de una escalada. Cabe destacar que en septiembre la ONU aprobó la puesta en marcha de una investigación internacional sobre los abusos perpetrados por los diferentes bandos en pugna en Yemen. Durante 2017, la situación en Yemen también motivó críticas a países como EEUU, Reino Unido o España por continuar suministrando armas a Riad a pesar de las denuncias contra la coalición en sus acciones en Yemen. Tras la asunción del Gobierno de Donald Trump, EEUU también adoptó un papel más activo en su apoyo a los saudíes en la ofensiva en Yemen, intensificando su apoyo logístico en las operaciones.

Yemen (AQPA)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, AQPA/Ansar Sharia, ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, EAU, milicias tribales, milicias al-houthistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Síntesis:	Afectado por múltiples conflictos y desafíos internos, en los últimos años el Gobierno yemení ha enfrentado una fuerte presión internacional –sobre todo de EEUU y Arabia Saudita– para dedicar esfuerzos a la lucha contra al-Qaeda en el país, especialmente tras la fusión de la rama saudí y yemení de la organización que a comienzos de 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). Si bien la presencia de al-Qaeda en Yemen se registra desde los noventa –con episodios de alta repercusión como el atentado suicida contra el barco de guerra estadounidense USS Cole en 2000–, se ha observado una escalada en sus acciones. En diciembre de 2009 el fallido atentado contra un avión que se dirigía a Detroit centró la atención internacional en AQPA, considerado por EEUU como una de las principales amenazas a su seguridad. Aprovechando el vacío de poder en Yemen en el marco de la revuelta contra el presidente Alí Abdullah Saleh, AQPA amplió sus operaciones en el sur del país y las zonas bajo su control. A partir de 2011 grupo comenzó a realizar algunas de sus acciones bajo la denominación Ansar Sharia (Partidarios de la Ley Islámica) y desde mediados de 2014 AQPA se vio crecientemente involucrada en enfrentamientos con milicias al-houthistas que avanzaron posiciones desde el norte de Yemen. AQPA ha aprovechado el clima de inestabilidad y la escalada de violencia en el país a partir de marzo de 2015 –en el marco del conflicto entre los al-houthistas y las fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi– y se ha enfrentado a ambos bandos. Este escenario también ha favorecido el ascenso de ISIS, que ha comenzado a reivindicar diversas acciones en el país.

45. Véase el resumen sobre Yemen (sur) en el capítulo 2 (Tensiones).
46. Véase el resumen sobre Yemen (AQPA) en este capítulo.

El conflicto protagonizado por AQPA y, más recientemente, por la filial de ISIS en Yemen (ISIS/Provincia Yemen) continuó activo durante el año en las regiones del centro, sur y este del país y transcurrió en paralelo a las hostilidades vinculadas a la disputa entre las fuerzas al-houthistas y las del depuesto presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi, que se concentraron en la zona norte y en la costa occidental.⁴⁷ La contienda presentó menores niveles de letalidad respecto al año anterior, aunque las cifras definitivas son difíciles de precisar debido a la falta de acceso a la información sistematizada sobre el impacto del conflicto. Recuentos parciales a partir de informaciones de prensa permiten concluir que, como mínimo, unas 170 personas fallecieron a causa de este conflicto durante el año. A lo largo del período ISIS y AQPA reivindicaron un menor número de ofensivas y ataques explosivos de alto impacto en comparación con 2016. El año **2017 se caracterizó más bien por una intensificación de las operaciones de EEUU en Yemen contra las posiciones de AQPA y de ISIS, que se triplicaron respecto al año anterior.** Según informó en diciembre el Comando Central de EEUU, las fuerzas estadounidenses lanzaron más de 120 ofensivas a lo largo de 2017 (frente a los 38 ataques con aviones no tripulados en 2016 y los 23 de 2015). La ampliación de la campaña de EEUU en Yemen tuvo lugar después de un accidentado episodio ocurrido a principios de año. Días después de asumir la presidencia de EEUU, Donald Trump autorizó el envío de comandos militares (SEAL) contra un complejo de AQPA en la provincia de al-Bayda (sur). La ofensiva –la primera acción en terreno de fuerzas estadounidenses en Yemen que ha trascendido a la luz pública desde 2014– derivó en duros enfrentamientos y acabó con la muerte de uno de los miembros del comando, además de 14 combatientes de AQPA y una treintena de civiles, incluyendo ocho mujeres y siete menores.

En los meses siguientes, EEUU lanzó otra serie de ataques aéreos contra posiciones de al-Qaeda y también de ISIS –grupo que también ha intentado capitalizar la inestabilidad y vacío de poder en Yemen–, principalmente en las provincias de al-Bayda, Shabwah y Marib. Según informaciones de prensa, comandos estadounidenses habrían participado en operaciones junto con fuerzas yemeníes y tropas de EAU, país que forma parte de la coalición internacional liderada por Riad y que desde 2016 juega un papel activo en la lucha contra AQPA en Yemen. **En agosto, entre 2.000 y 4.000 soldados yemeníes –las cifras varían según las fuentes– apoyados por asesores de EAU y de EEUU, lanzaron una operación para expulsar a AQPA de la provincia de Shabwah,** uno de sus bastiones en el centro-sur de Yemen. Las tropas yemeníes aseguraron haber vencido, pero fuentes locales subrayaron que los combatientes de AQPA evacuaron la zona antes de la operación militar (en un repliegue similar al ocurrido en Mukalla en 2016). En los meses siguientes, las tropas yemeníes anunciaron la captura o muerte de diversos militantes de AQPA en Shabwah y también en la provincia de al-Bayda. AQPA también reivindicó algunas

acciones durante el año, entre ellas una ofensiva con coche bomba y ataque armado contra un campo militar en la provincia de Hadramaut (este) en la que murieron una docena de personas, en junio; o el ataque perpetrado por cinco combatientes suicidas en un control carretero en la provincia de Abyan (sur), en el que fallecieron cuatro soldados. **ISIS, por su parte, también reclamó la autoría de varios ataques contra fuerzas pro-gubernamentales en el puerto de Adén que dejaron 56 muertos en noviembre;** así como un ataque contra el edificio del ministerio de Finanzas de la misma ciudad en el que perdieron la vida otras cinco personas. Cabe destacar que a pesar de la campaña contra AQPA y sus retrocesos en Yemen, analistas de seguridad y militares consideraban al finalizar el año que el grupo estaba lejos de ser derrotado, destacando su resiliencia –según informaciones de prensa, el grupo contaría con unos 3.000 afiliados– y su capacidad para explotar el conflicto y las tensiones sectarias en el país para capturar nuevos reclutas e implantarse en el territorio.

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasam), Israel
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona.

47. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en este capítulo.

La provincia del Sinaí continuó siendo el epicentro del conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad principalmente con el grupo armado ISIS/Provincia Sinaí, aunque también se registraron episodios de violencia en otras zonas del país (Alejandría, Valle del Nilo, alrededores de El Cairo, costa del Mar Rojo, provincia de Ismailia, entre otras) y algunas acciones de menor magnitud fueron perpetradas por otras organizaciones armadas como Ansar al-Islam, Jund al-Islam –presuntamente vinculadas a al-Qaeda– y Hassam –a la que se atribuyen conexiones con los Hermanos Musulmanes. **Durante 2017 persistieron las dificultades para contrastar los datos sobre el impacto de la violencia, pero recuentos informales parciales indican que como mínimo unas 900 personas habrían fallecido a causa del conflicto.** En el Sinaí, las áreas con mayor actividad armada fueron al-Arish, Sheikh Zuweid y al-Barth. A lo largo del año ISIS siguió con sus ofensivas contra las fuerzas de seguridad en forma de tiroteos, atentados explosivos, ataques y emboscadas contra convoyes militares, estaciones policiales y controles en carreteras. Como en años anteriores, ISIS también reclamó la autoría de los disparos de algunos proyectiles hacia Israel. Adicionalmente, ISIS intensificó sus acciones contra cristianos de Egipto, motivando el desplazamiento forzado de más de un centenar de familias de la comunidad copta de la zona norte del Sinaí. En este sentido, una de las ofensivas más destacadas se produjo en abril, cuando dos ataques contra iglesias coptas en el lapso de tres horas –una en Tanta (norte de El Cairo) y otra en Alejandría– causaron la muerte a 48 personas. Los ataques se produjeron días antes del viaje del Papa Francisco a Egipto. El Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi –que durante 2017 continuó siendo objeto de críticas por la situación de derechos humanos en el país–⁴⁸ decretó entonces el estado de emergencia por tres meses, medida que se mantenía vigente al finalizar el año tras ser renovada en julio y octubre. Otra ofensiva de ISIS contra un bus en Minya (sur de El Cairo) dejó 29 víctimas mortales en mayo y motivó acciones aéreas egipcias contra supuestas bases del grupo en Libia.⁴⁹

El episodio más cruento de 2017 –un ataque sin precedentes por magnitud y por su objetivo, y el peor perpetrado por militantes armados en la historia reciente de Egipto– se produjo en noviembre, cuando una ofensiva con bomba y posterior tiroteo a manos de una treintena de milicianos provocó la muerte de 305 personas, incluyendo 27 menores, en una mezquita de Bir al-Bed, norte del Sinaí. La acción –que no fue reivindicada por ningún grupo, pero fue atribuida a ISIS– constituyó el primer ataque a una mezquita. El lugar era frecuentado por sufíes, considerados heréticos por ISIS. Según informaciones de prensa, la comunidad sufí también podría haber sido identificada como un blanco por negarse a cooperar con los militantes que operan en la región. Tras el ataque, el presidente egipcio, Abdel Fatah

al-Sisi llamó a las fuerzas de seguridad a responder con “violencia brutal” y aviones militares lanzaron una serie de ataques contra supuestas posiciones de militantes armados. Las redadas, enfrentamientos y operaciones de las fuerzas egipcias contra combatientes y presuntos miembros de organizaciones armadas causaron decenas de fallecidos, además de numerosas detenciones, a lo largo del año. En este contexto, algunas voces alertaron sobre ejecuciones extrajudiciales en el Sinaí y aseguraron que en algunos casos estas acciones se presentaban como bajas durante operaciones antiterroristas. Human Rights Watch difundió videos sobre esta práctica y denunció un patrón de abusos contra la población del Sinaí por parte de las fuerzas de seguridad.⁵⁰

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Irán, Turquía, PKK
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores: tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU.

Iraq siguió siendo escenario de uno de los conflictos armados de mayor intensidad a nivel global durante 2017, un año marcado por la expulsión de ISIS de Mosul y de la mayor parte de territorio iraquí tras una

48. Véase el resumen sobre Egipto en el capítulo 2 (Tensiones).

49. Véase el resumen sobre Libia en este capítulo.

50. Human Rights Watch, *Egypt: Videos Show Army Executions in Sinai*, 21 de abril de 2017.

campaña en la que participaron principalmente las fuerzas armadas y otros cuerpos de seguridad, milicias chífes (Unidades de Movilización Popular, UMP), combatientes kurdos (peshmergas) y la coalición anti-ISIS liderada por EEUU. Las hostilidades vinculadas a la campaña por Mosul, las operaciones militares en otras zonas del país, así como los ataques y ofensivas suicidas de ISIS en Bagdad y otros puntos de Iraq provocaron la muerte de miles de personas. Al finalizar 2017 los balances estimativos de víctimas todavía eran de carácter parcial y se centraban en las bajas entre la población civil. Según los datos de la misión de la ONU en Iraq (UNAMI), al menos 3.300 civiles habían fallecido a causa de la violencia durante el año, aunque advertía que esta cifra debía considerarse como un “mínimo absoluto” debido a las dificultades para verificar la información sobre la letalidad del conflicto. El balance ofrecido por la organización Iraq Body Count (IBC) era muy superior y situaba en **al menos 13.187 el número de civiles muertos a causa de la guerra en el país en 2017**. IBC destacó la provisionalidad de la cifra, ya que la tarea de documentar las bajas en Mosul y sus alrededores –donde se descubrieron fosas comunes de víctimas de ISIS y continuaban las tareas de extracción de cadáveres de entre las ruinas– continuaba y aún tardaría meses. El balance final de víctimas civiles de 2017, por tanto, podría mantenerse en línea con lo registrado en años previos –16.361 en 2016, 17.518 en 2015, 20.218 en 2014–, en el marco de una significativa intensificación de la violencia en los últimos cuatro años.

El elevado número de víctimas civiles del conflicto motivó llamadas de atención de la ONU y organizaciones de derechos humanos durante todo el año. Amnistía Internacional denunció que unos 5.800 civiles habían perdido la vida en las ofensivas de las fuerzas iraquíes y la coalición liderada por EEUU durante la campaña en Mosul, evidenciando la falta de precauciones para no dañar a la población. Este tema tuvo especial notoriedad tras un ataque aéreo estadounidense en la ciudad que causó la muerte a más de 150 civiles el 17 de marzo (un grupo de personas se había refugiado en un edificio de los combates entre ISIS y las fuerzas de seguridad iraquíes). En octubre, **Washington reconoció que su campaña contra ISIS en Iraq y Siria había causado la muerte de al menos 800 civiles desde 2014. Sin embargo, otras fuentes apuntaban a cifras muy superiores**. Según la organización Airwars, 5.961 civiles habían muerto en el mismo período; mientras que una investigación del diario The New York Times sobre 150 zonas afectadas por los bombardeos de la coalición en Iraq concluyó que habían matado 31 veces más civiles de lo que se ha informado oficialmente. **Informes de la misión de la ONU en Iraq (UNAMI) y el Alto Comisionado para los**

Derechos Humanos de la ONU, en tanto, alertaron que el mayor número de víctimas civiles del conflicto era producto de las políticas deliberadas y sostenidas de ISIS contra la población. Durante 2017, sus prácticas incluyeron ofensivas indiscriminadas; uso deliberado de civiles como escudos humanos para proteger a sus combatientes, bases y otras ubicaciones estratégicas; violencia contra personas que intentaban huir de los territorios controlados por ISIS; represalias contra quienes no acataban las rígidas doctrinas impuestas por el grupo armado; y agresiones contra líderes religiosos, dirigentes comunitarios y profesionales médicos y de la educación, en particular mujeres; así como violencia sexual, sobre todo contra mujeres y menores de minorías étnicas y religiosas.⁵¹

En lo que respecta a la evolución de los frentes de batalla, cabe destacar que la campaña de Mosul – iniciada en octubre de 2016– fue el principal foco de hostilidades durante el primer semestre del año. Las ofensivas se centraron en la zona oeste de la urbe y en las localidades de los alrededores, en un intento por bloquear las rutas de escape y de suministro de ISIS.

En este período el grupo armado continuó reivindicando ataques y ofensivas suicidas en otras zonas del país –en especial Bagdad, pero también en otras zonas como Nasiriyah o Kirkuk. **En julio, tras meses de intensa violencia, el Gobierno iraquí anunció la derrota de ISIS en Mosul, en un golpe estratégico y simbólico para el grupo armado que en 2014 había declarado el califato desde esta ciudad**, la segunda del país. La pérdida del principal bastión de ISIS en Iraq, donde impuso su férreo control durante tres años, fue el preludio de la caída, también en 2017, de Raqqa, la capital del grupo armado en Siria.⁵² En

el segundo semestre del año continuaron los combates en diversas localidades de los alrededores de Mosul y en ciudades del noroeste, en el área próxima a la frontera con Siria. En diciembre, y después de tres años de cruentas hostilidades, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, declaró el fin de la lucha contra ISIS, que en su momento de mayor poderío llegó a controlar un tercio del territorio del país. Pese a esta declaración de “victoria final” sobre ISIS, al acabar el año el Gobierno iraquí enfrentaba múltiples retos. Entre ellos, la posibilidad de que ISIS se mantenga activo en el país a través de células de combatientes que lancen una guerra de guerrillas y operaciones suicidas; el incierto y polémico futuro de las milicias shífes apoyadas por Irán que tuvieron una activa participación en la campaña contra ISIS –EEUU y otros países occidentales, como Francia, pidieron el desmantelamiento de las UMP–; la investigación de abusos perpetrados por los distintos actores armados, la ingente tarea de reconstrucción en las áreas que estuvieron bajo dominio de ISIS; la

Después de meses de intensa violencia, el Gobierno iraquí anunció en julio la derrota de ISIS en Mosul, ciudad desde donde el grupo armado había proclamado la instauración de un califato en 2014

51. UNAMI-OHCHR, *Report on Human Rights in Iraq, January to June 2017*, 2017.

52. Véase el resumen sobre Siria en este capítulo.

situación de los 3,2 millones de iraquíes desplazados a causa de la violencia, de miles de personas que estaban siendo forzadas a retornar, y de los 11 millones de personas que requerían asistencia humanitaria al finalizar 2017;⁵³ y la posibilidad de que el nuevo escenario abra paso a una nueva escalada de tensiones entre las comunidades sunníes, chiíes y kurdas del país. De hecho, durante 2017 se vivió una creciente tensión entre las autoridades de Bagdad y el Gobierno Regional del Kurdistan que derivaron en un importante despliegue militar de tropas iraquíes y sus milicias aliadas en territorios en disputa entre Bagdad y Erbil.⁵⁴ Turquía también atacó posiciones del PKK en Iraq.⁵⁵

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ⁵⁶
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, Ahfad al-Sahaba knaf Bayt al-Maqdis (vinculado a ISIS)
Intensidad:	1
Evolución:	=
Síntesis:	El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinicia en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU divide el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclama el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 Israel se anexiona Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasan a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupa Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

El conflicto armado palestino-israelí presentó niveles de violencia similares a años previos, con incidentes que se intensificaron al finalizar el año tras la decisión de EEUU de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Según los datos de OCHA, durante 2017 se registraron 88 muertes directas por el conflicto, de las cuales 75 eran palestinas y 13 israelíes. El balance es ligeramente inferior a los de 2016 y 2015 en los que murieron 122 y en torno a 200 personas, respectivamente. En 2017

los meses más cruentos fueron enero (10 víctimas mortales), julio (14), octubre (13) y diciembre (14). En enero se produjo el episodio con mayor número de víctimas israelíes, cuando un palestino residente en Jerusalén dirigió su camión contra un grupo de soldados, causando la muerte de cuatro. En julio tres palestinos con ciudadanía israelí mataron a tiros a dos policías israelíes a la entrada de la Explanada de las Mezquitas, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, tras lo cual fueron abatidos. El episodio motivó que las autoridades israelíes instalaran detectores de metales en las entradas de la explanada, lo que alentó protestas en Jerusalén, Cisjordania y Gaza ante lo que se consideró como un intento de Israel por incrementar su control del lugar. En las semanas siguientes se produjeron diversos hechos de violencia –seis palestinos murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Cisjordania, tres israelíes fallecieron tras ser acuchillados en el asentamiento de Halamish– e Israel detuvo a decenas de palestinos. En este contexto, la Autoridad Palestina (AP) anunció la suspensión de la coordinación de seguridad con Israel, pero en la práctica la entente continuó. En octubre se produjo otro episodio destacado, después de que las fuerzas israelíes destruyeran un túnel en Gaza provocando la muerte de entre siete y 12 palestinos (la cifra varía según las fuentes), entre ellos un comandante de la Yihad Islámica y dos miembros de Hamas.

La mayor escalada de violencia se produjo a partir del 6 de diciembre, después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara que reconocía a Jerusalén como capital de Israel y que trasladaría su embajada a esta ciudad, desafiando el consenso internacional en este tema. La medida recibió duras críticas a nivel internacional, provocó masivas protestas palestinas y alentó disparos de cohetes desde Gaza a los que Israel respondió con ataques aéreos. Según los datos de OCHA, desde el 6 de diciembre y hasta el 30 de enero de 2018 una veintena de palestinos y un israelí habían muerto, y cerca de 5.000 palestinos habían resultado heridos, principalmente a causa de inhalación de gas, balas de goma y disparos. En este contexto, la AP declaró que no aceptaría a EEUU como mediador y pidió a la ONU que se hiciera cargo del proceso de paz. Cabe destacar que **durante el año Israel también mantuvo su política de ampliación de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos, a pesar de la resolución de la ONU que a finales de 2016 condenó esta práctica** y que fue aprobada con la anuencia del Gobierno de Barack Obama. Cabe mencionar también que durante el año la difusión internacional del caso de la joven palestina Ahd Tamimi, de 16 años, arrestada tras confrontar y abofetear a un soldado israelí, llamó la atención sobre la situación de menores palestinos en cárceles israelíes. Según fuentes palestinas, cerca

53. UNOCHA, *Humanitarian Bulletin: Iraq, November 2017*, 8 de diciembre de 2017.

54. Véase el resumen sobre Iraq (Kurdistán) en el capítulo 2 (Tensiones).

55. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.

56. A pesar de que “Palestina” (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como “internacional” y no como “interno” por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

de 4.000 menores habían sido detenidos por las fuerzas israelíes desde octubre de 2015 y unos 300 permanecían en cárceles israelíes al finalizar 2017.

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias PYD/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio, a nivel internacional el régimen se ha caracterizado por sus políticas hostiles hacia Israel, y en el plano interno por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del *establishment*, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa se ha complejizado y ha adquirido una creciente dimensión regional e internacional.

El conflicto armado en Siria continuó caracterizándose por sus complejas dinámicas de violencia y numerosos frentes de batalla; por la diversidad de actores armados locales, regionales e internacionales involucrados en la contienda; y por sus múltiples y severos impactos en la población civil. Aunque durante 2017 se registró una cierta reducción en las hostilidades en algunas zonas del país, la guerra siguió presentando altos niveles de intensidad y se cobró la vida de miles de personas durante el año. Las dificultades para contabilizar y verificar el número total de víctimas mortales se mantuvieron; pero, pese a ello, algunas organizaciones con redes de información en Siria ofrecieron balances estimativos. **Según la Syrian Network for Human Rights (SNHR), durante el año al menos 10.000 civiles murieron como consecuencia del conflicto** –incluyendo unas 1.500 mujeres y 2.300

menores–, una cifra relativamente menor respecto a la ofrecida por esta misma entidad para el año 2016 (17.000). En marzo de 2017, coincidiendo con el sexto aniversario del conflicto, el Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) informó que unas 465.000 personas habían muerto desde el inicio de las hostilidades. Del total de víctimas, según SOHR, unas 96.000 serían civiles, mientras que la SNHR eleva este cálculo a más de 200.000 personas desde marzo de 2011. De acuerdo con diversos informes periódicos de la propia ONU, de la Comisión de Investigación Independiente sobre Siria y de diversas ONG, el país continuó siendo escenario de numerosas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, incluyendo asedios, desplazamientos forzados, violencia sexual, instrumentalización de la ayuda humanitaria, destrucción de infraestructuras civiles, torturas y ejecuciones sumarias. Un informe de Amnistía Internacional dado a conocer en 2017 denunció que en los primeros cinco años del conflicto armado en el país al menos 13.000 opositores habían sido ejecutados, a través de ahorcamientos masivos, en la prisión militar de Saydanya como parte de una estrategia de exterminio de disidentes ordenada por las máximas autoridades del país.

Adicionalmente, durante el año se continuaron denunciando ataques indiscriminados y/o deliberados contra la población por parte de numerosos actores armados implicados en la guerra. Cabe mencionar algunas ofensivas significativas en 2017 como el doble ataque suicida que golpeó el centro de Damasco y causó más de un centenar de víctimas en marzo (entre ellas 43 peregrinos iraquíes shiíes), en una acción perpetrada por Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) –una nueva alianza de fuerzas rebeldes liderada por el grupo Fath al-Sham (antiguo Frente al-Nusra)–; o **el ataque con gas del Gobierno de Bashar al-Assad contra la localidad de Khan Sheikhoun (provincia de Idlib), en manos de las fuerzas rebeldes, que provocó la muerte a más de 80 personas en abril (en su mayoría mujeres y menores)**, que motivó en su momento un bombardeo de EEUU a la base del régimen desde donde fue lanzado el ataque químico. Las fuerzas de la coalición internacional liderada por Washington también fueron señaladas por su responsabilidad en diversos ataques con víctimas civiles en territorio sirio. EEUU admitió que desde agosto de 2014 y hasta octubre de 2017 sus campañas contra ISIS habían provocado la muerte de al menos 800 civiles en Siria e Iraq, pero otras fuentes aseguran que la cifra sería mucho mayor y que podría rondar las 6.000 personas.⁵⁷

Como en años previos, durante 2017 la guerra de Siria se mantuvo activa en múltiples frentes y transcurrió en paralelo a gestiones diplomáticas que arrojaron escasos resultados. La decisión de crear cuatro zonas de desescalada en Siria tras un acuerdo

57. Véase el resumen sobre Iraq en este capítulo.

entre Rusia, Turquía e Irán en Astaná (Kazajistán), en mayo –en el marco del proceso paralelo a las negociaciones auspiciadas por la ONU–, favoreció una leve disminución de los enfrentamientos. No obstante, su evolución y consiguiente impacto en la población civil fue desigual. En la zona sur de Siria, por ejemplo, se observó una reducción en las hostilidades; pero en otras áreas, como la provincia de Idlib y el noroeste de Siria hubo una disminución inicial que luego derivó en un nuevo incremento de la violencia. Teniendo en cuenta este trasfondo, **cabe destacar al menos tres dinámicas del conflicto durante 2017: el impacto de la suscripción de una serie de treguas locales, la intensificación de la violencia en Ghouta Oriental y la expulsión de ISIS de Raqqa.** Diversos acuerdos de cese al fuego suscritos a nivel local entre el Gobierno sirio y grupos armados a lo largo del año incluyeron disposiciones relativas a la evacuación de población que provocaron el desplazamiento de miles de civiles, que al finalizar el año sobrevivían en precarias condiciones. Diversas voces alertaron que poblaciones que habían sufrido graves condiciones de asedio e intensos bombardeos y otras formas de violencia no tuvieron más alternativa que abandonar sus hogares en masa en el marco de estos acuerdos de “reconciliación” y denunciaron que el régimen estaba utilizando una estrategia que no ofrecía más opción que rendirse o morir de hambre.⁵⁸ Según datos de la ONU, la cifra de población civil afectada por situaciones de asedio en Siria se redujo en medio millón de personas durante 2017. No obstante, hacia finales de año otro medio millón continuaba viviendo en una decena de áreas asediadas. 95% de ellas permanecían acosadas por las fuerzas del Gobierno en la zona de Ghouta Oriental, suburbio de Damasco en manos de la oposición. La violencia en esta área estuvo presente durante todo el año, pero se intensificó a partir del último trimestre convirtiéndola en un escenario que recordaba a la situación vivida en Alepo en 2016. **Al finalizar 2017, unas 390.000 personas permanecían atrapadas en Ghouta sobreviviendo en condiciones extremas,** con graves problemas para acceder a alimentos y medicinas. Raqqa fue otro de los epicentros de la actividad armada en 2017, en especial a partir de mediados de año cuando se intensificó la campaña para expulsar a ISIS de la ciudad, principal bastión del grupo armado en Siria. Tras asumir el control de territorios adyacentes, la coalición de las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF) –lideradas por los combatientes kurdos del YPG y con el respaldo de la alianza internacional encabezada por EEUU– iniciaron una operación para desalojar a ISIS de Raqqa que tardó varios meses y que supuso intensos niveles de

Según estimaciones de la Syrian Network for Human Rights, al menos 10.000 civiles murieron a causa del conflicto en Siria durante 2017

violencia en el área. **Hasta que se declaró la expulsión de ISIS de Raqqa en octubre –un severo golpe al grupo, que durante 2017 también perdió el control de Mosul, en Iraq–, los combates y bombardeos causaron un elevado número de víctimas civiles y motivaron el desplazamiento de casi toda la población de la ciudad.** La destrucción de infraestructuras y la presencia de explosivos en toda el área dificultaban el retorno de los habitantes a la zona, en la que se descubrieron diversas fosas comunes de víctimas de ISIS.

El régimen sirio también compitió con las fuerzas respaldadas por EEUU a la hora de disputar territorios a ISIS y hacia finales de año uno de los frentes más activos en términos de operaciones militares con participación de múltiples actores armados era la provincia de Deir al-Zour (noreste). Según datos de la ONU, sólo entre octubre y noviembre las hostilidades en esta área habían provocado el desplazamiento forzado de casi 400.000 personas. Algunos análisis advertían que el devenir de Deir al-Zour, con amplias zonas

en manos de ISIS, será especialmente determinante para el futuro del grupo y para el curso de la guerra, dada su ubicación estratégica (entre Raqqa y la frontera con Iraq) y por la presencia de los mayores campos de petróleo del país.⁵⁹ A lo largo de todo el año se produjeron otros numerosos enfrentamientos entre diversos actores armados activos en Siria, incluyendo choques entre grupos armados

no gubernamentales de diverso signo –como los combates entre Fath al-Sham y Ahrar al-Sham o Jaish al-Mujahideen a principios de año–, enfrentamientos entre fuerzas del régimen y las SDF apoyadas por EEUU, las acciones de Turquía contra las fuerzas del YPG –en el marco de su disputa con el PKK y de los intentos por evitar una mayor presencia y dominio de elementos kurdos en el norte de Siria y en Iraq–,⁶⁰ o los bombardeos israelíes contra posiciones de Hezbollah en Siria,⁶¹ entre otros. Como resultado de este conjunto de dinámicas de violencia, los niveles globales de desplazamiento forzado a causa del conflicto se mantuvieron en niveles similares a los del año anterior. Así, **se estima que sólo en los primeros nueve meses del año ya se habían producido 1,8 millones de movimientos de personas desplazadas –equivalentes a unas 6.550 cada día–, con muchísimos casos de desplazamientos sucesivos;** mientras que la cifra de refugiados y refugiadas de origen sirio ascendía a 5,5 millones. Otros múltiples indicadores permitían dimensionar la magnitud del impacto del conflicto armado en la población siria. De acuerdo con datos de OCHA de finales de año, 13,1 millones de personas (siete de cada diez personas en el país) requería ayuda

58. Amnesty International, *Syria: ‘Surrender or starve’ strategy displacing thousands amounts to crimes against humanity*, 13 de noviembre de 2017.

59. ICG, *Fighting ISIS: The Road to and Beyond Raqqa*, Middle East Briefing no.53, 28 de abril de 2017.

60. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.

61. Véase el resumen sobre Israel-Siria-Líbano en el capítulo 2 (Tensiones).

humanitaria, de las cuales 5,6 millones la necesitaba de manera urgente.⁶² Los y las menores de edad representaban un 40% de la población necesitada de asistencia. Un 69% de la población siria se encontraba viviendo en condiciones de pobreza extrema. En medio de este dramático panorama, y gracias al apoyo de Rusia e Irán, el régimen continuó perfilándose como vencedor de la contienda. La salida del poder de Bashar al-Assad ha dejado progresivamente de ser un reclamo inmediato de potencias occidentales y Moscú mantenía una gran ascendencia sobre las negociaciones a través del proceso que ha impulsado y que transcurre en paralelo al auspiciado por la ONU. En este contexto, el presidente ruso realizó una visita a Siria a finales de año y, en tono triunfal, anunció el repliegue de tropas rusas de Siria (aunque anuncios similares en el pasado no se cumplieron).

62. UNOCHA, 2018: *Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic*, noviembre de 2017.